

16ª REUNION — 10ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) — Mayo 29 de 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig, Miguel P. Del Pero
y Teodosio F. Pizarro

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
ALFONSIN, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ARANA, Tomás P.
ARIAS, Luis Osvaldo
ARROYO, Ramón F.
AVETA, Francisco O.
AVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALBOA, Hernán A.
BALESTRA (H.), Juan
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BERRINI, Emilio
BO, Angel
BOBILLO, Luis Ignacio
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CAIYO, Carlos Alberto
CANTONI, Angel Serafin
CARDENAS, Juan Carlos
CARO, José Armando
CARREIRA, Emilio
CASTELLAN, Miguel A.
CENTENO, José Isaac
COGGIOLA, Luis S.
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORAL, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
CHEBLE, Francisco R.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, José Eduardo
DEL PERO, Miguel P.
D'AZ O'KELLY, Felipe F.
DI LEO, Amadeo
DOMINCORENA, Horacio O.
DOMINGUEZ, Luis C.
ELENA, Reinaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNANDEZ, José M.

FERNANDEZ, Raúl
FERNANDEZ MENDY, Julio O.
FERNANDEZ NUÑEZ, Isidro
FERRARI, Luis
FERREIRA, Jorge W.
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
FREGA, José
GALEANO, Roberto A.
GARCIA, Horacio
GARCIA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GAROFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Americo
GOMEZ MACHADO, Héctor
GONZALEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIERREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
LOFRE, Emilio
CEJARRAGA, Pablo
LEON, Luis Agustín
LESCANO, Edmundo A.
LILJESTROM, Eduardo R.
LOZANO, Martín
LUCCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José R.
MARSCO, Adalberto O.
MARTINEZ, Ramón S.
MARTINEZ RAYMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.
MENDEZ DOYLE, Abel Victor
MERCADO, José Ignacio
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MCCLINAS, Ricardo F.
MONTE, Ricardo Alvaro
MOR ROIG, Arturo
MOSSET ITURRASPE, Mario
MUJICA, Manuel Martín
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSTIANI, Héctor Francisco
OCAMPO, Carlos E.

OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNANDEZ, Angel H.
PALACIOS, Alfredo L.
PALLIS, Leon
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PENA Y LILLO, Silvestre
PEREZ, Raul
PEREZ GALLART, Alcides B.
PERNASFITT, Horacio
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
PUGLIESE, Juan C.
RASINES, Osvaldo Gregorio
RENE, Jose Maria
RIAL, Oscar
RODRIGUEZ, Rogelio Ramón
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRIGUEZ VAGARIA, Eduardo
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
SAGO, Fayz
SALADO, Francisco A.
SANDLER, Hector R.
SANTA MARIA, Oscar Hipólito
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERU GARCIA, Alberto
TARULLI, Pascual
TORREIRO, Raul
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TROCCOLI, Antonio A.
VACA LOBO, Juan Manuel
VALENTE DE PEREZ FORT, Lidia
VAZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES EN COMISION:

BOGLIANO, Palmiro B.
BUSACCA, Salvador F.
CHRISTE, Jorge J.
MUNIAGURRIA, Camilo
OBREGON, Pedro A.
PIRAGINE NIVEYRO, Fernando
REQUENA, Raúl María

ROBERTO, Mario
RUIZ, José Oscar
SOLARI, Juan Antonio

AUSENTES. CON LICENCIA:

AGUIRRE CAMARA, José
ANTON, Luis
ARRASCAETA, Félix de
BOFFI, Luis L.
CATALAN, Guillermo
COFNEJO LINARES, Juan Carlos
CUERDO, Ramón
GODOY, Ruperto Honorio

LONGHI, Julio P.
MAGGI, José M.
NOUGUES, Isaias J.
SARRULLE, Oscar E.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
TACHELLA, Eliberto S. J.
VACCAREZZA, Eduardo H.
VINALS, Fernando J.

AUSENTES. CON VISO:

BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BILBAO, Saturnino

CASAS, David Jorge
COSTANTINO, Adolf. I.
DÍAZ, Diógenes C.
FIGUEROA, Jaime Hernán
GARAY, Fermín J.
LLORENS, Héctor
PEREIRA, Antonio
POSSE, Melchor S.
RITACCO, Araldo A.
ROIS, Roberto
ROMEU VERDIER, Gabriel
SCALITER, Juan

SUMARIO

- 1.—**Manifestaciones en minoría.** (Pág. 698.)
- 2.—**Apertura de la sesión.** Convocatoria a sesión especial. Se aprueba. (Pág. 699.)
- 3.—**Salario vital, mínimo y móvil.** Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación del Trabajo (especializada) y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo y de varios señores diputados sobre dicho asunto. (Pág. 699.)
- 4.—**Invitación al miembro de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña don Christopher Mayhew** a ocupar un asiento en el recinto de la Honorable Cámara. (Pág. 716.)
- 5.—**Salario vital, mínimo y móvil.** Continúa la consideración del asunto que se registra en el número 3 de este sumario. (Pág. 716.)
- 6.—**Moción del señor diputado Pugliese** sobre orden de la sesión. Se aprueba. (Pág. 739.)
- 7.—**Salario vital, mínimo y móvil.** Continúa la consideración del asunto que se registra en los números 3 y 5 de este sumario. (Pág. 739.)
- 8.—**Apéndice:**

Inserción. (Pág. 765.)

—En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de mayo de 1964, a la hora 15 y 35:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Elena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Elena.

Sr. Elena. — Deseo que la Presidencia me informe cuántos diputados hay en la casa y cuántos en el recinto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En la casa hay 91 señores diputados. Se va a verificar cuántos hay en el recinto.

Sr. Elena. — Bien, señor presidente. No deseo que se malogre esta reunión; estoy seguro de que no hay un solo señor diputado que no tenga es-

pecial interés en contribuir con su presencia a que se inicie la sesión de la fecha para poder considerar así un problema cuya solución el pueblo de nuestro país exige en esta hora.

Como lo dije esta mañana, pienso que por la seriedad del problema a tratarse, seguramente en los distintos bloques que integran este cuerpo los señores diputados están considerando y definiendo su pronunciamiento. Yo solicito desde esta banca que se prosiga llamando hasta tanto se logre quórum para poder entrar a considerar este problema.

Y también una vez más digo —lo que no va en detrimento de ninguno de los compañeros que integran este cuerpo— que los señores diputados deben preocuparse un poco más. Confío en que los primeros fríos de esta temporada no contribuyan a la inasistencia de los señores legisladores. Es preciso que los señores diputados sepan que deben ser puntuales, porque sólo así podrán interpretar el verdadero sentir de nuestro pueblo, sus necesidades, y otorgarle lo que él tiene derecho a exigir de este Parlamento.

De modo que propongo que se siga llamando hasta tanto se logre quórum, y hago una exhortación para que no se repita esta circunstancia de pedir prórroga de la hora de iniciación, lo que le crea a la Presidencia dificultades que esta bancada pretende superar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa al señor diputado que hay 93 señores diputados en la casa y 53 en el recinto.

Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — Tiene razón, tiene muchísima razón el señor diputado Elena, y por ese motivo lo voy a apoyar en su pedido de seguir llamando hasta que se obtenga quórum, pero advierto que si a las 16 no se lo ha logrado, voy a pedir el pase de lista para que el país sepa quiénes son los que se preocupan por resolver los problemas de los sectores de menores recursos.

Sr. Elena. — Le agradezco al señor diputado su manifestación porque eso significa que compartimos la preocupación de trabajar.

Sr. Pizarro. — Estoy en un todo de acuerdo con el señor diputado en esta emergencia.

Sr. Rodríguez del Rebollar. — Yo pediría que se registrara la hora de llegada del señor diputado Elena a la reunión de esta mañana y la hora de llegada a la de esta tarde. Sería conveniente saber a qué hora ha llegado el señor

diputado, porque aquí se dice con frecuencia que los señores diputados somos remisos, y no es exacto.

Sr. Elena. — Sólo puedo contestarle que le admito la interrupción entendiéndolo que provoca el diálogo cordial y amistoso, por cuanto le consta a los señores diputados la hora a que he asistido a la Cámara esta mañana y esta tarde, puntualidad que el señor diputado no puede desconocer.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se continuará llamando.

—Se continúa llamando.

—A la hora 16 y 5:

2

APERTURA DE LA SESION. CONVOCATORIA A SESION ESPECIAL

Sr. Presidente (Mor Roig). — Queda abierta la sesión especial convocada para el día de la fecha, con la presencia de 100 señores diputados.

Por Secretaría se dará lectura del pedido de convocatoria a sesión especial.

Sr. Secretario (Oliver). — El pedido de convocatoria de fecha 27 de mayo, la resolución de la Presidencia, la comunicación de fecha 28 de mayo y pertinente resolución, son los siguientes:

Buenos Aires, mayo 27 de 1964.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Arturo Mor Roig.

Los suscritos, en su carácter de representantes de distintos bloques políticos que integran esa Honorable Cámara, solicitamos del señor presidente se sirva convocar el cuerpo a sesión especial para el día 29 del corriente, a las 10, a fin de considerar el proyecto sobre salario mínimo vital y móvil, de conformidad con lo resuelto por la Honorable Cámara en su sesión del 6 de mayo del corriente año (Diario de Sesiones, página 120).

Formulamos esta petición de conformidad con lo dispuesto al respecto por el artículo 35 del reglamento.

Saludamos al señor presidente con distinguida consideración. — *Ramón A. Muñiz*, Partido Socialista Argentino; *Teodosio Pizarro*, Partido Demócrata Cristiano; *Carlos J. Berini*, Partido Demócrata Progresista; *José Fregá*, UCRI; *Jorge W. Ferreyra*, MIR; *Juan Carlos Pugliese*, UCRP; *Américo Ghioldi*, Partido Socialista Democrático; *Emilio Jofré*, Federación de Partidos de Centro.

Visto el pedido que antecede y atento lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del reglamento, cítese a la Honorable Cámara a sesión especial para el día y hora establecidos en el mismo.

Despacho de Presidencia, 27 de mayo de 1964.

ARTURO MOR ROIG.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1964.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Arturo Mor Roig.

Los suscritos, en representación de distintos bloques políticos de esta Honorable Cámara, informados del fallecimiento del señor diputado nacional don Fernando A. Miranda Gallino, ocurrido en la fecha,

solicitamos que la sesión especial cuya convocatoria se requiriera para el día viernes 29, a las 10, sea diferida para la hora 15 del mismo día, a fin de posibilitar que la Honorable Cámara, en su sesión de tablas, rinda homenaje al Ejército Argentino y a la memoria del legislador fallecido.

Saludamos a usted muy atentamente. — *Juan Carlos Pugliese*, Bloque UCRP; *Carlos Berini*, Bloque Demócrata Progresista; *Américo Ghioldi*, Bloque Socialista Democrático; *Diógenes C. Díaz*, Bloque UCRI; *Juan A. Luco*, Bloque Justicialista; *Emilio Jofré*, Federación Partidos de Centro; *Jorge W. Ferreira*, MIR.

Visto la nota que antecede, envíense telegramas a los señores diputados en el sentido expuesto.

Sala de la Presidencia, 28 de mayo de 1964.

ARTURO MOR ROIG.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa a la Honorable Cámara que las comisiones de Legislación del Trabajo —especializada— y de Presupuesto y Hacienda han producido dictamen sobre el asunto motivo de la convocatoria: salario mínimo vital y móvil.

La Cámara deberá resolver si se consideran los dictámenes mencionados.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se pasará al orden del día.

3

SALARIO VITAL, MINIMO Y MOVIL

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación del Trabajo ha considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre salario mínimo vital y móvil y los proyectos de ley sobre el mismo tema de los señores diputados Palacios y otros; Luco y otros; Solari, Juan A., y otros, y Cárdenas; y, por las razones expuestas en el informe adjunto y las que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Toda persona mayor de 18 años, que trabaje por cuenta ajena bajo dependencia de un empleador, percibirá una remuneración no inferior al salario vital mínimo que se establezca de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Art. 2º — Salario vital mínimo es la remuneración que posibilite asegurar, en cada zona, al trabajador y a su familia, alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión.

Art. 3º — A los efectos de la presente ley, el salario comprende a toda remuneración de servicios en dinero, especie, alimentos, uso de habi-

tación, asignaciones familiares, comisiones y viáticos, excepto, en cuanto a este rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes.

Art. 49 — El salario vital mínimo revestirá el carácter de orden público y será irrenunciable. Por causa alguna podrán abonarse sueldos o salarios inferiores a los que se fijen de conformidad con la presente ley, ni podrán los mismos ser disminuidos por contratos individuales o convenciones colectivas, siendo nula toda disposición o cláusula salarial en contrario. Las sumas que se abonen al trabajador por aplicación de sistemas de productividad o incentivaración o en calidad de premios o primas por cualquier otro concepto, no se tendrán en cuenta para el cómputo del salario vital mínimo.

Art. 50 — Créase el Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, con la función esencial de determinar periódicamente el salario vital mínimo.

Art. 60 — El consejo estará integrado por cuatro representantes estatales, dos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y dos por el Ministerio de Economía, cuatro de los trabajadores y cuatro de los empleadores, todos con sus respectivos suplentes, que reemplazarán a los titulares en caso de ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento. Funcionará como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y será presidido por el funcionario que éste designe de entre sus representantes.

Art. 70 — Los miembros del consejo serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía, de la o las organizaciones sindicales con personería gremial más representativas y de la o las entidades empresarias más representativas. Durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelectos. Deberán reunir los requisitos exigidos para ser electo diputado nacional y poseer reconocida versación en materia laboral o económica. Si alguna de las entidades consideradas como más representativas por el Poder Ejecutivo se negare a formular la propuesta, las designaciones se harán de oficio.

Art. 80 — El consejo tendrá las siguientes facultades:

- a) Nombrar comisiones de estudio con la participación de los sectores interesados;
- b) Requerir asesoramiento e información de las reparticiones y organismos nacionales, provinciales, municipales o privados;
- c) Realizar encuestas y estudios relativos a la situación económica y condiciones de vida de los trabajadores en las distintas zonas del país;
- d) Contratar, previo concurso, personal administrativo, economistas y técnicos;

e) Formular su presupuesto de gastos. Estos serán atendidos con hasta el 20 % de los recursos que ingresen por aplicación del artículo 15. El excedente será transferido a la orden del Consejo Nacional de Enseñanza Técnica,

f) Realizar toda otra actividad tendiente al cumplimiento de esta ley.

Art. 90 — El consejo determinará anualmente, para cada zona, el salario vital mínimo para la familia tipo del trabajador, considerándose tal la integrada por los conyuges y dos hijos a su cargo, teniendo en cuenta las exigencias establecidas en el artículo 29; las variaciones de los índices de costo de vida elaborados por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos y por otros organismos oficiales; los índices zonales, que debiera determinar el consejo realizando los estudios e investigaciones necesarios; la capacidad económica de las distintas zonas del país y las circunstancias que no determinen un aumento de los índices de desocupación.

En cada oportunidad, antes de fijar el monto del salario vital mínimo para un periodo determinado, el consejo debiera estudiar y ponderar las consecuencias que el mismo tenía sobre la economía de los distintos sectores de la actividad, sus efectos sobre la economía general y la de las distintas zonas del país en particular.

Establecerá así mismo, por resolución fundada, los porcentajes de aumento o reducción correspondientes a las distintas zonas de aplicación, a los aprendices y menores a los trabajadores cuya capacidad laboral se encuentre manifestamente disminuida y a aquellos que cumplan un horario de trabajo no impuesto por la calificación, naturaleza o características especiales del mismo, inferior a la jornada legal.

El salario vital mínimo se expresará en montos mensuales, diarios y horarios.

Art. 10. — A petición de cualquiera de los sectores representados en el consejo, se podrá modificar el monto del salario vital mínimo antes del vencimiento del periodo de su vigencia, siempre que los índices de costo de vida tenidos en cuenta para su determinación muestren una variación del 15 % sin perjuicio de considerarse las demás circunstancias previstas en el artículo anterior. No se podrán practicar tales modificaciones sino en periodos mayores de 180 días.

Art. 11. — El 30 % del monto del salario vital mínimo para la familia tipo estará integrado por las asignaciones familiares. Las sumas que se abonen por este último concepto no estarán sujetas al pago de aportes jubilatorios ni del impuesto a los renditos.

Art. 12. — Las asignaciones familiares se abonarán a los trabajadores que presten servicios en la actividad privada, conforme al régimen de los fondos compensadores, establecido por los decretos leyes 7.913/57, 7.914/57, sus modificatorios y la ley 15.223. Facúltase a los directorios

de las cajas creadas por las citadas normas legales a elevar el aporte patronal, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.

La Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación del régimen respecto de todas las actividades civiles, comerciales y rurales.

Las asignaciones familiares que corresponda percibir a los agentes de la administración pública, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado se abonarán directamente, efectuándose las previsiones necesarias en los respectivos presupuestos.

Art. 13. — El salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia será el equivalente al 70 % del que se fije de acuerdo con el artículo 99.

Art. 14. — El salario vital mínimo fijado por el consejo nunca tendrá efecto retroactivo. Tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria al mes siguiente de la publicación por tres días en el Boletín Oficial, la que deberá efectuarse dentro de los diez días de dictada la resolución y dispuesta directamente por el Consejo.

Art. 15. — Los gastos del consejo serán atendidos con dos unidades del aporte previsto por el artículo 48 del decreto ley 33.302/45 —ley 12.921—, en la proporción establecida en el inciso e) del artículo 89.

Art. 16. — Quedan excluidas del régimen de la presente ley:

- a) Las remuneraciones del servicio doméstico;
- b) Las de los agentes de las administraciones provinciales y los de sus municipalidades, organismos descentralizados y autárquicos provinciales y municipales. El Poder Ejecutivo nacional gestionará ante los gobiernos provinciales la sanción de normas concordantes con las de la presente ley, en beneficio del personal mencionado.

Art. 17. — Las infracciones a la presente ley, consistentes en el pago de salarios inferiores al vital mínimo, serán sancionadas con multas de hasta diez veces el valor de la diferencia entre el salario vital mínimo y el efectivamente pagado.

Serán autoridades de aplicación de la presente ley los organismos nacionales o provinciales que tengan competencia en materia de policía del trabajo en sus respectivas jurisdicciones.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social controlará en todo el territorio de la República el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 48 del decreto ley 33.302/45 —ley 12.921—, pudiendo aplicar a los infractores mul-

tas de hasta diez veces el valor de los aportes que hubieran omitido depositar.

Art. 18. — Deróganse los artículos 19 a 44 y 50 a 65 del decreto ley 33.302/45 —ley 12.921— y toda otra disposición que se oponga a esta ley.

Disposiciones transitorias

Art. 19. — El Poder Ejecutivo procederá a constituir el Consejo Nacional de Salario Vital Mínimo y Móvil dentro de los treinta días de la promulgación de la presente ley. Dentro de los treinta días subsiguientes el consejo elevará al Poder Ejecutivo su propuesta de reglamentación de la ley, en la que se determinarán los procedimientos aplicables para ajustar el salario vital mínimo a modalidades especiales de remuneración.

Art. 20. — Hasta tanto el consejo se constituya y determine para el primer período anual el monto del salario vital mínimo a que se refiere el artículo 99, fijase el mismo en la suma de catorce mil pesos (\$ 14.000) mensuales, con las modalidades establecidas en el artículo 11.

Art. 21. — El consejo o, en su defecto, el Poder Ejecutivo establecerá, dentro de los treinta días de la promulgación de esta ley, en forma provisional, las zonas en que se dividirá el país a los efectos de su aplicación y las variaciones porcentuales para los supuestos mencionados en el tercer párrafo del artículo 99, y dará cumplimiento al último párrafo.

Art. 22. — El salario mínimo vital fijado en el artículo 20 regirá para los trabajadores de la actividad privada a partir del segundo mes subsiguiente a la promulgación de esta ley. Para los agentes de la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado, a partir del 19 de noviembre próximo, debiendo efectuarse las previsiones presupuestarias necesarias.

Art. 23. — Hasta tanto se lo incluya en el presupuesto general de gastos y recursos de la Nación, queda autorizado el Poder Ejecutivo para aprobar el presupuesto del Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil.

Art. 24. — Sin perjuicio de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la ley 16.454, por el término de seis meses a partir de la vigencia de esta ley, los precios de los productos y artículos destinados a la alimentación, excepto carne y bebidas alcohólicas, y los de los materiales de construcción, no podrá ser superiores a los vigentes al 30 de abril de 1964 o al menor precio que hubieren tenido entre dicha fecha y la promulgación de la presente ley, en todas las etapas de la comercialización.

La Secretaría de Estado de Comercio podrá autorizar modificaciones en los casos de productos estacionales o en aquellos casos concretos en que las circunstancias de hecho así lo aconsejen.

Las infracciones a este artículo serán penadas conforme a las prescripciones de la ley 16.454.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 28 de mayo de 1964.

Roberto M. Pena. — Carlos A. Maldonado. — José R. Mansilla. — Eduardo A. Mussolo.

Disidencia parcial. — Anexo al dictamen de mayoría

Disidencias parciales formuladas por los señores diputados Luco, Monte, Rois, Palacios y Salado, al dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo sobre proyecto de ley de salario vital, mínimo y móvil:

I. — Al artículo 2º: Suprimir «en cada zona».

II. — Al artículo 6º: El presidente del Consejo debe ser designado por éste, dentro de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

III. — Al artículo 7º: La representación de los trabajadores en el Consejo, debe ser designada a propuesta de la Confederación General del Trabajo.

IV. — Al artículo 9º: a) en el primer párrafo suprimir: «para cada zona». b) Suprimir el segundo párrafo. c) El tercer párrafo queda redactado de la siguiente forma: «Establecerá así mismo, por resolución fundada, los porcentajes de aumento correspondientes a las distintas zonas de aplicación, y los de reducción que correspondan a los aprendices y menores, a los trabajadores cuya capacidad laboral se encuentre manifiestamente disminuida y aquellas que cumplan un horario de trabajo, no impuesto por la calificación, naturaleza o características especiales del mismo, inferior a la jornada legal.»

V. — Al artículo 12: En el primer párrafo agregar después de: «la ley 15.223» lo siguiente: «el monto de las asignaciones familiares por cada persona que genere el derecho a percibir las, será del 10 por ciento del que se fije como salario vital mínimo de acuerdo con el artículo 9º».

VI. — Artículo nuevo 17 bis: La presente ley no afectará los mejores derechos que tuvieren los trabajadores por aplicación de otras normas legales o convencionales.

A los fines de la presente ley entiéndese por jornada de trabajo la que normalmente desempeña el trabajador o fije la convención colectiva.

VII. — Al artículo 20: Queda modificado de la siguiente forma: «Hasta tanto el Consejo se constituya y determine para el primer período anual el monto del salario vital mínimo a que se refiere el artículo 9º, fijase el mismo, con carácter de emergencia, en la suma de 16.000 pesos mensuales, con las modalidades establecidas en el artículo 11. En consecuencia, es-

tablécese en 1.600 pesos mensuales el monto de las asignaciones familiares por cada persona que genere el derecho a percibir las».

VIII. — Al artículo 21: Queda redactado de la siguiente forma: «El Consejo, en su defecto, el Poder Ejecutivo, establecerá, dentro de los treinta días de la promulgación de esta ley, en forma provisional las variaciones porcentuales para los supuestos mencionados en el tercer párrafo del artículo 9º y efectuará las determinaciones que establece el último párrafo del citado artículo.»

IX. — Al artículo 22: Queda redactado de la siguiente forma: «El salario mínimo vital fijado en el artículo 20 con carácter de emergencia regirá a partir del segundo mes subsiguiente a la promulgación de esta ley. El pago de los aumentos que se origine con motivo de esta ley con relación a los agentes y trabajadores del sector público nacional hasta el 31 de octubre de 1964, se atenderá con el producido de la negociación de títulos de la deuda pública, debiendo efectuarse para lo futuro las correspondientes previsiones presupuestarias.»

X. — Al artículo 24: queda redactado de la siguiente forma: «Sin perjuicio de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la ley 16.454, y por el término de seis meses a partir de la vigencia de esta ley, los precios de los productos y artículos de primera necesidad —que no hubieren sido establecidos por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la mencionada ley— y los de los materiales de construcción, no podrán ser superiores a los vigentes al 12 de febrero de 1964 o al menor precio que hubieren tenido entre dicha fecha y la promulgación de la presente ley, en todas las etapas de la comercialización.»

Las infracciones a este artículo serán penadas conforme a las prescripciones de la ley 16.454.

XI. — Artículo 25 (nuevo): «El Poder Ejecutivo nacional prestará asistencia financiera a las provincias, que por aplicación en su jurisdicción de las normas de la presente ley, las requirieran hasta tanto puedan adoptar las previsiones presupuestarias correspondientes.»

XII. — Artículo 26 (nuevo): «El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los treinta días de la sanción de la presente ley, deberá promover la reactivación industrial y arbitrar las medidas necesarias para un efectivo incremento del crédito destinado a la producción de bienes.»

Sala de la comisión, 28 de mayo de 1964.

Ricardo Alvaro Monte. — Alfredo L. Palacios. — Juan A. Luco. — Roberto Rois. — Francisco Salado.

En disidencia parcial:

Silvestre Peña y Lillo.

INFORME

El dictamen que la comisión eleva a la consideración de la Honorable Cámara es el fruto de un acelerado ritmo de trabajo impreso a su tarea para cumplir con la preferencia votada por el cuerpo.

Se han tenido en consideración, procurando interpretar y armonizar sus normas, el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo y los proyectos que legisladores pertenecientes a distintos sectores presentaron oportunamente.

El proyecto de ley adjunto tiende a cumplir fines de diverso orden: cobra operatividad, a su través, la disposición contenida en el artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional, que incorpora a nuestra legislación positiva la institución del salario mínimo vital móvil.

Se da satisfacción a un legítimo reclamo de los sectores del trabajo, introduciendo en nuestro régimen salarial principios de justicia distributiva que son de la esencia de una verdadera concepción actual de la democracia. Se reconocen las mayores necesidades del trabajador con familia a su cargo, instituyéndose una real protección del núcleo familiar, de acuerdo con la tendencia que se viene evidenciando a través de la doctrina que emerge de las resoluciones y declaraciones de organismos internacionales y de las legislaciones más avanzadas del mundo.

Se promueve un aumento de la demanda efectiva mediante una elevación de los ingresos de los sectores del trabajo, principales consumidores, orientado especialmente hacia el grupo que, como lo indica la experiencia, ordena más racionalmente sus gastos: el núcleo familiar, inyectando en el torrente circulatório de nuestra economía un mayor poder adquisitivo que posibilite absorber la mayor producción, que se advierte con nitidez, alentando esta tendencia que ha de traer como consecuencia un fortalecimiento de los factores positivos en el proceso del desarrollo nacional.

Se procura invertir el proceso de distorsión que se advierte en la distribución sectorial del ingreso nacional, iniciando la tendencia que habrá de llevar a una más justa distribución del producto del esfuerzo nacional.

Es el convencimiento de los miembros de la comisión que suscriben el dictamen, haber elegido los medios y la técnica adecuados para la mejor obtención de los fines propuestos.

Roberto M. Pena.

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el anteproyecto de dictamen formulado por la Comisión de Legislación del Trabajo, especializada, sobre salario mínimo vital móvil y el proyecto de ley del señor

diputado Caggiano, sobre salario mínimo para empleados y obreros del Estado; y, por las razones que se dan en el informe escrito de la comisión especializada, aconseja la aprobación del anteproyecto mencionado.

Sala de la comisión, 28 de mayo de 1964.

Isidro G. Balbi. — Raúl R. Alfonsín. — Fermín J. Garay. — Juan C. Pugliese. — Reinaldo Elena. — Juan Claudio Zanoní. — Luis Ferrari. — Roberto M. Pena. — Rogelio Ramón Rodríguez. — Héctor Llorens. — F. Rodolfo García Leyenda. — Oscar Rial.

En disidencia parcial:

Américo Ghioldi. — Emilio Carreira.

En disidencia parcial:

Angel R. Caggiano.

En disidencia parcial:

Ricardo F. Molinas. — Alberto Serú García. — Rafael J. Martínez Raymonda.

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda —en minoría— ha tomado en consideración el anteproyecto de dictamen formulado por la Comisión de Legislación del Trabajo —especializada— sobre salario mínimo vital móvil; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — El Poder Ejecutivo nacional, por medio de las organizaciones pertinentes, reactualizará, dentro de los treinta días de la fecha de promulgación de la presente ley, los salarios y las remuneraciones de todo el país, de acuerdo con los últimos índices del costo de la vida, partiendo de una remuneración mínima de \$ 13.500 mensuales.

Art. 2º — Se suspende la aplicación del artículo 49 de la carta orgánica del Banco Central. En lo sucesivo el gobierno se abstendrá de colocar títulos nacionales en los bancos de todo el país hasta tanto sea restablecido el mercado de capitales. Esta medida entrará a regir a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 3º — En el término de ocho días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional movilizará, mediante la disminución que corresponda, de las exi-

gencias de efectivo mínimo, la suma de veinte mil millones de pesos (\$ 20.000.000.000), que será el aporte inicial al fondo especial para la reactivación económica, que funcionará en el Banco Industrial y será administrado por éste.

Art. 4º — El fondo especial para la reactivación económica aplicará un estricto criterio selectivo en los créditos que otorgue, tendiendo a poner en marcha a las empresas paralizadas y exigiendo como condición inexcusable la rehabilitación de técnicos, empleados y obreros despedidos o suspendidos.

Art. 5º — El Banco Industrial será asesorado, en la aplicación de la medida dispuesta en el artículo 3º de la presente ley, por una comisión asesora honoraria que integrarán cuatro representantes empresarios (dos por la Confederación de la Industria y dos por la Unión Industrial Argentina) y cuatro representantes designados por la Confederación General del Trabajo.

Art. 6º — Declárase de primordial interés, a los efectos de toda acción crediticia, la industria de la construcción en todos sus manifestaciones.

Art. 7º — Durante la vigencia de la presente ley no serán aumentados los gravámenes que afecten a la industria. El Poder Ejecutivo dispondrá, dentro del plazo de treinta días, una moratoria general para el pago de impuestos y contribuciones de toda índole que deban hacer efectivo las empresas industriales de todo el país.

Art. 8º — Aplícase un gravamen del cinco por ciento (5 %) a toda la producción agropecuaria. El producido de dicho gravamen será ingresado íntegramente a un fondo para la tecnificación y mecanización del campo, que funcionará en el Banco de la Nación y será administrado por un consejo que integrarán representantes de ese banco, de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias, de los sectores cooperativos y de los trabajadores rurales. El fondo así instituido tendrá por objeto proveer al crédito para toda inversión que suponga un aumento de la productividad en el campo, incluyendo —así mismo— la financiación de los elementos que esté en condiciones de proveer la industria nacional. Esta disposición comenzará a regir dentro de los ocho días de la fecha de promulgada la presente ley.

Art. 9º — Las disposiciones de la presente ley regirán hasta el 31 de marzo de 1965, a excepción del artículo 1º, que continuará vigente.

Sala de la comisión, 29 de mayo de 1964.

Adalberto O. Mársico. — Jorge W. Ferreira.

Señor presidente:

El proyecto del Poder Ejecutivo nacional sobre salario mínimo, vital y móvil no interpreta las reclamaciones de los sectores productivos —empresa y trabajo— porque no contempla la integridad del problema en sus raíces más profundas. La sola elevación

del salario y fijación de un mínimo vital es apenas un punto del programa de emergencia que debe emprenderse de inmediato si se quiere evitar el caos económico y social.

Esa medida parcial no soluciona el problema de la desocupación y del trabajo a medio jornal, y en cambio si agrava la situación de las empresas en quiebra o en grave estado deficitario y gravitará en el alza del costo de la vida.

La imposibilidad de las empresas de afrontar las exigencias de la medida parcial que se propone las pondrá en enfrentamiento con el sector del trabajo, dándose la paradoja de ese enfrentamiento a pesar de que ambos sectores están en crisis por razones iguales, que hallan su origen en la conducción económica trazada a partir de la devaluación monetaria de abril de 1962.

Todo cuanto se haga por mejorar la situación de los trabajadores sin revisar la política crediticia bancaria, sin adoptar los recaudos para volver a poner en marcha a las industrias, sin recuperar el estado de plena ocupación y sin aumentar rápidamente la oferta de artículos mediante una producción incentivada y constante, estará condenada de antemano al fracaso y no hará sino agravar la crisis de los hogares argentinos.

Es una ecuación muy simple la que demuestra que una empresa en amenaza de quiebra sólo podrá aumentar los salarios si por otro lado despidе cierto número de personas que le compense el mayor gasto, ya que el traslado a los precios de esos mayores salarios —que es de todas maneras un arbitrio contrario a los intereses de los trabajadores— tampoco es posible dada la retracción del consumo.

En consecuencia, es necesario y urgente adoptar juntamente con la medida que ponga justicia en el nivel de vida de la masa trabajadora, todas aquellas disposiciones que den carácter permanente y de mejoramiento progresivo a esa medida atendiendo a la integridad de la comunidad argentina. En ese sentido, y teniendo en cuenta que para épocas de emergencia corresponden medidas de emergencia, y que éstas lógicamente, deben exceder el marco de lo habitual, es oportuno recordar la situación que un día obligó a la creación del Instituto Movilizador de Inversiones Mobiliarias (IMIM), para dotar a los bancos de los fondos que les permitieran reactivar la plaza y salvar su situación de crisis. En una situación distinta, pero más gravemente crítica que aquella, no tiene explicación la actitud meramente contemplativa que observa la conducción económica nacional.

Las cuantiosas sumas volcadas desde la vigencia de la reforma de la carta orgánica del Banco Central a la Tesorería General de la Nación, mediante la aplicación del artículo 49 de ese estatuto, hace indispensable adoptar ahora una medida de contención de ese poderoso factor inflacionario que distorsiona, por otra parte, el correcto encauzamiento del crédito nacional hacia los sectores productivos.

Los bancos del país gozan de la más alta liquidez conocida en la historia económica del país, situación que contrasta con el estado crítico de las empresas.

Corresponde así mismo en todo plan de reactivación, considerar a aquellos sectores —como la construcción— que movilizan más rápidamente un mayor número de gremios contribuyendo con urgencia y eficacia a la reactivación del mercado.

Es fundamental para equilibrar el costo de la vida librar la batalla de los costos en el campo, y está demostrado que esto sólo se logra estimulando la tecnificación y mecanización de las tareas.

El programa de emergencia propuesto no obsta, antes bien debe ser correlativo, al cambio estruc-

tural de la economía que exige el cumplimiento de las prioridades básicas del desarrollo nacional, cuya interrupción en marzo de 1962 ha conducido al actual estado de postración económica.

Adalberto O. Mársico.

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda —en minoría— ha tomado en consideración el anteproyecto de dictamen formulado por la Comisión de Legislación del Trabajo —especializada— sobre salario mínimo vital y móvil y el proyecto de ley del señor diputado Caggiano sobre salario mínimo para empleados y obreros del Estado; y, por las razones que se darán en el seno del recinto, aconseja su rechazo.

Sala de la comisión, 28 de mayo de 1964.

Héctor R. Sandler.

ANTECEDENTES

I

Buenos Aires, 13 de abril de 1964.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter el adjunto proyecto de ley por el cual se instituye el salario mínimo vital y móvil.

Al hacerlo, da cumplimiento al mandato que emana del artículo 14 bis, incorporado a la Constitución Nacional por la Convención Constituyente de 1957, a lo que establece la plataforma de gobierno y al compromiso contraído con la ciudadanía en los comicios en que resultó electo.

Existe una imagen de la democracia en nuestro continente que puede resultar poco atractiva para sus pueblos, en la medida que siga sin atender justos reclamos de bienestar y seguridad, para cuya satisfacción debe apelarse a toda la firmeza, pues es preciso modificar estructuras anacrónicas que determinan un trato injusto y sin posibilidades de rectificación.

Estas reformas deben hacerse en tiempo, para evitar que la titularidad del proceso de transformación sea transferida a esquemas totalitarios que se presenten con una prédica seductora y una mística en su accionar a la que los pueblos pueden llegar a atribuir las virtudes realizadoras que la democracia no exhibe, por más que resulte ilusorio buscar el bienestar material por la vía de la pérdida de la libertad.

Crear riqueza suficiente y distribuirla con justicia constituyen imperativos permanentes de esta etapa de nuestra vida como nación. Para crear riqueza suficiente nos hemos comprometido a la «movilización de los recursos materiales y espirituales de la Nación, utilizando la planificación económica y social democrática», la que será verdaderamente democrática en tanto cuente con el asentimiento de las mayorías. Ese asentimiento no se logrará si el hombre de trabajo no se siente interpretado en sus aspiraciones, protegido en sus derechos, asegurado en la

satisfacción de sus necesidades mínimas y convencido de que su participación en el producido del esfuerzo común es la justa.

Reiteramos lo que dijéramos ante la Honorable Asamblea Legislativa en nuestro mensaje del 12 de octubre de 1963, utilizando las palabras pronunciadas desde la más alta tribuna espiritual de la humanidad por el papa Juan XXIII, cuando afirmó en su histórica encíclica *Mater et Magistra* que: «la riqueza económica de un pueblo no consiste solamente en la abundancia total de los bienes sino también, y más aún, en la real y eficaz distribución según justicia, para garantía del desarrollo personal de los miembros de la sociedad, en lo que consiste el verdadero fin de la economía nacional».

Es penoso reconocer que los argentinos no hemos podido en los últimos tiempos imprimir al crecimiento económico el ritmo necesario para satisfacer las necesidades de nuestra población creciente, y lo es mucho más comprobar que se ha dado a la distribución de la renta nacional un signo regresivo. Estas condiciones económicas y sociales nos hicieron decir a vuestra honorabilidad en ocasión del mensaje con que iniciamos nuestro mandato constitucional: «Las estadísticas nos colocan ante una dolorosa realidad, pues ellas demuestran en forma irrefutable que, durante los últimos años, se ha ido paulatinamente disminuyendo la participación del sector laboral en el producto nacional, lo que no sólo ha importado una evidente injusticia social, sino que ha repercutido perjudicialmente en nuestro proceso de desarrollo nacional».

Tan es cierta esta afirmación, que la inversión de la distribución de la renta nacional —cumplida en los últimos años, lo que supone una mayor participación del capital— ha ido acompañada con el languidecimiento de la economía general de la Nación, la paralización de sectores importantes de nuestra industria nacional y el conocimiento por las nuevas generaciones de trabajadores del flagelo de la desocupación.

Los pueblos deben recoger oportunamente las experiencias que el curso de los hechos muestre. Es imprescindible que los responsables de la orientación del pueblo en todos los campos de la actividad política, económica y social utilicen estas enseñanzas para rectificar el rumbo con firmeza y renovadas convicciones.

No debería ser necesario repetir, a esta altura de la evolución científica, cultural y tecnológica de la humanidad, que no hay naciones ricas con pueblos empobrecidos; que el soporte fundamental de las actividades productivas es la existencia de un fuerte mercado de consumo.

Pero si estas razones no fueran suficientes para quienes han sostenido y sostienen la malsana filosofía de que la mejor manera de aquietar los reclamos de los pueblos es mantener una adecuada tasa de desocupados, les señalamos el alto grado de inquietud social que sustituye a la paz constructiva y fecunda cuando esos pueblos advierten que son objeto de un trato injusto. Esa inquietud, que se torna rápidamente en beligerancia social, no permite a gobernantes y gobernados, a trabajadores y empresarios, concertar armónicamente sus empeños para acometer la apasionante tarea de producir los bienes y servicios en cantidad suficiente para satisfacer justos reclamos.

Va de suyo que la redistribución del ingreso con sentido social cumple dos altas finalidades de interés nacional: una, de elemental justicia, cual es la de restituir a los trabajadores los niveles de participación en el producto nacional que ya habían conquistado; la otra, impostergable para la reactivación económica, de incrementar en oportunidad la demanda que ponga en funcionamiento los dispositivos productivos ociosos y absorba la mano de obra desocupada.

Esta preocupación llevó al Poder Ejecutivo a dictar el decreto 1.199, por el cual se estableció el funcionamiento de una comisión integrada por representantes obreros, empresarios y del Poder Ejecutivo, a la que se le asignó la función de confeccionar un proyecto de salario mínimo vital y móvil.

Se decía en los considerandos del citado decreto: «que las estadísticas demuestran el deterioro progresivo del salario real ante el avance continuado del nivel de precios, sin que los periódicos ajustes de los salarios nominales alcancen a compensar la merma en el poder de compra de los trabajadores, por falta de una relación constante entre precios y salarios. Tal situación afecta sensiblemente las condiciones de vida de los trabajadores y es fuente de desaliento y de malestar, particularmente en aquellos sectores que perciben remuneraciones más bajas, pues tales desequilibrios determinan privaciones que impiden satisfacer las necesidades más elementales de la subsistencia. Hacia el logro de una garantía que ponga a cubierto de tales variaciones a la población asalariada, ha de tender la vigencia del salario mínimo vital y móvil. No obstante, la formulación del régimen legal que ha de regir la institución presupone la realización de un estudio integral de las peculiaridades que ha de revestir el nuevo sistema, así como de sus posibles repercusiones sobre la economía general, por cuanto es necesario prever toda consecuencia de naturaleza inflacionaria, que perturbe los objetivos de los planes y programas de desarrollo, en cuya materialización radica en definitiva la posibilidad de un ascenso ponderable en los niveles de bienestar social del país.»

La experiencia internacional resume el alcance de las leyes sobre salarios mínimos de un modo coincidente con todo lo anteriormente expresado: «El objetivo principal de las leyes sobre salarios mínimos es evitar la explotación de trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de oferta de mano de obra. Tal situación ocasiona en gran forma salarios bajos, en especial cuando no existe un movimiento sindical poderoso y activo. Además, es socialmente indeseable, injusto desde un punto de vista humanitario, y políticamente peligroso mantener a un sector de la población percibiendo salarios de mera subsistencia.»

«Otro de los objetivos es el de asegurar a los trabajadores un ingreso mínimo adecuado y aumentar el poder de compra. Mejorar los salarios de los sectores más pobres de la población trabajadora constituye uno de los aspectos más urgentes del desarrollo económico y social. Los bajos niveles de salarios son no sólo el resultado, sino también una causa, de baja productividad; así mismo, tienden a limitar la demanda de muchos tipos de productos, obstruyendo, en esta forma, las actividades de inversión, y retardando el desarrollo.»

«Otro de los objetivos de la reglamentación de salarios mínimos es el logro de una distribución más equitativa del ingreso. En muchos países latinoame-

ricanos que han logrado grandes progresos en el incremento de la riqueza nacional, vastos sectores de la población trabajadora se han beneficiado en forma muy escasa de este progreso. En el informe presentado a la OEA por el Grupo Internacional de Dirigentes Sindicales se destacó que los planes nacionales de desarrollo eran deficientes, especialmente en lo que se refiere a distribución del ingreso y a políticas de salarios y a sistemas de estructuras salariales.» (Objetivo de las leyes sobre salarios mínimos, Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, Bogotá, Colombia, Marzo de 1963. Documento de referencia número 6.)

Es incontestable que la inspiración de fijar un límite mínimo al salario comporta un alto sentido de justicia y de preservación social. Así lo entendió la Organización Internacional del Trabajo, que en su conferencia anual de 1928 sancionó un proyecto de convenio, en el que se establece la conveniencia de fijar salarios mínimos para los trabajadores industriales.

La Declaración de Principios Sociales de América, contenida en el acta final de la Conferencia Interamericana que se reunió en Chapultepec en febrero de 1945, ratificada por ley del Congreso argentino, recomendó la fijación de un salario mínimo vital que fuera suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, en su carácter de jefe de familia, y que dicho salario fuera «lo bastante flexible para adaptarse al alza de los precios, a fin de que su capacidad remunerativa garantizara y aun aumentara el poder adquisitivo del trabajo, manteniéndolo en armonía y equilibrio tanto con las condiciones variables de tiempo y regiones, como con el mejor rendimiento en la producción y la consecuente disminución de costos unitarios.»

La novena Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá en 1948, sancionó la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, entre las que se establece que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo suficiente para cubrir sus necesidades normales de todo orden, de acuerdo con las condiciones de cada región y cada labor, el costo de la vida, la capacidad del trabajador y los sistemas de remuneración de las empresas.

La Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo sobre la Alianza para el Progreso —Declaración de Cundinamarca, Bogotá, 1963— señaló la necesidad de que los programas laborales de los países americanos, en consulta con los sectores interesados, establezcan sistemas de salarios mínimos que permitan a los trabajadores participar en los beneficios del desarrollo económico y social.

La doctrina social de la Iglesia Católica tampoco ha permanecido ajena a esta aspiración de los trabajadores, y ya León XIII en la encíclica *Rerum novarum* proclama el principio del salario vital; Pío XI en la *Quadragesimo anno* completa el concepto estableciendo que «hay que dar al obrero una remuneración que sea suficiente para su propia sustentación y la de su familia», y Juan XXIII en *Mater et magistra* culmina la evolución proclamando con toda claridad el derecho del trabajador a un salario mínimo y vital.

Cuando vuestra honorabilidad entre al estudio del proyecto de ley que se adjunta, tendrá oportunidad de valorar los riquísimos antecedentes legislativos que se inician en el año 1904, con el proyecto de Código del Trabajo de Joaquín V. González, y se siguen con los proyectos del diputado Nicolás Repetto en 1913, del senador del Valle Iberlucea en el año 1919 y el del diputado Leónidas Anastasi durante la

primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, que ya establecía el mecanismo de fijación del salario mínimo por una comisión mixta de patronos y obreros presidida por un tercero y debidamente asesorada por técnicos.

Comprobará el alto cuerpo que siempre estuvo presente en el ánimo del legislador argentino el establecimiento de un régimen salarial que diera debida protección al interés del trabajador. La ley 12.921, al ratificar el decreto 33.302/45, que creó el Instituto Nacional de las Remuneraciones, fue coherente con esos antecedentes, pero no es menos cierto que ningún gobierno de los que se sucedieron puso en marcha ese ordenamiento legal.

Las intenciones reiteradas a lo largo de sesenta años indican la prudencia con que debe abordarse esta institución fundamental del derecho laboral, que no puede ser un mero alarde intelectual, que cree expectativas que no puedan ser satisfechas, sino que debe erigirse en instrumento del progreso social y económico de la República, asentado sólidamente sobre su realidad.

El proyecto de ley que sometemos a vuestra honorabilidad resultó de la labor de la comisión creada por el decreto 1.199/64. Los representantes del Poder Ejecutivo en dicha comisión elaboraron un anteproyecto que fue considerado por los delegados de la Confederación General del Trabajo, de la Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres, de la Confederación General Económica, de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación General de Industrias que la integraron.

Los distintos sectores empresarios señalaron la inoportunidad de la implantación de un sistema de salario mínimo vital y móvil, debido a la situación económica por que atraviesa el país, pero sin declinar su posición, y ante la decisión del Poder Ejecutivo, de posibilitar un constructivo debate nacional incluyendo el tema en sesiones extraordinarias, participaron en la redacción del proyecto.

La Confederación General del Trabajo ratificó en la comisión su apoyo al régimen de salario mínimo vital, participando en consecuencia de su redacción.

El Ministerio de Trabajo procuró obtener coincidencias de los distintos sectores, y cuando las obtuvo, las incluyó en el proyecto.

De ese modo, con la contribución de trabajadores y empresarios, el Poder Ejecutivo redactó el proyecto de ley adjunto, que define el concepto de salario mínimo vital en coincidencia con las modernas concepciones del derecho laboral nacional e internacional.

La movilidad se establece sobre la base de su revisión en plazos prudentes y atendiendo a modificaciones del costo de la vida, determinadas por estadísticas oficiales y por los índices que el propio consejo nacional determine.

Se señala la obligación por parte de ese organismo de ponderar, cada vez que fije el salario mínimo, las consecuencias que el mismo tendrá sobre la economía de los distintos sectores de actividad, sus efectos sobre la economía general y la de las distintas zonas del país en particular.

El organismo de aplicación de la ley, el Consejo Nacional de Salario Mínimo, se estructura en forma tripartita, de acuerdo a lo aconsejado por los organismos internacionales especializados, pues de ese modo y en base a métodos bien conocidos se reduce la posibilidad de error en forma más satisfactoria que un sistema de aumento de salarios por decisión política, sea de la rama ejecutiva o legislativa.

Con este mensaje, el proyecto de ley de salario mínimo vital y móvil toma estado parlamentario y alcanza, en el marco agosto de vuestra honorabilidad, la instancia en que es más auténtica la expresión de la voluntad popular. La serenidad y sabiduría de los señores legisladores ha de dar el tono de las mejores tradiciones del Parlamento argentino, para que este constructivo debate tenga lugar en bien de la paz social.

Reitero a vuestra honorabilidad que lo importante no es que el sentido social de la democracia esté en nuestras declaraciones políticas o estatutos partidarios, sino que los argentinos tengamos la decisión y la valentía de llevarlos a la práctica.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA.
Fernando Solá.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Todos los obreros y empleados, sin distinción de sexos, que realicen tareas en relación de dependencia dentro del territorio de la República percibirán una remuneración no inferior al salario mínimo vital que se establezca de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Exceptúanse aquellos que se encuentren comprendidos en regímenes especiales cuyo funcionamiento fije la movilidad salarial.

Art. 2º—Considérase salario mínimo vital a la remuneración que posibilita al trabajador alimentación adecuada, vivienda decorosa, vestido digno, asistencia sanitaria, educación, esparcimiento, seguro y previsión.

Art. 3º—El sueldo o salario a los efectos de la presente ley comprende a toda remuneración de servicios en dinero, especie, alimentos, uso de habitación, comisiones, propinas y viáticos, excepto, en cuanto al último rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes.

Art. 4º—El salario mínimo vital revestirá carácter de orden público y será irrenunciable; por tanto, por causa alguna podrán abonarse sueldos o salarios inferiores a los que se fijen de conformidad con la presente ley, ni podrán los mismos ser disminuidos por contratos individuales o convenciones colectivas, siendo nulo todo acuerdo o pacto en contrario.

Quedan excluidas de las precedentes normas las mayores sumas que, por encima del salario mínimo vital y de los salarios básicos emergentes de las convenciones colectivas, fijen o convengan los empleadores, principalmente como consecuencia de la aplicación de sistemas de premios o incentivos para incrementar la productividad; tales sistemas se registrarán exclusivamente por las disposiciones propias que en cada caso se hayan establecido o pactado o se establezcan o pacten en el futuro.

Art. 5º—Créase el Consejo Nacional de Salario Mínimo con la función de determinar periódicamente el salario mínimo vital.

Art. 6º—El consejo estará integrado por cuatro representantes del Poder Ejecutivo nacional, dos de los cuales lo serán por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, uno por el de Economía y uno por el de Obras y Servicios Públicos; cuatro de los trabajadores y cuatro de los empleadores, todos con sus respectivos suplentes. Funcionará en el ámbito

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual tendrá su sede y será presidido por el funcionario que éste designe de entre sus representantes.

Art. 7º — Los miembros que integren el consejo serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Economía y de Obras y Servicios Públicos; de la central de trabajadores con personería gremial más representativa y de la o las entidades empresarias más representativas. Durarán tres años en las funciones y podrán ser reelectos. Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento.

Deberán reunir los requisitos de edad y nacionalidad exigidos para ser electo diputado nacional y poseer reconocida versación en materia económica o laboral.

Si alguna de las entidades consideradas por el Poder Ejecutivo nacional como más representativa se negare a la integración del Consejo del Salario Mínimo, las designaciones se harán de oficio.

Art. 8º — El consejo queda facultado para:

- a) Nombrar subcomisiones de estudio con la participación de los sectores interesados de cada actividad específica;
- b) Requerir asesoramiento e información de los distintos organismos nacionales, provinciales o municipales;
- c) Realizar encuestas y estudios relativos a la situación económica y condiciones de vida de los trabajadores en las distintas zonas del país;
- d) Tomar personal administrativo y contratar economistas y técnicos especializados;
- e) Formular su presupuesto de gastos y realizar toda otra actividad pertinente para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 9º — El consejo determinará anualmente el salario mínimo vital teniendo en cuenta los índices de costo de vida elaborados por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, los índices zonales que pueda determinar el consejo en virtud de los estudios que realice, las exigencias establecidas en el artículo 2º, la capacidad económica de las distintas zonas del país y circunstancias que no determinen el aumento de los índices de desocupación. En cada oportunidad en que el consejo fije el monto del salario mínimo vital para un período determinado, deberá previamente estudiar y ponderar las consecuencias que el mismo tendrá sobre la economía de los distintos sectores de actividad, sus efectos sobre la economía general y las distintas zonas del país en particular.

Establecerá así mismo, por resolución fundada y atendiendo a las particularidades de cada convención colectiva, los porcentajes de reducción aplicables a los aprendices, cadetes y menores, a empleados y obreros cuya capacidad de trabajo se encuentre manifiestamente disminuida, y a aquellos que cumplan una jornada de trabajo, no impuesta por la naturaleza o características especiales del mismo, inferior a la jornada legal o las establecidas en las convenciones colectivas. El salario mínimo vital se expresará en montos mensuales, diarios y horarios.

Art. 10. — A petición de cualquiera de los sectores interesados se podrá modificar el salario mínimo vital antes de su vencimiento, siempre que los índices tenidos en cuenta para fijarlos muestren una variación del quince por ciento o más, sin perjuicio de consi-

derarse las circunstancias prescritas en el artículo 9º. No se podrán practicar tales modificaciones al salario mínimo vigente sino en períodos mayores de 180 días.

Art. 11. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no homologará ninguna convención colectiva de trabajo, estatuto o escalafón celebrados de acuerdo al régimen de la ley 14.250 que tengan remuneraciones inferiores al mínimo establecido por el consejo nacional para la actividad de que se trate.

Art. 12. — Los empleadores que abonen el sueldo anual complementario están obligados a ingresar, dentro de los 15 días hábiles, en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del consejo, el 5 % del monto total pagado por tal concepto. A tal efecto, los empleadores quedan facultados para retener el 2 % a los empleados y obreros en el momento del pago.

Art. 13. — Las infracciones a la presente ley, consistentes en el pago de salarios inferiores al mínimo vital, serán sancionadas con una multa de hasta 10 veces el valor de la diferencia entre el mínimo vital y el salario efectivamente pagado.

Son autoridades de aplicación de la presente ley, en lo relativo al pago del salario vital mínimo, los organismos nacionales y provinciales que tengan competencia en materia de policía de trabajo, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social queda facultado para controlar en todo el territorio de la Nación el cumplimiento de la obligación que instituye el artículo 12 de la presente ley, pudiendo imponer multas de un valor de hasta 10 veces el monto de la suma que se hubiere omitido depositar.

Art. 14. — Los fondos recaudados en virtud del artículo 48 del decreto ley 33.302/45, ratificado por ley 12.921, y los que se recaudaren por los artículos 12 y 13 de la presente ley, serán transferidos y/o depositados a la orden del Consejo Nacional de Salario Mínimo, el que propondrá al Poder Ejecutivo nacional el destino de su inversión, previa deducción de las sumas necesarias para la atención de su presupuesto.

Art. 15. — El Poder Ejecutivo nacional deberá constituir el consejo dentro de los treinta días subsiguientes a la promulgación de la presente ley. El consejo, dentro de los sesenta días subsiguientes, propondrá al Poder Ejecutivo nacional la reglamentación de la ley.

Art. 16. — La reglamentación determinará los procedimientos para ajustar el salario mínimo a las distintas actividades y modalidades de trabajo.

Art. 17. — El salario mínimo fijado por el consejo nunca tendrá carácter retroactivo. Tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria al mes siguiente de la publicación por tres días en el Boletín Oficial. Las disposiciones de esta ley son de orden público e irrenunciables para las partes.

Art. 18. — Deróganse el artículo 48 y demás artículos del decreto ley 33.302/45, ratificado por la ley 12.921, y cualquier otra disposición que se oponga a la presente ley.

Art. 19. — El Poder Ejecutivo nacional gestionará ante los gobiernos provinciales la sanción de normas concordantes con la presente ley que aseguren a sus agentes y a los de las municipalidades la movilidad de sus remuneraciones.

Art. 20. — A efectos de computar el salario mínimo vital de aquellos trabajadores que presten servicios en relación de dependencia con más de un empleador se tendrán en cuenta todas las remuneraciones en tanto su jornada no exceda la legal.

Art. 21. — Quedan excluidas del régimen de la presente ley las siguientes actividades:

- a) Las prestaciones de servicio a que se refiere el decreto 28.169/44 (ley 12.921);
- b) Los trabajadores comprendidos en la ley 13.020;
- c) Las remuneraciones del servicio doméstico.

El consejo propondrá al Poder Ejecutivo las modificaciones al régimen salarial de los sectores excluidos en los incisos precedentes, para que los salarios se ajusten al concepto de salario mínimo vital y a las posibilidades económicas y modalidades de trabajo.

Art. 22. — Hasta tanto se lo incluya en el presupuesto general de la Nación en vigor, el Poder Ejecutivo nacional queda autorizado para aprobar el presupuesto de gastos y cálculos de recursos del Consejo Nacional de Salario Mínimo.

Art. 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fernando Solá.

—A las comisiones de Legislación del Trabajo —especializada— y de Presupuesto y Hacienda.

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La presente ley reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional registrará en todo el territorio de la República para empleados y obreros públicos, de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería, el servicio doméstico y toda forma de trabajo subordinado.

Art. 2º — Salario vital mínimo es la remuneración que garantiza al trabajador y su familia la alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestido digno, asistencia sanitaria, educación, esparcimiento, seguro y previsión.

Art. 3º — El salario mínimo vital será fijado por la Comisión Paritaria Nacional de Salarios Mínimos y registrará por período de un año, pudiendo reverse —a pedido de cualquiera de las partes— cada vez que el índice del costo de la vida indique una variación del 10 % o más.

Art. 4º — El salario mínimo vital será establecido como retribución por el trabajo realizado durante la jornada legal y con arreglo a las demás leyes laborales; pero en ningún caso podrá fijarse por unidad de producción, tiempo, asistencia o cualquier otra forma de incentivación o premio.

Art. 5º — El salario mínimo para los trabajadores calificados y semicalificados será —respectivamente— de un 20 % y de un 10 % por sobre las tasas mínimas vitales establecidas.

Art. 6º — El monto del salario se duplicará cuando el trabajo —en caso de imperiosa necesidad— se realice durante la noche o en día feriado.

Art. 7º — Las tasas legales fijadas por la Comisión Paritaria Nacional de Salarios que se crea por esta ley constituyen mínimos absolutos, no admitiéndose reducciones bajo ningún concepto.

Art. 8º — Cuando el empleador tiene a su cargo la provisión de alimentación completa y alojamiento permanente e higiénico se admitirá un descuento de hasta el 30 % con relación a las tasas mínimas.

Art. 9º — Los salarios básicos —sobre los cuales se aplicarán las escalas móviles determinadas por las

variaciones del costo de la vida— se fijarán con arreglo a las siguientes condiciones: a) Mínimo vital; b) Naturaleza del trabajo; c) Capacitación profesional; d) Características generales del lugar.

Art. 10. — Las tasas mínimas fijadas por la Comisión Paritaria Nacional serán obligatorias y sustituirán de pleno derecho a los salarios establecidos por contratos de trabajo individuales o colectivos, salvo cuando éstos fueran más favorables para los trabajadores.

Art. 11. — Los que infrinjan las prescripciones de la presente ley serán penados por la primera vez con multas que determine la Comisión Paritaria Nacional, y en casos de reincidencia, con el cuádruple del importe de la primera multa, que deberá abonarse inmediatamente de producida la notificación.

Art. 12. — Todo trabajador que haya recibido una remuneración inferior al salario mínimo vital establecido tendrá derecho a recuperar por vía judicial la suma que se le adeude.

Art. 13. — Los empleadores estarán obligados a fijar cuadros detallados que indiquen las tasas de salarios vigentes en lugares fácilmente accesibles de los locales donde los trabajadores están ocupados.

Art. 14. — Todo empleador deberá llevar un registro con las formalidades exigidas por el artículo 53 del Código de Comercio, donde constarán todos los datos de los trabajadores que ocupe y los salarios abonados a cada uno de ellos, a fin de comprobar el cumplimiento de la presente ley.

Comisión Paritaria Nacional

Art. 15. — Créase una Comisión Paritaria Nacional que tendrá por objeto fijar los salarios mínimos, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley, fiscalizar su cumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes.

Art. 16. — Estará integrada por ocho miembros: cuatro obreros designados por la CGT y cuatro empleadores designados por las entidades empresarias más representativas. Será presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 17. — La Comisión Paritaria Nacional designará comisiones regionales, que le remitirán antecedentes, informes y datos estadísticos para el cumplimiento de los fines establecidos.

Art. 18. — Para ser miembro de la comisión son requisitos indispensables la ciudadanía argentina y la edad de treinta años como mínimo. Durarán cuatro años en sus funciones —que deberán desempeñar obligatoriamente—, renovándose por mitades cada dos años.

Art. 19. — La comisión establecerá el método para determinar el índice del costo de la vida, reduciendo a lo indispensable el ámbito de apreciación individual. A ese efecto tomará en consideración los índices calculados por el Ministerio de Hacienda.

Art. 20. — Deberá difundir los antecedentes e informes obtenidos y asesorar a los poderes públicos en materia de sueldos y salarios, costo de la vida, vivienda y estado sanitario de los habitantes en lo que se refiere a las enfermedades derivadas de la mala alimentación.

Art. 21. — La comisión podrá constituir los consejos asesores y las oficinas técnicas que estime necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores.

Art. 22. — Los gastos que demande la aplicación de la presente ley serán cubiertos con recursos del presupuesto nacional.

Art. 23. — Antes de los seis meses de la promulgación de la presente ley el Poder Ejecutivo, mediante un decreto reglamentario, constituirá la Comisión Paritaria Nacional de Salarios Mínimos, dando cuenta al Parlamento.

Art. 24. — Los fondos pertenecientes al Instituto Nacional de las Remuneraciones serán transferidos a la Comisión Paritaria Nacional para los fines de la presente ley.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alfredo L. Palacios. — Ramón A. Muñiz. —
Juan C. Coral. — Carlos E. Ocampo. —
Pablo Lejarraga. — Emilio Carreira.

III

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Fijase el salario mínimo vital móvil, que establece el artículo 14 de la Constitución Nacional, en 12.500 pesos mensuales, que regirá desde el 1º de diciembre de 1963 en todo el territorio de la República.

Art. 2º — A efectos de establecer la movilidad del salario de acuerdo con las variaciones del costo de la vida, el Poder Ejecutivo nacional procederá en el término de treinta días a integrar el directorio del Instituto Nacional de las Remuneraciones, tal como lo establece el capítulo I del título II del decreto 33.302, ley 12.921/46.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan A. Luco. — Oscar E. Sarrulle. —
Ruperto Honorio Godoy. — Martín Lozano. — José Armando Caro. — Carlos Alberto Calvo. — José Oscar Ruiz. —
Felipe Pessino. — Ferdinando Pedrini. —
Guillermo Catalán.

IV

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Las disposiciones de la presente ley regirán en todo el territorio del país y se refieren a todas las personas que trabajan por cuenta ajena, como así mismo a los empleados o jornaleros mayores de 18 años de edad, en ambos casos sin distinción de sexos, al servicio del Estado o sus reparticiones autónomas, y se interpretarán como reglamentarias del artículo 14, bis de la Constitución Nacional.

Art. 2º — A los efectos de la aplicación de esta ley se considerarán como básicas las siguientes exigencias para la fijación del salario de cada trabajador:

1º — En materia de alimentación: carne, pan o galleta, arroz o fideos, verduras y legumbres, leche, yerba, azúcar, fruta fresca (de preferencia naranjas, mandarinas, uvas y bananas), todo en cantidades diarias suficientes.

2º — En materia de habitación: alojamiento adecuado e higiénico, de conformidad a la vivienda tipo fijada por el Banco Hipotecario Nacional.

3º — En materia de vestuario. Para cada integrante del grupo familiar, tres mudas de ropa

interior, incluso medias, dos equipos de trabajo, dos camisas, un traje de paseo y un par de zapatos de cuero.

4º — En materia de condiciones sanitarias: agua potable, protección contra insectos y plagas, supresión de charcos y pantanos en torno de la vivienda, medidas profilácticas que atiendan las necesidades de cada región.

5º — En materia de asistencia médica: dispensarios y salas de primeros auxilios, hospitales nacionales o municipales y asistencia domiciliaria para los casos que así lo requieran.

6º — En materia de protección a la infancia y educación: salas-cuna, jardines de infantes y escuelas dotadas de locales adecuados en las que se distribuyan útiles y merienda diaria.

Art. 3º — Para la fijación anual del salario vital móvil, en concordancia con el incremento del costo de la vida y la inflación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación determinará, respecto a la Capital y a cada provincia, los índices de aumentos basados en las cifras del mayor costo de los artículos de primera necesidad y vivienda, que consignen las estadísticas oficiales periódicas en la materia.

Art. 4º — Sobre la base de los índices fijados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al considerarse la renovación de los convenios laborales, las comisiones paritarias procederán a establecer el aumento de los sueldos y salarios, tomando en consideración, a este efecto, los casos en que forma parte de la remuneración el alojamiento o comida a cargo del empleador.

Art. 5º — Fijase en doce mil quinientos pesos (\$ 12.500) el salario mínimo mensual para toda persona ocupada por cuenta ajena o por el Estado y sus reparticiones. El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las previsiones necesarias para incluir en el próximo presupuesto las partidas destinadas a cubrir el mayor gasto originado por la presente ley.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan Antonio Solari. — Luis N. Fabrizio.
— Américo Ghioldi. — José E. Rozas.
— Eduardo C. Schaposnik.

V

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Todo obrero o empleado mayor de 22 años, sin distinción de sexo, que trabaje una jornada diaria no inferior a 8 horas, o la que resulte máxima conforme a la modalidad de la prestación, percibirá una remuneración vital mínima de trece mil quinientos pesos (\$ 13.500.—) mensuales, o su equivalente cuando el trabajo se pague por horas, a partir del 1º de mayo de 1964.

Art. 2º — El Instituto Nacional de Remuneraciones tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley, y de las disposiciones que en su consecuencia se dicten, debiendo el Poder Ejecutivo proveer a su integración y funcionamiento en un plazo no mayor de 30 días a partir de la promulgación de este cuerpo legal.

Art. 3º — El salario vital mínimo establecido por esta ley, y el que en adelante fije el Instituto Nacional de Remuneraciones, conforme a sus atribuciones,

son de aplicación obligatoria en todo el país, y sustituirán de pleno derecho a los salarios establecidos por contratos de trabajo individuales o colectivos, salvo cuando éstos fueran más favorables a los trabajadores.

Art. 4º — El Instituto Nacional de Remuneraciones procederá conforme a las atribuciones fijadas en el artículo 21 del decreto 33.302, ratificado por ley 12.921, a reajustar periódicamente el salario vital mínimo fijado en el artículo 1º de esta ley, de acuerdo a las variaciones de los índices del costo de la vida, teniendo en cuenta las características de cada zona del país, y la necesidad de asegurar en todos los casos al empleado, al obrero y sus familias alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, previsión, seguro social, recreación y vacaciones.

Art. 5º — Serán de aplicación en la estructuración de la política salarial nacional las disposiciones del decreto 33.302 en todo lo que resultaren pertinentes.

Art. 6º — Esta ley es de orden público y son irrenunciables sus beneficios, y sus obligaciones alcanzan a los particulares y al Estado nacional, provincias y municipios.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan Carlos Cárdenas.

VI

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — A partir de la fecha de sanción de la presente ley, los empleados y obreros del Estado percibirán un salario mínimo de doce mil quinientos pesos (\$ 12.500).

Art. 2º — Hasta tanto el Poder Ejecutivo incluya en el presupuesto de la Nación las previsiones para atender ese gasto, las sumas necesarias se tomarán de los recursos que provean los adelantos transitorios al gobierno nacional previstos en el artículo 27 de la carta orgánica del Banco Central de la República.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Angel R. Caggiano.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Bo.

Sr. Bo. — Dada la importancia del problema a discutir esta tarde, en nombre de nuestro bloque solicito que sea invitado el señor ministro de Economía, por lo menos mientras haga uso de la palabra nuestro representante, el diputado Sandler.

Sr. Ferreira. — Apoyamos la indicación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la indicación formulada por el señor diputado Bo, y apoyada por el señor diputado Ferreira, de que se invite al señor ministro de Economía a participar en el debate.

— Resulta negativa.

Sr. Peña y Lillo. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Peña y Lillo.

Sr. Peña y Lillo. — Como miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo, y en representación de la Federación de Partidos de Centro, he firmado también en disidencia parcial el dictamen de comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se dejará constancia de la aclaración formulada por el señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: la Honorable Cámara considera un proyecto de singular importancia que no sólo tiende a modificar las condiciones salariales de los sectores del trabajo de menores ingresos, cumpliendo así con el precepto constitucional del artículo 14 bis, incorporado a nuestra Carta Magna por la Convención Constituyente realizada en Santa Fe, en 1957, sino también a producir consecuencias económicas a través de un aumento de la demanda efectiva y de una mejor distribución de los ingresos.

No se me oculta que algunos sectores de la opinión pública han formulado sus reservas con respecto al tratamiento, en esta oportunidad, de un proyecto como el que consideramos, expresando, entre otras cosas, que la Cámara cede a la presión que pretende ejercer un sector de la CGT a través de su plan de lucha.

Los legisladores que integramos el bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y entiendo que también todos los que componen esta Cámara, no pueden sentirse presionados, porque en su gran mayoría pertenecen a partidos políticos que tienen incorporadas en sus plataformas la institución del salario mínimo, vital y móvil para implantarlo en el país.

Por otra parte, el sentirse presionado es una actitud subjetiva, y aquí debemos tener presente que cuando se trata de un problema de esta importancia, siempre distintos sectores pretenden ejercer presiones sobre el ánimo de los legisladores, tanto en el sentido positivo, es decir en favor de su sanción, como en sentido negativo.

No se nos oculta tampoco que ese sector de la CGT ha levantado la bandera del salario mínimo, vital y móvil y pretende también otras modificaciones sustanciales en las estructuras económicas — algunas de las cuales requieren sanción legislativa — siguiendo, más que el deseo de defender a sus representados, una actitud política francamente subversiva.

Todo eso no puede presionar el ánimo de los legisladores que se sientan en estas bancas. Hay razones, reclamos legítimos del pueblo de la República, y vamos a tratar de solucionarlos sin temor a que alguien nos acuse de ceder a las presiones de los sectores del trabajo o de los empresarios, que oportunamente se pronunciaron en contra de este dictamen, pero que afortunadamente han modificado un tanto su actitud y en los últimos días adoptaron una posición constructiva, tratando de colaborar en la redacción del proyecto que la Comisión de Legislación del Trabajo tenía en preparación.

El sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo concurre a esta sesión con ánimo tranquilo y sereno. No hace más que ratificar otra vez el deseo de cumplir su programa de gobierno, su plataforma electoral, porque desde hace muchos años ha incorporado a su doctrina este principio de la necesidad de la implantación del salario mínimo vital y móvil.

Si rastreáramos un poco los antecedentes, encontraríamos ya en un mensaje y proyecto del presidente Yrigoyen, del año 1921, la intención de implantar el salario mínimo vital y móvil para los empleados públicos. En 1922, reiterando la necesidad de sancionar dicho proyecto, decía Yrigoyen: «El Poder Ejecutivo, al insistir reiteradamente, como lo hiciera, sobre la necesidad de mejorar cuando menos las condiciones de los más modestos empleados públicos, fijando establemente una retribución mínima, lo hizo con el pensamiento de que esa mejora comprendería a todos. Ninguna razón puede invocarse para mantener esta situación de notoria desigualdad, desde que el móvil permanente de la reforma responde a un propósito de reparación que debe revestir el carácter de uniformidad social en todo el país. La grandeza de la nacionalidad, que ha de realizarse con el esfuerzo concurrente de los hogares de toda la República, reclama para éstos siquiera un mínimo de bienestar colectivo de potencialidad económica de las fuerzas productoras.»

En esas palabras se encuentran definidas la filosofía y las ideas que han influido e inspirado la redacción de este proyecto y de su respectivo dictamen. Nos habla ya de la generalización de un salario mínimo vital y móvil, y nos habla también de los hogares, vale decir de las familias, toda vez que este tipo de salario mínimo vital tiende a proteger fundamentalmente al trabajador que debe soportar cargas de familia.

Todos los gobiernos radicales promovieron la implantación de este salario. Los que ejercieron la gobernación de Córdoba lograron no sólo poner en vigencia un sistema de salario mínimo, sino también crear —quizá sea este un antecedente legislativo más lejano— la asignación familiar para el personal de la administración. Desde entonces, muchos son los proyectos que se han presentado al respecto, pero para no extenderme en estas consideraciones previas entiendo que basta con señalar la incorporación expresa a la doctrina partidaria de esta concepción y la labor desplegada por nuestros constituyentes en Santa Fe, que fueron factor principal para que se incorporara a nuestra Carta Magna, como artículo 14 bis.

La actitud del Poder Ejecutivo, al remitir el mensaje y proyecto de ley, no hace más que ratificar una vez más su deseo de cumplir su programa, y nosotros en este momento no hacemos más que reiterar esa ratificación.

Sin remontarme a antecedentes históricos lejanos, para no distraer demasiado tiempo a la

Honorable Cámara, que tendrá que discutir esta tarde en general y posiblemente en particular este importante proyecto, diré que hasta mediados del siglo pasado regía en el mercado del trabajo la ley de la oferta y la demanda, defendida por los economistas liberales y por los juristas inspirados en la misma filosofía.

Pronto se advirtió que, como consecuencia de la industrialización y de la proletarianización de los artesanos, la masa de hombres dispuesta a trabajar en relación de dependencia, es decir, la oferta en el mercado del trabajo, era mayor que la demanda y colocaba a los empleadores en situación desventajosa. Allí comenzó la etapa que se denominó «la dictadura del salario» a través de los patrones. Con la aparición de la gran empresa, como reflejo, comienzan a aparecer las asociaciones de trabajadores que pugnan por obtener no sólo un mejor régimen de trabajo sino fundamentalmente mejores retribuciones. Y comienzan así los llamados contratos o convenios colectivos de trabajo. Pero el Estado advierte inmediatamente que este proceso derivaba en una lucha donde la solución a veces no era la más justa, sino que se imponía la ley del más fuerte y creaba perturbaciones de tipo social y económico, y el Estado moderno, que no puede actuar como el Estado gendarme del pasado, sino que tiene que intervenir en el proceso como un juez para restablecer el equilibrio, se vio obligado a tomar parte activa para poder nivelar las fuerzas y mitigar las consecuencias de las convulsiones sociales que normalmente engendraban la disolución de un convenio.

Para justificar esa intervención quiero recordar a un destacado autor español, el doctor Pérez Botija, quien ha dicho: «Los salarios constituyen un fin y un medio de la actividad política. Se entiende actualmente que es tarea primordial del Estado cuidar la regulación de los mismos; también se advierte cómo, a través de ellos, un gobierno puede realizar su política, no sólo su política social, sino su política de producción y de consumo, su política de precios, su política demográfica.» El salario, definido en su acepción más amplia como la retribución que el hombre recibe por su trabajo, ha dejado de considerarse en la doctrina y legislación del mundo como un precio, para considerársele una renta. Siguiendo esta línea del Estado moderno, que le obliga a intervenir en el proceso económico, se llega, sea por vía administrativa, sea por vía legislativa, a una intervención directa estatal en la fijación de los salarios. De ahí al salario mínimo hay sólo un paso, que ya han dado la mayoría de las legislaciones del mundo.

Para fundamentar la doctrina que trata de implantar en el mundo el salario mínimo tenemos que recurrir a las doctrinas sociales y del salario asistencial. Así podemos señalar la del catolicismo social, doctrina social que a través de las encíclicas, comenzando por la *Rerum novarum*, que ya enunciaba la necesidad de fi-

jar un salario mínimo, luego la *Quadragesimo año*, y ahora, últimamente, la *Mater et magistra*, ha creado y elaborado una concepción moderna del salario, que tiene en cuenta fundamentalmente la atención de las cargas de familia. Así mismo, las otras escuelas o doctrinas «del salario justo», «del utilitarismo social», basándose en la conveniencia de todos los sectores, entienden que los mayores salarios implican menos descontentos, mayor productividad, menos hospitales, un capital humano cuidado; la del salario político, porque, en definitiva, a una política con mayúscula le interesa tener salarios altos en todo lo que puedan ser soportados por la situación económica, para que la demanda y la producción corran parejas, porque son las necesarias paralelas de un proceso de desarrollo.

Analizando las críticas a la implantación de un salario vital mínimo, se ha dicho que la determinación de un salario responde a leyes económicas de carácter natural no susceptibles de ser modificadas por la legislación. A esto se ha agregado, como ejemplo, que la fijación de un salario superior a las posibilidades de pago por la empresa de la que depende el trabajador significaría la quiebra de la misma. La contestación es sencilla: si existen empresas que no pueden mantener un salario mínimo y vital, son empresas cuyo déficit, o debe ser soportado, si interesa mucho al Estado, a través de subsidios, o deben cerrar sus puertas, porque no es posible que uno solo de los elementos de la empresa soporte todas las cargas de la misma.

Se dice también que iguala a todos los trabajadores sin tener en cuenta su capacidad. No es cierto, la verdad es que el ejemplo de los países del mundo en que se ha aplicado legislación de este tipo —y son muchos— admiten el paralelo funcionamiento de las convenciones colectivas entre las organizaciones sindicales y empresarias, que establecen las escalas jerárquicas en cada tipo de actividad.

Se dice que con el tiempo el salario mínimo se convierte en máximo. La realidad demuestra que no es así. Lo que debe tenerse muy presente, y cuidar mucho, es que con la fijación del salario mínimo y vital no vulneremos la situación económica del país en que se aplica o de la zona de actividad en la que tendrá vigencia.

También se argumenta que repercute sobre los costos y, por lo tanto, sobre los precios. Es evidente. Nadie podrá negar que el salario es uno de los elementos que integran el costo; pero tampoco podrán negar quienes se preocupan tanto de este aspecto que el sector empresario, sin un pueblo con capacidad adquisitiva suficiente, dejará de producir y quedará con una notable capacidad de producción ociosa, como ha sucedido en este país no ha mucho y como viene ocurriendo en alguna medida todavía.

Otros sectores indican que la movilidad del salario se obtiene con facilidad a través de los

convenios colectivos y que no es necesaria la implantación de una ley de salario mínimo y vital para obtenerla. Entiendo que la objeción no es justa, porque existen en el país —en éste y en todos— sectores que no tienen organizaciones sindicales fuertes o cuyos dirigentes no responden a la voluntad de sus agremiados. Entonces no obtienen, a través de las convenciones colectivas, el salario necesario para atender a sus necesidades vitales.

Hoy leía en una publicación en la que se expresaba que el proyecto que estoy fundando no soluciona los problemas de todos los trabajadores, sino apenas los de un sector, y se señalaba como ejemplo a los gremios de textiles y de la carne, que tienen salarios muy inferiores a los que deberán percibir, una vez sancionado el proyecto, los trabajadores, incluso aquellos sin cargas de familia. Eso demuestra que, aun existiendo las organizaciones sindicales, hay dirigentes que no son capaces de conseguir para sus agremiados una retribución justa, no obstante el régimen de las convenciones colectivas, y que son esos mismos dirigentes los que hoy están en la calle con este plan subversivo, por el que no toman fábricas —como ellos dicen—, sino que apenas efectúan ocupaciones de brazos caídos, como comúnmente se las llama, siguiendo una orientación de tipo político y pretendiendo exigir a un gobierno instalado apenas hace siete meses soluciones que no supieron conseguir en otras épocas o que ni siquiera reclamaron.

Sr. Ferreira. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor diputado Pena no le ha concedido la interrupción. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Es también una de las finalidades que entendemos va a obtenerse o, mejor dicho, tenemos la seguridad de que se obtendrá a través de este proyecto, de influencia económica interesante y necesaria para el país, el aumento de la demanda efectiva.

Se está produciendo en el país un aumento lento, pero seguro, de la producción y también, paralelamente, una disminución del índice de desocupación. La última encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo ha señalado una disminución de dicho índice, del 14,8 por ciento. Si se logra que las paralelas de producción y demanda efectiva se mantengan en la misma línea, que no se sobrepasen, habremos entrado con facilidad y con seguridad en un proceso de desarrollo definitivo de nuestra economía.

Además, es una idea fundamental que nos ha guiado en la redacción de este proyecto el dar más a aquellos que más necesitan, y por eso hemos preferido partir de la familia tipo, es decir aquella integrada por los cónyuges y dos hijos a su cargo, porque entendemos que es ese sector, el núcleo familiar, el que ordena mejor sus consumos, el que va a invertir mejor sus ma-

yores ingresos y que, seguramente, ha de posibilitar un mejor ordenamiento de todo nuestro proceso económico.

A nadie se le escapa que uno de los problemas fundamentales y más urgentes que afectan el desarrollo económico y social de los países de América latina es la mejora inmediata de los ingresos reales de los sectores más pobres de la población. La solución de este problema viene preocupando a todos los estados latinoamericanos como surge nítidamente de las conferencias, no solamente relacionadas con los problemas del trabajo, sino también con los problemas de la economía. Dado que es improbable que un trabajador mal pagado sea un factor o productor económico eficiente. Los bajos sueldos restringen la demanda de muchos productos, lo que imposibilita la expansión general de la actividad económica, y es conveniente un alza equilibrada de los salarios, desde el punto de vista social. Lo contrario sería injusto, desde el punto de vista humano, y peligroso, desde el punto de vista político, por las tensiones que originan las privaciones a que se ven sometidos importantes sectores de la población.

En el debate público en torno a la implantación del salario vital móvil se ha hecho un argumento relacionado con la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Me he tomado el trabajo de examinar lo que ha ocurrido durante los últimos treinta años en esta materia. He observado que en el decenio 1935/1945, el ingreso de los trabajadores fue creciendo lenta, pero paralelamente al ingreso medio y al de los sectores no asalariados. En el quinquenio 1945/1949 la participación en el ingreso nacional se elevó bruscamente al 55 por ciento; incluso, un año después, en 1950, al 61 por ciento.

Se ha atribuido por algunos comentaristas a la inflación ser la causa generadora de este aumento de la participación de los sectores de los trabajadores en el ingreso nacional. Pero esto quedaría destruido si examináramos ese período, en que se elevó sustancialmente la participación de los trabajadores en el ingreso nacional; se caracteriza también por un proceso de inflación bastante pronunciado, y también fue ésa la característica del período que se inicia en 1959, y en este último, los salarios disminuyeron, al principio, en un 17 por ciento con relación al año 1949, y luego, después de 1961, se estabilizaron en un 13 por ciento menos con relación a ese mismo año de 1949. Siempre con relación a su participación en el ingreso nacional.

Las causas de ese aumento de la participación en el ingreso nacional no fueron solamente la elevación nominal de los salarios, que muchas veces es absorbido por los precios, sino otras medidas de control que se adoptaron en esas circunstancias. No debemos olvidar que el país vivió bajo el sistema del control de cambios rígido y hubo así precios reducidos para los pro-

ductos agropecuarios que se exportaban, como carne y trigo, y también para las manufacturas y combustibles que se importaban. Hubo subsidios directos, por ejemplo, para la carne y el azúcar; tarifas deficitarias, como la de los transportes, energía y teléfonos; pagos reducidos a los empleados, jubilados y pensionados.

Corresponde aclarar que esa distribución no se hizo entre asalariados y empresarios, sino entre un sector y otro de nuestra economía. Por razones de orden político, porque no respondían a una planificación económica, se benefició a través de medidas de gobierno al sector de las industrias; especialmente se creó la industria liviana, que insume mucha mano de obra, y los dos millones de trabajadores que habitan en la llamada zona del Gran Buenos Aires vieron aumentar sus ingresos, paralelamente a los empleadores, que no tenían motivos, ni razones legítimas, para oponerse a esos aumentos de sueldos. En cambio, las medidas restrictivas de cambio y los precios que se fijaron a los productos agropecuarios obligaron también a la baja de la participación de ese sector en el ingreso nacional, tanto de los productores como de sus dependientes o trabajadores rurales. Desde entonces los trabajadores rurales vienen soportando esta situación sin posibilidad de igualar sus ingresos con los de los trabajadores industriales.

Esto se hizo a costa de muchos sacrificios para nuestra economía, porque al alentarse la industria liviana y las importaciones, con evidente perjuicio para ella, porque se consumió capital nacional a través de los servicios públicos, de los productores agropecuarios, y de la vivienda, se disminuyeron las reservas de divisas y se aumentó la deuda exterior.

Sr. Villanueva. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Pena. — No tengo inconveniente, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Villanueva.

Sr. Villanueva. — Señor presidente: deseo expresar que el enfoque hecho recientemente por el señor diputado Pena adolece en algún sentido de falta de claridad, pues junto a ciertas cosas exactas que ha manifestado hay otras que por ser sumamente imprecisas contribuyen a dar una visión deformada de los hechos.

Ha manifestado, por ejemplo, que en un período, que creo que es el anterior al año 1955, la deuda externa aumentó, y esto es absolutamente inexacto. La deuda externa fue casi totalmente eliminada en los años que transcurrieron entre 1945 y 1955. Si bien es cierto que las reservas de oro y divisas disminuyeron aparentemente desde 1943 a 1955, no es menos cierto que dichas reservas en el año 1955, después de la revolución, alcanzaban a 650 millones de dólares.

Se dice y se repite constantemente que el país en el año 1945 tenía reservas de oro y

divisas por un valor aproximado a 1.600 millones de dólares. Esto es aparentemente cierto, pero nadie que esté informado del problema ignora que casi todas esas divisas fueron resultado de los buenos años de la segunda guerra mundial, en que el país exportó mucho e importó poco, es decir, de los años 1939 a 1945. Esas divisas estaban bloqueadas en Gran Bretaña y eran inconvertibles por una disposición legal del gobierno laborista del año 1947. Nadie ignora tampoco que la disminución es aparente, porque el Imperio Británico no obligaba de hecho, para desbloquear esas libras, a comprar una serie de elementos que el país no necesitaba sustancialmente. Sin embargo nadie desconoce que a través de la inversión de esas divisas se logró, entre otras cosas, nacionalizar los ferrocarriles, los teléfonos...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Villanueva. — La nacionalización de los ferrocarriles no se debe mirar como un negocio.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Villanueva: la Presidencia le señala que solicitó la palabra para una interrupción.

Sr. Villanueva. — Pido disculpas a la Presidencia y a la Honorable Cámara. Me hubiera gustado extenderme sobre el tema, pero, lamentablemente, no puedo hacerlo ahora.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La contestación que yo puedo dar a las afirmaciones del señor diputado Villanueva nos llevaría a un debate sobre política económica, al que no quiero entrar en este momento. Ya tendremos oportunidad de demostrar en la Cámara que mis afirmaciones son ciertas.

Conviene efectuar otra aclaración. Habitualmente se toman las cifras globales de la participación del sector trabajo en el ingreso nacional, y ello porque es bastante difícil determinar el ingreso per cápita. No existen en el país estadísticas suficientes para saber si la evolución del ingreso de cada trabajador siguió la misma tendencia que la participación en el ingreso global. No obstante esa falta de estadísticas, es evidente —la estimación puede hacerse porque salta a la vista— que el sector de trabajadores aumentó notablemente su número, sobre todo en el sector industrial por lo que el aumento del ingreso per cápita no guardó proporción con el ingreso global.

Luego, en el quinquenio 1950-55, la curva de participación del sector de trabajadores en el ingreso nacional desciende en los primeros años, paralelamente con la disminución del ingreso medio. En 1959 el ingreso del sector trabajo desciende un 17 por ciento en el cortísimo plazo de un año. Esa distribución, con algunas oscilaciones, es la que se mantiene hasta ahora. En el año 1961 el sector trabajo aumentó transitoriamente su participación en el ingreso total, y

en la actualidad dicha participación es inferior —como lo señalé antes— en un 13 por ciento a la que tenía en 1949.

Las causas determinantes de esta disminución fueron las siguientes: después del aumento masivo dispuesto en 1958 por el Poder Ejecutivo de aquel entonces —aunque fue nominalmente de un 60 por ciento, en realidad representó bastante menos porque absorbía aumentos anteriores—, en diciembre de 1958 se puso en práctica el llamado plan de estabilización. Tal plan tendió a la liberalización de nuestra economía y estaba guiado por la idea central de desanimar las importaciones, encareciéndolas a través del cambio único y libre, la eliminación de subsidios, la elevación de los recargos a la importación, que en algunos casos llegaron al 500 por ciento, y los depósitos previos que obstaculizaron las negociaciones con el exterior.

La consecuencia de todo esto fue un encarecimiento de la vida para los grandes sectores de asalariados industriales, que debieron soportar la carga fundamental de ese plan de estabilización, sin que la estabilidad ni el desarrollo se concretaran luego, de acuerdo con lo prometido. En definitiva, se puso en práctica una política totalmente contraria a la anterior, ya que antes se había beneficiado a los dos millones de trabajadores industriales mientras que con la nueva política se redujo su participación en el ingreso nacional en forma notable. Sin embargo, ambos sistemas llegaron en sus etapas finales a resultados más o menos idénticos, aunque afectando a distintos sectores de trabajadores en relación de dependencia.

La adecuación de los salarios al costo de la vida debe hacerse teniendo en cuenta la situación económica imperante, porque ésta impone lógicamente algunas limitaciones y obliga a manejarse con mucho cuidado y prudencia en la materia.

Un principio de justicia elemental requiere la promoción de un aumento de la participación del sector trabajador en el ingreso nacional. Y necesidades económicas también obligan, para aumentar el poder adquisitivo del mercado, a tratar de promover un aumento de esa participación. Por supuesto que ello será más eficaz si se conecta con un plan que promueva un auténtico desarrollo del país, pues, entonces, la masa por repartir será mayor, y si la distribución alcanza un nivel aceptable, los trabajadores estarán en una situación de bienestar de la que desgraciadamente no han gozado desde hace muchos años.

Este aumento de la demanda efectiva y una mejor distribución originarán naturalmente una mayor producción, pues alentarán a los empresarios del país a realizar las inversiones necesarias al tener asegurado un mercado de colocación. Ese aumento de producción engendra naturalmente una disminución de los costos promedio, y a la vez esta disminución de los costos promedio tiene que engendrar, en un mer-

cado normal, una disminución del nivel de precios, lo que se traduce así, otra vez, en un aumento de la asignación real de los trabajadores, que es la finalidad esencial que se persigue.

Los fundamentos que he expuesto con relación a la implantación del salario vital móvil, los consideraré ahora con respecto a la conveniencia de fijarlos para el núcleo familiar. En primer lugar, ello responde a un principio de justicia social distributiva, que es de la esencia de la democracia social, concepción moderna de esta vieja doctrina política, pues es en la democracia social donde los derechos del hombre se convierten en verdaderos créditos contra la comunidad que ésta debe satisfacer, y no puede hacerlo de otra manera que asegurándole al trabajador, por lo menos, el salario mínimo vital.

Cuando la Iglesia Católica anuncia la necesidad de la fijación del salario mínimo, lo hace siempre, sobre todo desde la encíclica *Quadragesimo anno*, señalando que ese salario debe atender las necesidades del trabajador y de su familia. También lo hace la encíclica *Mater et Magistra*, difundida por todo el mundo y conocida por todos los señores diputados.

En la primera de las encíclicas que he citado se dice: «Hay que dar al obrero y su familia una remuneración que sea suficiente para la atención de todas sus necesidades.» Las ventajas económicas que ya he señalado han llevado a todos los países a procurar atender estas mayores cargas del trabajador con familia a través de sistemas de asignaciones familiares, que se han popularizado en todo el mundo. Francia es uno de los ejemplos. Podría decirse que el porcentaje fijado en el proyecto no coincide en modo alguno con el monto que recibe el trabajador con familia por asignaciones familiares en aquel país, pero debemos tener presente que hay razones de política demográfica que han obligado al Estado francés a tratar de dar a las familias de los trabajadores mayores ingresos. Allí había disminuido notablemente la tasa de natalidad.

4

INVITACION

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia solicita una interrupción al señor diputado Pena, a efectos de informar a la Honorable Cámara que se encuentra en el recinto el miembro de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña señor Christopher Mayhew.

Si hubiera asentimiento, se lo invitará a ocupar un asiento en la Honorable Cámara.

—Asentimiento.

—Ocupa un asiento en el recinto el miembro de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña don Christopher Mayhew.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En nombre de la Honorable Cámara expreso nuestra satisfac-

ción por su presencia en esta sesión y le rogamos sea intérprete ante el Parlamento inglés de nuestro mensaje de simpatía hacia esa institución, hacia la nación británica y a su pueblo. (*Aplausos.*)

Sr. León. — La presencia del colega británico nos satisface y muestra la permanente cordialidad argentina con todos los pueblos del mundo, pero ello no nos hace olvidar a nuestras islas Malvinas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

5

SALARIO VITAL, MINIMO Y MOVIL

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Ya he señalado algunos antecedentes internacionales que abonan la tesis que se sostiene en el proyecto que estoy fundamentando. Existen otros no menos valiosos; por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo declara la necesidad de la implantación de este principio en la conferencia celebrada en 1928; la conferencia interamericana de Chapultepec, también siempre en relación con el trabajador y su familia, en la Declaración de Principios Sociales de América, ratificada por el Congreso Argentino, recomienda la fijación de salarios mínimos vitales suficientes; la IX Conferencia Interamericana de Bogotá, del año 1948, que sancionó la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, efectúa la misma recomendación; y la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, reunida hace pocos meses, en la Declaración de Cundinamarca ha recomendado también la implantación del salario mínimo vital y móvil.

Casi todos los países americanos han incorporado estos dos principios, que son las ideas contenidas en el proyecto: la movilidad de los salarios mínimos y las asignaciones familiares.

En nuestro país el salario mínimo ya se incorporaba como institución en el proyecto de Código de Trabajo, de Joaquín V. González, de 1904. Existen antecedentes legislativos a través de proyectos como el del diputado Repetto, de 1913; el que ya he recordado, de Yrigoyen, de 1919; el del senador del Valle, también de 1919; el del diputado Leónidas Anas-tasi, y muchos otros de legisladores que aún se sientan en esta Cámara.

Como antecedente legislativo también podemos señalar el decreto 33.302, por el que se creaba el Instituto Nacional de las Remuneraciones que, desgraciadamente, nunca funcionó. Las diferencias fundamentales con aquel instituto de remuneraciones, que sólo hoy va a dejar de existir legalmente, porque en el proyecto se derogan las disposiciones pertinentes, son las siguientes.

En primer lugar, en este proyecto adherimos más al principio de la universalidad. En aquél se hacían las excepciones de los empleados pú-

blicos, trabajadores rurales y servicio doméstico. Por otra parte, tenía una excepción que muy pocos recuerdan: autorizaba a una empresa determinada a pagar salarios mínimos inferiores a los fijados por el instituto siempre y cuando obtuviera una resolución favorable del consejo director de dicho instituto.

El citado decreto 33.302 también fijaba salarios básicos para cada actividad, lo que significaba que se interfería en el régimen de convenciones colectivas, sustituyendo a la acción de las organizaciones de trabajadores y empresarios en virtud de esta intervención estatal que yo considero excesiva en la materia.

Voy ahora a pasar concretamente una revista rápida a las disposiciones que entiendo son fundamentales del proyecto de la mayoría de la comisión.

Después de definir qué se entiende por salario mínimo, vital y móvil y los elementos que lo integran, se crea un organismo ágil denominado Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, integrado por representantes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado. Se hallan representados en él las dos partes, diríamos, afectadas directamente, y el Estado porque es el principal empleador y, además, tiene la responsabilidad de conducir la política económica, la que puede ser afectada por la aplicación imprudente de un salario mínimo.

Se enumeran los elementos que habrán de tenerse en cuenta para la fijación del salario índice del costo de vida, los que integran el concepto de salario mínimo vital, la capacidad económica de cada zona de aplicación y las circunstancias que no impliquen un aumento del índice de desocupación.

Se incorpora la idea de la fijación del salario teniendo fundamentalmente en cuenta la familia tipo del trabajador, porque entendemos que es la que soporta en mayor grado las consecuencias del aumento del costo de vida. Las ventajas de esta concepción, en virtud de la cual el salario mínimo vital se fija para la familia tipo y no para el trabajador independiente, son a nuestro juicio innegables, en primer lugar porque responden a un criterio de justicia distributiva, es decir, dar más a quien más necesita; en segundo lugar, porque consideramos que es la familia la que mejor dispone de sus recursos; en tercer lugar, porque al haber adoptado el sistema del pago de las asignaciones familiares a través de los fondos compensadores —después de la excelente experiencia que han tenido los institutos creados por los decretos leyes 7.913 y 7.914, de 1957— y al no tener que soportar esas asignaciones familiares, cargas sociales e impuesto a los réditos, se disminuye notablemente su gravitación en el costo de la vida. Tanto es así que, a través de investigaciones realizadas y teniendo presente la asignación familiar que recibirá la familia tipo en virtud de las disposiciones transitorias incorporadas a este proyecto, podemos asegurar que las cajas de asignaciones familiares podrán afrontar ese mayor egreso con sólo un

5 por ciento, como máximo, de aumento de los aportes de los empleadores.

Se nos ha criticado en alguna publicación —lo acaba de hacer en un comunicado la CGT— de que no hemos contemplado la situación del trabajador individual. El salario solicitado por la central obrera, de 13.500 pesos mensuales, era para esa familia tipo del trabajador, el que ahora elevan —no sé por qué razones y cálculos, porque apenas he leído el comunicado— a cifras que oscilan entre 18 y 23.000 pesos.

Sr. Serú García. — De acuerdo con las estadísticas oficiales.

Sr. Pena. — Si partimos de las estadísticas oficiales y tenemos en cuenta que la misma CGT, en un folleto, partía del salario mínimo fijado en 1956 y que ha tomado en cuenta los aumentos porcentuales del costo de vida que resultan de los informes de la Dirección Nacional de Estadística y Censos, llegamos a la conclusión de que esos aumentos están fijados para la familia tipo, es decir, de un trabajador industrial con esposa y dos hijos a su cargo. En consecuencia, ellos toman el índice de costo de vida para la familia tipo y se lo aplican a un trabajador independiente.

Sr. Serú García. — El porcentual es el mismo.

Sr. Pena. — Pero no la base tomada para el cálculo.

Por otra parte, voy a referir otro argumento que es necesario tener en cuenta. El sueldo promedio del peón industrial, en el año 1954, en época de renovación de casi todos los convenios, alcanzó a 968 pesos. Entonces las cargas de familia eran del orden de los 20 pesos por cada una de las unidades incorporadas a ella, vale decir, esposa y dos hijos. Si le sumamos los 60 pesos correspondientes llegamos a un monto de 1.028 pesos para el año 1954. Si tenemos en cuenta que el costo de la vida aumentó desde entonces hasta la actualidad en trece veces, llegamos a un salario familiar de 13.364 pesos. Vale decir que por las dos vías llegamos, evidentemente, a que, actuando con justicia, debemos fijar el salario familiar en una cifra de 14.000 pesos, que es el monto adecuado, según los informes recogidos a través de investigaciones practicadas por el Consejo Nacional de Desarrollo y otros organismos, a fin de que la familia tipo pueda soportar los aumentos producidos en el costo de la vida hasta el presente.

Se aduce también que hay muchos convenios que han fijado salarios superiores al que puede corresponder por aplicación de este sistema al trabajador individualmente considerado, es decir, sin cargas de familia. Creo que éste es uno de los mejores elogios que se pueden hacer al dictamen, porque evidentemente el espíritu de la fijación de un salario mínimo y vital no es fijar un salario por encima de los básicos, sino elevar el nivel de la capacidad o poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, frente a una situación que demuestra que no están en condiciones de lograrlo, sea porque sus organi-

zaciones gremiales no son lo suficientemente fuertes o porque están mal dirigidas

Sr. Luco. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Pena. — Sí señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — No he logrado entender con claridad, por lo que desearía que se aclarase —ya que en este aspecto radican nuestras disidencias parciales— en base a qué elementos la mayoría de la comisión ha fijado los topes del salario para el grupo familiar y para el obrero aislado. Como se ha dicho, la petición de la CGT se basaba en estadísticas oficiales, que evidentemente son las más completas, y se llegaba a un salario mínimo de 13.500 pesos para el obrero soltero y de 18.300 pesos para el núcleo familiar, esto último por aplicación del concepto que la comisión ha hecho suyo, por cuanto debe asignarse a la familia tipo un monto mayor de remuneraciones. Por ello, no comprendo cómo la comisión ha llegado a la cifra que se establece.

Sr. Pena. — Las últimas cifras que he mencionado creo que deberían haber aclarado el concepto al señor diputado Luco. Las voy a reiterar.

En 1954, año de la renovación casi total de los convenios laborales, el promedio de la remuneración para el asalariado industrial alcanzaba a 968 pesos. En esa época había asignaciones familiares establecidas por convenio —no funcionaban aún los fondos compensadores— de 20 pesos por cónyuge y la misma cantidad por cada hijo a su cargo, es decir de 60 pesos para la familia tipo. Con esto establecemos un sueldo promedio, incluidas las asignaciones familiares, de 1.028 pesos para aquel año. Si tenemos en cuenta que desde febrero de 1954 a abril de 1964 el costo de la vida ha aumentado en trece veces, el salario que correspondería fijar en la actualidad, por aplicación de ese índice, llegaría, para la familia tipo, a 13.364 pesos.

Conforme a otras estadísticas manejadas por el Consejo Nacional de Desarrollo y por otros organismos dependientes del Poder Ejecutivo llegamos a establecer una suma que consideramos adecuada a la realidad económica y a la capacidad de las empresas, y que, además, no originará un aumento en el índice de desocupación: esta cifra es de 14.000 pesos.

Sr. Luco. — Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Pena. — Las ventajas de índole económica que derivarán de esta medida ya las he señalado. Se producirá un aumento de la demanda efectiva, lograda a través de una carga sobre los empleadores, que no será demasiado gravosa, y se distribuye en mayor ingreso en favor de aquellos trabajadores que tengan cargas de familia. A ellos se les efectúa un aumento sensible en sus remuneraciones mientras que

los demás percibirán, como es lógico, aumentos inferiores.

Pero, además, responde a otras finalidades. Sabemos cuál es la situación angustiosa de muchas familias de nuestros trabajadores, que, en muchos casos, soportan déficit de alimentación, de asistencia sanitaria, de vivienda, etcétera. Ello se aprecia en el ausentismo escolar elevado. El Estado tiene la obligación de preservar ese capital humano, porque todo proceso de desarrollo económico y social se basa en que ese factor sea adecuado y capaz, no pudiéndose realizar con una niñez mal nutrida, mal vestida y, en algunos casos, sin educación suficiente porque sus padres no han tenido la posibilidad de dársela.

El salario mínimo vital y móvil originará una mejor distribución de los ingresos, máxime si logramos que los aumentos salariales no se trasladen a los precios y sean absorbidos por las empresas, que también tendrán que contribuir con su cuota de sacrificio en favor del país.

Ya he señalado, a raíz de una pregunta del señor diputado Luco, las razones por las cuales creemos que la fijación del monto en 14.000 pesos se ajusta a las posibilidades y a la realidad económica actual, que no podemos dejar de tener en cuenta, a fin de que el aumento sea real y no se convierta en nominal, como han sido la mayoría de los obtenidos en la carrera de precios y salarios en que viene debatiéndose el país desde hace mucho tiempo.

Se han incorporado los empleados públicos y los trabajadores rurales, que no figuraban en el proyecto del Poder Ejecutivo, por las razones que sucintamente señalaré.

Los informes solicitados al Poder Ejecutivo a través del ministro de Economía, demuestran la posibilidad de esa incorporación. Además, no puede ocultársenos que fijado un salario mínimo, vital y móvil para la actividad privada, lógicamente se presentarían reclamos de los agentes de la administración pública para equipararse con los demás trabajadores, lo que también configura un acto de fundamental justicia.

Respecto de los trabajadores rurales hubo muchas dudas en la comisión, pero, en definitiva, decidimos incorporarlos al sistema, porque a través de la información obtenida de fuentes veraces se ha llegado a establecer que no obstante que los salarios oficialmente fijados a través del Estatuto del Peón no exceden en su mayoría de los 5.000 pesos mensuales, excepto en algunas zonas que están en 5.400, en la práctica la gran mayoría de esos trabajadores están percibiendo remuneraciones superiores.

Además el señor ministro de Trabajo, en una reunión conjunta de las comisiones de Previsión Social y de Legislación del Trabajo, nos adelantó que estaban muy avanzados los estudios para realizar un aumento importante en los salarios de los trabajadores rurales. Ante

esa noticia, y estando también a estudio de la comisión el proyecto que establece asignaciones familiares para todos los trabajadores rurales y crea la Caja Compensadora para el personal dedicado a estas actividades, consideramos que esta incorporación es, además de justa, conveniente, y no ha de perturbar nuestro proceso económico.

Por último, debo dar, aunque más no sea, una somera explicación con respecto a la incorporación a este proyecto de una disposición a través de la cual se fijan precios a los artículos alimenticios y a los materiales de construcción. Es evidente que, no obstante el aumento que propicia este proyecto, por la forma en que ha sido encarado y por el procedimiento que ha sido adoptado para su aplicación, seguramente no debería ser trasladado a los precios; la experiencia nos indica que probablemente tratará de trasladárselo. Y como es intención de los firmantes del proyecto y del Poder Ejecutivo, como surge de su mensaje, que el aumento de salario sea real y no nominal...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia le informa, señor diputado, que restan cinco minutos para su exposición.

Sr. Pena. — Exactamente lo que me falta para poner término a la misma.

Decía, señor presidente, que es nuestra intención que el salario mínimo vital y móvil signifique un verdadero y real aumento. Para ello hemos procedido a incorporar la norma por la cual se fijan precios máximos a los artículos alimenticios y a los materiales de construcción para evitar que, mediante el traslado de mayores costos a los precios, se absorba este aumento de salario y se impida que se beneficie a la economía en la medida que nosotros consideramos justo, lógico y conveniente para un proceso nacional.

Quizá llame un tanto la atención que se incluya en esta norma a los materiales de construcción, pero debo decir que estamos perfectamente informados que —inmediatamente después de haberse anunciado por voceros del Poder Ejecutivo la inminente ejecución de un plan nacional de viviendas— los artículos de la construcción aumentaron considerablemente, llegando en algunos de sus rubros hasta un 25 por ciento. Ello nos obliga a incluir en esta ley la norma de que he dado cuenta, porque entendemos que estos mayores ingresos de los trabajadores han de servirles para acercarlos a la posibilidad de concretar el anhelo de la vivienda propia, sueño que vienen acariciando sin ninguna posibilidad de concretarlo hasta el presente.

Concretando, diré que por un imperativo constitucional, por una reclamación justa de los trabajadores, a la que respondemos, por razones de justicia distributiva, para promover una mayor demanda y una mejor distribución de los ingresos, creemos que este proyecto, que sometemos a la consideración del cuerpo, debe ser

aprobado tal cual fue despachado por la mayoría de la comisión. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Mársico.

Sr. Mársico. — Solicito que previamente se lea por Secretaría nuestro dictamen.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Así se hará.

—Se lee (1).

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Mársico.

Sr. Mársico. — Señor presidente: como miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en nombre del bloque político a que pertenezco, voy a informar el dictamen que ha producido nuestro sector.

Cuando el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley de abastecimiento, nuestro bloque formuló opinión contraria al mismo por considerarlo una medida inoperante. Parecía insinuarse en el trasfondo de ese proyecto de ley que el alza de los artículos primordiales era el resultado de una especie de confabulación entre comerciantes y empresarios en contra de los consumidores y no una resultante de un lamentable estado económico que el Poder Ejecutivo se empeñó porfiadamente en no ver y en no comprender.

Hoy, esa ley, que suscitó en su momento tantas esperanzas, ha pasado al olvido de las preocupaciones populares, sepultada por una ola de escepticismo desatada por el alza incontrolada del precio de muchos artículos primordiales. Es que, efectivamente, el costo de la vida ha registrado en estos últimos tiempos alza impresionante. En abril aumentó un 3,8 por ciento, y para el período comprendido entre octubre de 1963 y abril de 1964, el aumento alcanzó a un 17,5 por ciento.

Lo que el Poder Ejecutivo no quiere comprender es que los precios y los salarios no dependen ni de regulaciones políticas ni de regulaciones jurídicas, sino que están vinculados íntimamente con el contexto económico de la actual realidad nacional y obedecen, en consecuencia, a leyes inexorables.

Hoy el Poder Ejecutivo reconoce tácitamente su fracaso en la aplicación de la ley de abastecimiento, porque envía al Congreso un proyecto de ley estableciendo un salario mínimo vital y móvil para permitir seguir de cerca la carrera de los precios.

Sr. Rodríguez Vagaría. — Eso no tiene nada que ver, señor diputado.

Sr. Mársico. — Le demostraré que sí, señor diputado.

Sr. Rodríguez Vagaría. — Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo...

(1) Véase el texto en la página 703.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega al señor diputado que no interrumpa al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Mársico.

Sr. Mársico. — Pero el gobierno comete el error de insistir en su vieja teoría de pretender resolver, a través de métodos puramente formales, la situación económica y social que impera en la República. Es decir que el Poder Ejecutivo continúa proyectando leyes de ficción, porque no arbitra los medios necesarios para que los obligados puedan cumplirlas, ni remueve tampoco los obstáculos para que se posibilite su cumplimiento.

Debo decir que el gobierno no ha sido un fiel intérprete de los reclamos de los trabajadores y de los sectores empresarios al parcializar peligrosamente este problema, remitiendo al Congreso un simple proyecto de mejoras salariales sin la correspondencia de medidas de fondo que remuevan el actual estado de estancamiento económico y nos impulse hacia una economía en expansión.

Lo que los trabajadores y los empresarios han reclamado con reiterada insistencia es una reactivación general de la economía, como base fundamental para quebrar la iliquidez de las empresas y poner en marcha la total capacidad de producción instalada, absorbiendo la desocupación y promoviendo una afluencia constante de bienes y servicios al mercado. Solamente así se pueden crear bases sanas de una economía, con salarios reajustados pero que conserven un perdurable poder de compra.

Pero el Poder Ejecutivo, fiel a su sino fatal que le lleva siempre a operar sobre los efectos y nunca sobre las causas, desnaturaliza otra vez más el problema y crea en el campo social argentino nuevas circunstancias, nuevos motivos adicionales de fricción y de enfrentamiento entre dos sectores de la producción, el empresario y el obrero, que no tienen divergencias, que coinciden en el diagnóstico de la situación económica y también en la terapéutica que hay que aplicar. El Poder Ejecutivo crea una nueva obligación al agobiado sector empresario y, al mismo tiempo, no crea las condiciones suficientes para que dicho sector atienda esa obligación.

Nadie niega la justicia del reclamo de los trabajadores por una mejora salarial. La cuestión es humanamente trágica y socialmente delicada como para que el gobierno se permita derivar la solución del problema cargándolo, sin recaudos, sobre otro sector económico y social. Precios y salarios son partes de un proceso productivo, pero no los determinan. Por el contrario, precios y salarios oscilan y fluctúan en función del grado de desarrollo de la economía nacional.

En una economía estancada los salarios tienen un bajo poder de compra. En una economía en expansión los salarios manifiestan siempre una

tendencia a aumentar en forma constante y creciente su poder adquisitivo. Lo mismo ocurre con los precios.

En las economías atrasadas se trabaja con altos costos y el resultado final del proceso son precios sumamente elevados. En una economía en expansión se trabaja con costos reducidos y el precio final se orienta hacia un mercado de consumo masivo en crecimiento.

Esta es la clave para interpretar con sencillez y claridad el problema de los precios y salarios. Fuera de esta realidad, simple y sencilla, enmarcada en el juego de las leyes económicas, no hay solución duradera posible.

Fracasó el gobierno cuando pretendió contener el alza de los precios por medio de la ley nacional de abastecimiento, aunque esa ley le haya permitido aumentar la burocracia, satisfacer compromisos políticos y también acrecentar el déficit fiscal.

De la misma manera fracasará toda ley de salarios que no contemple el problema en su integridad, promoviendo las industrias básicas, liberando el crédito para que se abran las fábricas y para que trabajen en plenitud de capacidad de producción instalada y a plena ocupación.

Nadie niega en este momento duro y difícil de la historia argentina la angustia que aflige a importantes sectores de la clase trabajadora; al sector de los ocupados, pero con bajas remuneraciones, y al sector de los desocupados, vasto y denso, que no tiene ninguna remuneración. Para estos últimos, ni el proyecto del Poder Ejecutivo ni el de la mayoría prevén solución alguna.

Todos los sectores políticos y empresarios estamos de acuerdo en que hay que hacer el máximo esfuerzo para resolver el problema de la clase trabajadora, a fin de que perciba salarios que aseguren al empleado u obrero y a sus familias alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreación, como lo expresa con claridad técnica y con precisión conceptual el artículo 18 de la ley 12.921, de 1946.

Además, es evidente que para que exista una economía en expansión es indispensable que, simultáneamente, exista un gran mercado consumidor. Es decir que el interés legítimo del sector empresario coincida con el interés legítimo de la clase trabajadora.

Por otro lado, el salario móvil es una institución que sólo se aplica en países de economía deteriorada, donde el proceso de la inflación diluye y pauperiza el salario, restándole poder de compra.

Sr. Maglietti. — En Suecia no pasa eso, y sin embargo existe el salario mínimo vital y móvil.

Sr. Mársico. — La economía sueca es muy distinta a la nuestra, y otras son las circunstancias que solucionan esa situación en el sector obrero.

La afirmación que he hecho, que contradice la opinión del señor diputado Maglietti, es com-

partida por dirigentes responsables de la Confederación General del Trabajo. El secretario general, señor José Alonso, ha dicho: «Ustedes recordarán que mientras en nuestro país hubo plena ocupación los trabajadores nos abstuvimos de reclamar el salario vital mínimo y móvil. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo necesitábamos. Lo mismo ocurre en cualquier país con pleno empleo. En estas condiciones, el salario se regula por el libre juego de la oferta y la demanda; pero con desempleo, la situación es muy distinta.»

El Poder Ejecutivo admite, al remitir este proyecto de ley de salario mínimo, vital y móvil, que tiene razón la Confederación General del Trabajo cuando enjuicia severamente la política económica de este gobierno, sumida en un proceso inflacionario que limita día a día, hora a hora, el poder de compra del salario, lo cual impide esperar el período mínimo de un año para concertar los nuevos convenios laborales.

Es decir que aquí se patentiza por parte de los organismos del trabajo una sospecha o una prevención hacia los efectos negativos de la conducción económica de este gobierno, que no acierta a salir de una economía de estancamiento para proyectarse en una fuerte y vigorosa política de expansión. Tan es así, que éste es el íntimo significado del reclamo de los trabajadores argentinos. No obstante estar incorporado este instituto del salario móvil en la legislación vigente por el decreto 33.302/45, ratificado por la ley 12.921, del año 1946, la central obrera nunca reclamó la aplicación del mismo por considerarlo innecesario. No lo hizo durante el gobierno del presidente Perón, con el cual tenía afinidades políticas, ni tampoco durante el gobierno del presidente Frondizi, con el que no tenía afinidades políticas. Es que había confianza en el esfuerzo propio, en el trabajo de las fuerzas productivas; había fe y confianza, que hoy están quebrantadas.

La actual crisis económica argentina, o el actual estado de recesión económica es estrictamente financiero. Tiene su origen en la decisión del ministro Pinedo, que al desvalorizar brutalmente el peso...

Sr. Fiol. — ¿De quién fue ministro el doctor Pinedo?

Sr. Mársico. — De Guido. Si tiene suspicacias con respecto a mis palabras, las aclararé.

Sr. Rodríguez Vagaría. — ¿Y qué régimen hizo el plan de SEGBA?

Sr. Mársico. — Pinedo desvalorizó verticalmente el peso, y esta política afectó gravemente a los sectores industriales. Hoy este gobierno, con otros métodos, y anunciando otros objetivos, sigue aplicando una política agresiva hacia la industria, sea porque lo quiere o porque todavía no ha podido vencer las fuerzas de inercia de la conducción política anterior. Lo cierto es que

hasta marzo de 1962 se operaba en el país un vigoroso proceso de desarrollo.

Sr. Fiol. — Con una gran inflación.

Sr. Mársico. — Ya le voy a contestar a eso.

El producto bruto interno aumentó entre 1960 y 1961 en un 15,2 por ciento, tasa que supera al promedio de crecimiento europeo. Pero lo más significativo no es el valor cuantitativo de las cifras, sino el valor cualitativo de la composición de ese crecimiento. Se expandieron las industrias básicas, como el petróleo, el acero, la petroquímica, la celulosa y la construcción de caminos, lo que dio profundidad al proceso económico y permitió constituir las bases serias y sanas para la real liberación de la economía argentina.

La desvalorización de la moneda, por decisión del ministro Pinedo, llevó a la quiebra a los empresarios, porque les impidió atender los compromisos exteriores, envileció el poder de compra, trajo la desocupación y contrajo el mercado. Entre diciembre de 1961 y diciembre de 1963 los quebrantos pasaron de 2.770 millones de pesos a 14.604 millones; los precios mayoristas aumentaron en un 80 por ciento; las ventas minoristas disminuyeron en un 30 por ciento; el volumen físico de la producción manufacturera descendió en un 20 por ciento; y el producto bruto interno descendió entre 1962 y 1963 en el 9 por ciento. Estas son las consecuencias del golpe de Estado del 29 de marzo, que ponen en descubierto las intenciones que lo instrumentaron, intenciones...

Sr. Almada. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Mársico. — Deseo no ser interrumpido en la exposición de mi pensamiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor diputado Mársico desea no ser interrumpido.

Sr. Mársico. — ...intenciones —digo— de las cuales todavía este gobierno no ha podido liberarse, y las sirve con una política económica ausente de la realidad nacional, en la defensa de los intereses tradicionales agro-importadores. El gobierno perdió siete meses para poner en marcha un plan de promoción de industrias básicas y de la actividad industrial general del país, para luego restablecer el anterior, con alguna leve reforma de detalle, cuando lo lógico hubiera sido mantener aquel sistema y realizar las reformas sin interrumpirlo. Con la suspensión sólo obtuvo un efecto paralizante y demoralizador, que penetró profundamente en el campo industrial.

—Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara el señor presidente de la Comisión de Legislación General, doctor Teodosio F. Pizarro.

Sr. Mársico. — Durante ese lapso el gobierno utilizó los medios de pago que graciosamente se le entregaron a través de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, para incrementar

las actividades improductivas y antieconómicas del Estado, aumentando la burocracia y sosteniendo una política ferroviaria, con lo cual se acrecentó el déficit fiscal. A ello debe agregarse una pésima conducción en la comercialización de los granos; un serio entorpecimiento del comercio de exportación de carnes, la destrucción de una de las bases del autoabastecimiento del petróleo a través de la anulación de los contratos; y el aislamiento que, en nombre de un falso nacionalismo, enemigo del nacionalismo verdadero, está aislando al país de los centros financieros internacionales, cuya ayuda no desdeñan los más grandes países del mundo.

Y ahora, señor presidente, con este proyecto de ley el Poder Ejecutivo pretende introducir una cuña en el sector de la producción, separando a trabajadores y empresarios...

Sr. Mujica. — En materia de cuña, ustedes son especialistas.

Sr. Mársico. — ...sin dar las condiciones necesarias para superar el problema, y creando, sí, las condiciones para una futura fricción de tipo económico y social de graves consecuencias.

La CGT no ha planteado un aumento de salarios, pues ha dicho enfáticamente que su principal objetivo es la actualización de los salarios, que debe estar correspondida con una reactivación económica fundada en una política crediticia y fiscal que expanda las industrias. Esto está publicado en *La lucha de la CGT por el salario vital mínimo y móvil*, del año en curso.

Por otra parte, la central obrera no ignora —cómo habría de ignorarlo— que los conflictos obreros en fábricas que se han producido en estos últimos meses no tienen otra finalidad que la de obligar a las empresas a cumplir con los compromisos salariales provenientes de los convenios colectivos, y no a obtener aumentos de salarios. Para información de la Honorable Cámara, voy a leer algunas referencias con respecto a estos conflictos, a fin de clarificar cuál es el estado de los sectores empresarios.

Así, pues, en la empresa Construcciones Eléctricas Especiales, de San Martín, el conflicto se originó por falta de pago de las quincenas y del aguinaldo, y ante la protesta del personal fueron despedidos casi cuatrocientos operarios, de los cuales, al finalizar el conflicto, se retomaron doscientos ochenta y a los restantes se los despidió definitivamente. En Conarg, empresa metalúrgica de Córdoba, se debían cinco quincenas y el aguinaldo de 1962. Los obreros ocuparon la fábrica y obtuvieron satisfacción a sus reclamaciones.

Sr. Bobillo. — ¿El señor diputado mencionó el aguinaldo de 1962?

Sr. Mársico. — Sí, es que el proceso económico está haciendo crisis en estos momentos y los señores diputados no lo comprenden.

El conflicto en la firma Kraft, establecimiento gráfico de la Capital Federal, se debió a la falta de pago de quincena y aguinaldo; los obreros ocuparon la fábrica y obtuvieron el pago. En

Vulcano, empresa metalúrgica también de la Capital Federal, por falta de pago de quincenas y aguinaldo de 1963, entre otros reclamos. El conflicto está ya solucionado.

En CARI (Metalúrgica y Cerámica, Lomas de Zamora), por falta de pago del aguinaldo de 1963 hubo paros parciales, huelga y ocupación de fábrica. Intervino la dirección de la UOM, que llegó a un acuerdo con la patronal. Parte del personal (los ceramistas) quedó descontento.

En Cantábrica (empresa metalúrgica) de la localidad de Morón, hubo lucha por el pago de las 47 horas semanales y pago de viáticos especiales por trabajo de los sábados más allá de las 13. Los obreros superan a la comisión interna y luego de paros parciales obtienen el triunfo.

IAFA (Peugeot) adeuda aguinaldo de 1963 y paga con retardo las quincenas. La comisión interna inicia la lucha y son rechazados los directivos del sindicato cuando pretenden intervenir. Los obreros obtienen un plan de pago en tres etapas.

En Industrias Pirelli por atraso en los pagos de quincenas y despidos, la comisión interna dispuso paros de dos horas por turno.

En Empresa Cavia (metalúrgica) de Matanza, por falta de pago de quincenas y despidos los obreros ocupan la fábrica, y luego de cinco días obtienen el triunfo.

En Ford Motor Argentina, de General Pacheco, hubo paros de una hora por turno contra los despidos; los obreros obtienen el pago de la doble indemnización.

Es decir, entonces, señor presidente, que la política de expansión industrial —como lo sostiene la Confederación General del Trabajo— es el único camino para detener el efecto inflacionario de una masa de dinero que se vuelca al mercado y que tiene que estar compensada por un efectivo aumento de bienes y de servicios. Sólo de esta manera podrá ser detenida naturalmente la trágica carrera entre precios y salarios. Pero el Poder Ejecutivo recoge solamente un aspecto de la cuestión y propicia la sola implantación del salario mínimo vital y móvil.

La vigencia del salario mínimo vital y móvil tal como fue proyectado, aplicado en este medio económico distorsionado, con inflación y receso industrial, va a producir a no muy largo plazo efectos perniciosos que van a repercutir en detrimento de la propia clase obrera.

Sr. Mujica. — Siempre malos agoreros los señores diputados.

Sr. Mársico. — Por otra parte, la incidencia en el mercado de consumo de fondos que provienen de los aumentos salariales proyectados, va a originar el consumo de los stocks e insinuará una leve reactivación industrial. Pero, por otro lado, la falta de una reactivación industrial de fondo, con créditos masivos que pongan realmente en movimiento el aparato de producción industrial, va a determinar que no

exista ante esa masa de medios de pago la correspondiente afluencia de bienes y servicios. En esta forma los precios subirán para compensarse, y la situación volverá nuevamente a empeorarse desde el punto de vista de la clase trabajadora.

El gobierno sabe esto con certeza porque se propicia ahora la congelación de los precios, confesando así, por segunda vez, que el aparato jurídico represivo de la ley nacional de abastecimiento es insuficiente para controlar la economía del país.

En cuanto al sector privado, la implantación del salario vital y móvil, aislado de toda otra medida económica, servirá para agudizar la crisis, acelerará los quebrantos y el cierre de fábricas financieramente muy comprometidas, provocará la quiebra de las empresas marginales, aumentará la desocupación y las situaciones de medio empleo y nuevamente se enrarecerá el mercado y la producción.

Sr. Mujica. — No se preocupe, señor diputado.

Sr. Mársico. — En el actual contexto económico la aplicación de medidas salariales como la presente solamente jugará un papel de cristalización de las actuales estructuras y será un factor de estancamiento. Acelerará la descapitalización de las industrias y apresurará la liquidación de las marginales, incapaces ambas de soportar el impacto financiero de esta medida.

Se equivoca trágicamente el gobierno si cree que con una simple y sola elevación de salarios va a poder resolver el problema decisivo de reactivar la economía nacional.

La contracción de la demanda que se opera en este momento en el país no es la causa sino que es la consecuencia de la recesión industrial provocada por las medidas de Uñedo. Dichas medidas impidieron a los industriales atender simultáneamente la financiación y el pago de la deuda exterior contraída para solventar la instalación en fábricas de equipos y maquinarias y, al mismo tiempo, atender a la financiación del proceso interno de producción. Incuestionablemente de ahí nace el déficit financiero de las empresas y la iliquidez del sector empresario. Cualquier medida que no se oriente a quebrantar este estado de iliquidez de las empresas, a facilitar su desenvolvimiento, aprovechando la total capacidad de producción, a recuperar la totalidad de la mano de obra despedida, volcando bienes y servicios al mercado, fracasará irremisiblemente.

Ayer, el gobierno, con la ley nacional de abastecimiento, quiso enfrentar a comerciantes y consumidores, pero el pueblo, con su fina intuición, comprendió el artificio del esquema y el gobierno continúa ante la opinión pública sentado en el banquillo de los acusados. No se operó la sustitución de responsabilidades. Hoy el gobierno pretende sentar en el banquillo de los acusados al sector empresario dictando una ley

sin facilitarle los medios instrumentales para su cumplimiento. Nosotros no nos vamos a prestar a este juego peligroso para el país, para las instituciones y para el propio gobierno, que parece empeñado en socavar día a día las bases de su propia sustentación.

Los trabajadores y los empresarios están de acuerdo en cuál es la raíz de esta crisis y en diagnosticar los remedios para ponerle fin. Pero el que está en posición disonante en esta materia es el Poder Ejecutivo nacional que se empeña en no ver la solución introduciendo en la vida argentina instrumentos de fricción y de enfrentamiento que serán el comienzo de graves perturbaciones en fecha no lejana.

Frente a este planteo parcial del problema económico y social que significa en el país la cuestión de los salarios, nuestro bloque ha presentado un proyecto que lo abarca en su integridad. Por un lado propiciamos un aumento del salario básico de convenios a 13.500 pesos, de tipo individual, para resolver así en forma inmediata este angustioso problema que aflige a la clase trabajadora. Por otro lado dejamos librado a los convenios colectivos de trabajo la fijación del salario familiar para que en el juego de las circunstancias locales, atendiendo a las particularidades de cada gremio y teniendo en cuenta los sobresalarios que puedan obtenerse en el convenio, se fijen las remuneraciones adecuadas.

Para atacar a fondo las causas de la distorsión económica, para allegar soluciones que se dirijan realmente a la superación de esta crisis y de esta recesión industrial, nuestro proyecto propone dos medidas de fondo sustanciales. Por la primera creamos una Comisión Especial de reactivación económica que dispondrá inicialmente, tomándola de los efectivos mínimos, de la suma de 20.000 millones de pesos con los cuales se podrá reactivar la industria a través de créditos selectivos, a condición de que las industrias reactivadas retomen al personal técnico y obrero que hubieran despedido con anterioridad. En segundo lugar, por el fondo para la tecnificación del campo proponemos la reimplantación del 5 por ciento del impuesto a las actividades agropecuarias, a fin de que de allí salgan los medios para aumentar la capacidad productiva de las explotaciones agropecuarias y facilitar créditos a los productores para que adquieran maquinarias producidas por la industria nacional.

Además proponemos la suspensión de la aplicación del artículo 49 de la carta orgánica del Banco Central, que es la usina en la cual se alimenta el proceso inflacionario argentino.

Propiciamos no realizar ningún aumento de impuestos ni de gravámenes que puedan afectar a las industrias hasta el 31 de marzo de 1965, y, además, hasta esa fecha una moratoria para el pago de impuestos y contribuciones, a fin

de permitir que las empresas al recibir los créditos especiales no tengan que entregárselos al gobierno en pago de sus deudas.

Además se declara de primerísima prioridad nacional la reactivación de la industria de la construcción, por los efectos vigorizantes que ella tiene en la economía, al poner rápidamente en movimiento distintos sectores del trabajo.

Las disposiciones de esta ley, que es de emergencia, con excepción de las del artículo 19, cesarán en su aplicación el 31 de marzo de 1965. Consideramos que con estas medidas de fondo y con las de aplicación inmediata el gobierno, con espíritu constructivo, puede superar este estado de estancamiento económico y lanzarse hacia una economía de expansión. Solamente así, en esta orientación de fondo, podrán tener solución perdurable los problemas argentinos.

Hemos hecho un esfuerzo responsable, señor presidente, poniendo a disposición de la Cámara estas ideas y estas orientaciones. El cuerpo, por el voto de su mayoría, decidirá si quiere intervenir en el proceso económico para modificar la conducción que le está imprimiendo el gobierno, o si prefiere abstenerse de hacerlo y dejar que las cosas queden como están. Si ellas quedan como están, ahí está la respuesta en la calle, con la airada y justificada protesta del sector de los trabajadores argentinos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pizarro).— Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler.— Señor presidente: ha venido a nuestra consideración un nuevo proyecto de ley, básicamente originado en el Poder Ejecutivo. Tenemos que resolver si lo aprobamos o no y, en su caso, con las modificaciones que aconsejare este debate.

Para hacer un estudio serio corresponde que sepamos qué se pretende con la medida del Poder Ejecutivo, primero, y después qué se proponen las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda con este nuevo instrumento legal.

Ciertamente que a través de los diversos mensajes, de las informaciones de los señores ministros, breves, esporádicas, diría yo, dadas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y a través de los informes producidos en este recinto, lo que se procura es elevar el nivel de vida de los trabajadores, aumentar su capacidad de consumo, porque indirectamente, según una información que he oído, esta mayor aptitud para consumir de la clase trabajadora produciría un incremento en la expansión económica nacional. Creo que en el fondo, y a partir ya de este razonamiento, se padece un error de perspectiva, una ilusión óptica. El Poder Ejecutivo y el Parlamento tienen como función esencial —que no les viene simplemente de la experiencia histórica, sino de un mandato constitucional— el propender al bienestar general, y yo no estoy muy seguro de que los intereses particulares de un sector, por numeroso que sea,

han de coincidir siempre con los intereses generales del país.

Es posible que este planteo que formulo pueda ser en parte novedoso, y quizá él no pueda eludir algún posible calificativo tácito de «reacción», pero yo mismo me coloco en esta posición y digo que sí es la reacción. La reacción contra un modo de ver las cosas que no puede continuar. En el fenómeno económico hay un complejo de intereses que deben hallar satisfacción; pero las autoridades públicas deben satisfacer los intereses generales. Muchas veces un sector alude a la capital importancia de su propio interés y trata algo así como de hurtar un poco de lo que corresponde a otro sector —no entro a distinguir o a calificar sectores—, creyendo que con esa pequeña ventaja inicial satisface sus pretensiones. Pero como la economía es un todo complejo, ocurre que a poco andar, no sólo no se han satisfecho los intereses generales, sino que también se advierte, como hecho curioso y singular, que los propios intereses de ese sector pueden haber resultado perjudicados.

En este caso se ha preferido la apariencia del éxito inmediato a la seguridad del progreso y de la prosperidad nacional.

El señor ministro de Economía, cuya ausencia en el recinto lamento pues me gusta decir las cosas de frente, en declaraciones públicas formuladas recientemente, manifestó que él no representa intereses, en este caso, capitalistas. Yo pregunto si el señor ministro de Economía tiene derecho a representar, como tal, a cualquier tipo de interés sectorial a expensas del bienestar general. No es eso lo que manda la Constitución ni al señor ministro, ni al Poder Ejecutivo, ni a este Parlamento.

Esta indagación acerca de las concomitancias y de las interferencias de los intereses particulares con el interés general de toda la República nos lleva de la mano a investigar las relaciones existentes entre una política salarial y una política de progreso o de expansión económica. Me limito a subrayar que en toda política de desarrollo económico es elemento esencial una correcta política salarial, y que no hay ninguna posibilidad de expansión económica con una desacertada política en materia de salarios. El factor de la remuneración del trabajo constituye un resorte principal de la economía de un país, y sépase bien que jamás podrá resolverse un problema económico de la colectividad si no se ajusta a hacer jugar este resorte en los límites justos y precisos que satisfagan el bienestar común del país. Afirmo también que no hay ninguna posibilidad de aumentar los salarios a la clase trabajadora, los intereses al capital, los impuestos al Estado, si no hay un efectivo aumento de producción.

No hay, no hubo, ni habrá jamás, ningún tipo de estos aumentos fantasiosos, dados más por sensibilidad que por conocimiento de la realidad, que puedan satisfacer los intereses de la clase trabajadora o de ninguna otra clase.

Decía un autor: El hombre ha tenido y tiene la capacidad de romper el átomo, el hombre tiene la capacidad para llegar a la luna, el hombre tiene la potencia para hacer cosas extraordinarias, pero lo que el hombre jamás tendrá es aptitud para lograr que el pueblo consuma más de lo que produce. Esta férrea ley no la podrá vulnerar jamás.

En una política económica sana, inteligente, de desarrollo, más que estar preocupándose por el aumento de los salarios nominales, que puede ser inútil y pernicioso, importa lograr la gran producción, que aumente la cantidad y mejore la calidad y disminuya el costo de los productos. A esto se le llama aumento real para el trabajador.

Por eso digo que esta bancada, desde este punto de vista, defiende el interés del trabajador, defiende el interés de cada uno de los sectores del país, sin que esto sea a costa de algún grupo en particular. Aumentese la producción, lógrese la expansión económica, y se tendrá el aumento real y no este aumento que aquí se proyecta, que yo diría que es un aumento —y permídeseme la expresión— «chapucero», por no decir que es un aumento maligno, que daña a la clase trabajadora y perjudica a todo el país.

Sr. Massolo. — Es su opinión.

Sr. Sandler. — Por supuesto; es mi opinión, porque estoy diciendo la mía y no la suya.

Sr. Massolo. — Por suerte.

Sr. Mag'iatti. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sandler. — Estoy dispuesto a conceder cualquier interrupción, pero quiero aclarar antes una cosa.

Este bloque dispone de una hora para el miembro informante del dictamen y de otra hora para el diputado que hable en nombre del bloque, es decir, dos horas. Estoy dispuesto a conceder cualquier interrupción si los señores diputados están de acuerdo en que no se tenga en cuenta el tiempo que me pueda exceder de la hora reglamentaria, que será descontado del que dispone el señor diputado Liljesthrom, que hablará en nombre del bloque.

Sr. Presidente (Pizarro). — La proposición del señor diputado no es reglamentaria. Las manifestaciones del señor diputado Sandler implican que no desea ser interrumpido.

Sr. Sandler. — Deseo ser interrumpido, pero que se me deje decir lo que tengo que expresar.

Sr. Presidente (Pizarro). — Reglamentariamente no corresponden esos descuentos.

Sr. Sandler. — Continúo, señor presidente.

La íntima relación que existe entre una política de salario y un desarrollo económico está dada porque los salarios pueden ser causantes de inflación. Y es sabido por la gente inteligente que con inflación no hay un sano desarrollo. Esto lo dice la mayoría de los economistas y tratadistas, que yo aquí no voy a in-

vocar, y también lo dice el señor ministro de Economía, e, incluso, el dictamen de la mayoría de la comisión.

El señor ministro de Economía en su informe verbal, que yo escuché, expresó que la suma que el proyecto fijaba, si bien no era holgada, tendía a evitar el efecto inflacionario. Vale decir, confesó que si la suma no fuera la justa se podría producir el aumento inflacionario.

En cuanto al dictamen de comisión también reconoce esta coincidencia o esta implicancia de los dos factores, salario y economía, a través de la inflación, puesto que en su artículo 23, previendo la posibilidad de una inflación, apela al congelamiento de precios de una enorme cantidad de productos, con excepción de algunos pocos. Vale decir que esto está reconocido expresamente por los autores del proyecto. Es preocupación de ellos que este aumento de salarios no produzca inflación y no siga dañando la economía argentina.

Me pregunto si esa aspiración verbal de los autores del proyecto, tanto en el orden ejecutivo como legislativo, se materializa a través del dictamen. Para determinarlo, hay que analizar dos referencias: en primer lugar, los antecedentes del proyecto; en segundo término, su estructuración.

Tratamos de evitar el impacto inflacionario, dice el señor ministro de Economía —la autoridad económica máxima de la Nación en el orden ejecutivo—, y para ello el Poder Ejecutivo asumió el siguiente trámite. Primeramente, envió un proyecto a la Comisión de Legislación del Trabajo —de ello hace aproximadamente mes y medio—, donde se lo estudia, se investiga, y a lo sumo lo que se iba a hacer era crear un organismo que fijara posteriormente el salario mínimo vital y móvil.

Cuarenta y ocho o setenta y dos horas antes de este debate, por vía de la bancada mayoritaria, aparece un proyecto en el que se fijan cifras, sin perjuicio del otro organismo.

Aquí las cifras se fijan en 14.000 pesos. Yo pregunté al señor ministro de Economía si tenía conciencia de que este aumento no produciría impacto inflacionario, y el señor ministro me contestó que se habían hecho los debidos cálculos «en unas horas», conforme con lo cual consideraba que en los productos el 20 por ciento del costo correspondería a salario, que el aumento general implicará grosso modo un 10 por ciento y que en los productos el aumento llegaría al 2 por ciento.

Como me llamó la atención lo de las pocas horas, porque una simple minuta profesional demanda a veces un día su preparación, expresé al ministro mi interés en conocer esos cálculos. El señor ministro, a pesar de que me los prometió, no me los hizo llegar.

Yo pregunto: ¿qué señor diputado, qué señor ministro está en condiciones de aseverarme que el aumento del costo por producto, que es cosa

distinta del aumento del costo de la vida, será ese famoso 2 por ciento?

Yo admitiría ese cálculo al almacenero mío, y no sé si se atrevería a ello, pero desde ya digo que no se lo admito a un señor ministro de la Nación. Considero que es una falta absoluta de responsabilidad...

Sr. Maglietti. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sandler. — Sí, señor diputado.

Sr. Maglietti. — Entiendo que la apreciación que hace mi distinguido colega, el señor diputado Sandler, no se adecua a los principios que rigen en la materia, por cuanto sabemos todos que nuestras fábricas están produciendo en una proporción inferior a su capacidad productiva total.

En consecuencia, de acuerdo con un principio económico, al elevarse el salario mínimo, se logrará una mayor demanda; al existir mayor demanda, habrá mayor producción, la que absorberá ese aumento de salario. Ello, lógicamente, dentro de las circunstancias y de las condiciones económicas por que atraviesa el país. De allí que pueda asegurar que no se producirá un impacto inflacionario, sino que simplemente seguirá el ritmo inflacionario que hasta hoy soporata el país. Al producir más las empresas y al existir mayor demanda, no tiene por qué producirse el impacto inflacionario de que habla el señor diputado Sandler.

Sr. Ferreira. — Van a bajar los precios...

Sr. Sandler. — Aquí lo único que no se adecua es el pobre cálculo del señor ministro, que debió haberlo exhibido, y con mayor amplitud.

Todo lo que dice el señor diputado Maglietti puede ser cierto y puede no ser cierto. Pero yo exijo que se me demuestre la realidad de ese cálculo, y estoy seguro de que no se podrá demostrar, porque en estas endiabladas cosas de la inflación ningún cálculo es válido. Al señor diputado Maglietti le falla el metro, y desde el punto de vista que señalo nada pueden calcular ni el señor diputado ni el señor ministro.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pizarro). — Sírvanse los señores diputados no interrumpir al orador.

Sr. Sandler. — Esto queda dicho respecto de la elaboración del proyecto. En cuanto a su estructura, el asunto es más deprimente. Como no se tiene la seguridad —ningún señor diputado la tiene— de que esto no vaya a producir inflación, se prevé el famoso artículo 23. El señor presidente de la comisión reconoció, inclusive, que este artículo era una cosa introducida un poco de contramano, e implica algo así como una pequeña ley de abastecimiento, congelando los precios. Lo más grave es que desde hace tres meses tenemos una ley más completa que la que ha proyectado la comisión en un solo artículo.

Sr. Muñiz. — El señor diputado sigue empeñado en que no haya congelación de precios.

Sr. Sandler. — El señor diputado Muñiz puede escuchar lo que voy a decir.

Sr. Presidente (Pizarro). — El señor diputado Sandler no desea ser interrumpido.

Sr. Sandler. — Hay una ley de abastecimiento. Yo no la voté, mi bloque no la votó, porque sabíamos la inutilidad absoluta de esta ley, que si alguna utilidad tiene es la de hacer desaparecer los artículos de plaza y hacer aumentar los precios. Pero fuera de esto, yo le pregunté al señor ministro, cuando expresó que el sólo anuncio de la promoción de la industria de la construcción había hecho elevar el hierro en un 20 por ciento, ¿por qué no aplica usted la ley que yo no voté pero que usted pidió? El señor ministro de Economía me contestó: porque si aplicáramos esa ley la prensa que usted conoce saltaría inmediatamente.

Cosa curiosa: se nos pide una ley para que luego no se aplique, porque la prensa puede saltar. El señor ministro encontró una excusa a otra realidad más grave. La ley es inútil. La inutilidad se repite aquí; pobres aquellos que depositen sus esperanzas en el artículo 23. Una vez más se engañarán y engañarán. Esto hay que tenerlo muy presente.

Además, durante días y días se discutió en la Comisión de Legislación del Trabajo el aumento de las asignaciones familiares a los trabajadores rurales. Había discrepancias; se veía que el trabajador rural no era idéntico al trabajador industrial, pero no obstante ello, con un criterio muy simpático pero totalmente ingenuo se equipara a los trabajadores rurales a los industriales, sin una investigación seria, ignorando que esto es perturbador para la economía y la prosperidad nacional.

Sr. Damiani. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sandler. — Lamento no poder concederle una interrupción, señor diputado, porque he avanzado muy poco en mi exposición, y quisiera terminar.

Sr. Damiani. — El señor diputado es injusto con los obreros rurales.

Sr. Sandler. — Todo lo que digo es por justicia, no porque sea injusto.

Está demostrado que cualquier aumento sectorial en este tipo de leyes acarrea necesariamente un alza de precios. Sin embargo, en el propio proyecto y por informe del señor ministro, al sector público se lo va a tener pendiente hasta el mes de noviembre. La razón es clara: esto, que no causa impacto inflacionario a las empresas —según el ministro—, en el orden estatal dijo que podía llegar a los 10.500 millones. Entonces, hay que demorarlo; pero para el mes de noviembre, con lo que no sólo no les va a alcanzar el aumento a los pobres obreros del sector privado, sino que los del sector público, cuando lo obtengan, luego de los cuatro meses que deberán esperar, van a estar muertos de hambre.

Esto revela nada más ni nada menos que una superficialidad inadmisibles en un proyecto de esta naturaleza. El problema debe ser planteado en otros términos. ¿Cuál es el problema central? Se ha dicho que aquí se trataba de una cuestión de justicia distributiva. No, señor. El problema de un ministro, de un Poder Ejecutivo y de un Poder Legislativo como el presente es generar el bienestar general, que sólo puede provenir de un aumento de la producción, a costa de un esfuerzo. Ya lo dije antes de ahora: es imposible repartir y consumir lo que no se ha producido. Todo lo demás es fantasía, sea de Dante, de Shakespeare o de cualquier otro.

Sr. Maglietti. — Para que haya más producción tiene que haber mayor consumo.

Sr. Sandler. — Para que haya más producción es necesaria la estabilidad monetaria. Esta no se mide por el cuadro de un dólar que está fijado y cuya legitimidad sería muy discutible. Se mide en la calle, en la variación de los precios de los productos. Precisamente, como el costo de la vida está en constante ascenso, eso está demostrando que aquí prosigue la inflación.

Si los señores diputados me dispensan un minuto antes de interrumpirme, voy a decir por qué prosigue la inflación. Tengo los números, que he conseguido, no por vía del ministerio —porque no se me entregaron—, sino por vía particular, para demostrar, inequívocamente, la continuidad de la inflación.

La falta de estabilidad monetaria altera constantemente los precios —esto lo sabe hasta un niño de primer grado inferior—, desalienta el ahorro y la capitalización, provoca la fuga de capitales, paraliza la producción y con ello genera la desocupación.

Por eso sostengo y refirmo, subrayando el concepto, que una política inflacionaria, sobre todo en este país, tan castigado, es una política criminal contra el pueblo argentino, que no se ha percatado de lo que significa robarle todos los días, en una especie de expropiación monstruosa y colectiva, el valor adquisitivo de su salario.

¿Quiénes son los causantes de la inflación? Aquí vamos a hablar claro, como me gusta hacerlo siempre. No seré yo quien venga a echarle la culpa exclusivamente al gobierno. A él también le corresponde su parte, pero vamos a hablar del gobierno y de los demás.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Sandler. — En primer lugar, me referiré a los sindicatos —este elemento un poco tabú e intangible—, que están viviendo en 1848 y no en 1964, que piden constantemente, con una primigenia sensibilidad...

Sr. Muñiz. — ¿El señor diputado se refiere a los sindicatos patronales?

Sr. Sandler. — Me refiero a los sindicatos obreros.

Sr. Maglietti. — Se refiere al manifiesto comunista.

Sr. Sandler. — Me refiero también al manifiesto comunista. Denme tiempo los señores diputados, les va a llegar el turno a todos.

Sr. Muñiz. — Lo estoy escuchando con atención. Está diciendo cosas que francamente no termino de entender.

Sr. Sandler. — La demanda de salarios nominales, como en este caso del plan de lucha de la CGT, es causante de inflación. Pero si la demanda de los sindicatos es una de las causas determinantes de la inflación, porque se abonan sueldos más allá de lo que la producción autoriza, también es actitud inflacionaria la de los empresarios, señor diputado Muñiz, que se allanan a pagar, a veces complicadamente, por otras razones, sueldos que no debían pagar, pensando que van a mantener su producción e ignorando que no hay ninguna empresa sólida dentro de una economía enferma.

Sr. Gualco. — Hay que mantener las utilidades.

Sr. Sandler. — Por supuesto que sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Sandler, le ruego dirigirse a la Presidencia.

Sr. Sandler. — A usted me dirijo, señor presidente.

Esta actitud de sindicatos y empresarios, que no es exclusiva de nuestro país —no nos equivoquemos—, tiene raigambres psicológicas e históricas que explican la situación, pero que ya en 1964 no deberían justificarla.

También le toca el turno al gobierno. Yo me pregunto si este señor ministro ha pensado bien lo que dice cuando pretende un aumento de 14.000 pesos, sin conciencia ni sapiencia de lo que la inflación puede significar, ya que a la vez nos dice que hay un presupuesto deficitario de 92.000 millones de pesos. El mismo se sonrió en la Comisión de Presupuesto cuando le dije que «en esta danza de millones, 10 o 20.000 millones de pesos nos parecen poco; pero son 10 o 20.000 millones, señor ministro»; y él se sonrió, como queriendo decir: «Tiene razón; hemos perdido la noción.»

Sr. Alfonsín. — Juzgue las palabras, pero no las intenciones.

Sr. Sandler. — Creo que es así.

Sr. Ferreira. — Es la interpretación de la sonrisa.

Sr. Massolo. — Pudo haberse sonreído de la pregunta del señor diputado.

Sr. Sandler. — No es para sonreírse, con 20 mil millones de pesos más de déficit.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Sandler. — Según mis informes, del déficit de 92.000 millones de pesos el 43 por ciento corresponde a las empresas estatales. Los egre-

sos, conforme al estado de tesorería del 1º de noviembre de 1963 al 30 de abril de 1964, cuya responsabilidad corresponde a este ministerio han sido de 138.000 millones. Los ingresos, lo que el Estado ha percibido, son 63.000 millones, y la friolera de 75.000 millones de pesos se han cubierto con las operaciones de crédito de los artículos 49 y 27 de la carta orgánica del Banco Central, y los otros rubros que los señores diputados conocen. Por deudas atrasadas hay 45.000 millones, porque los libramientos impagos hasta este momento ascienden a esa suma, y la deuda con el Banco Central es de otros 45.000 millones. Todo lo cual, y teniendo en cuenta los guarismos que tengo en mi poder y cuya lectura omito, indica que en este período ha habido un incremento de circulante monetario de 33.000 millones de pesos.

Por eso digo que aquí está la causa, no exclusiva pero sí fundamental, del aumento del costo de la vida, y, sin embargo, el señor ministro viene con una solución ridícula, que va a aumentar la inflación; pero él no sabe, ni tendrá jamás la posibilidad de demostrarlo, a cuánto podrá ascender ese golpe inflacionario. ¿Cuál va a ser la solución final? Habrá dos caminos: aumentar los impuestos y frenar con ello la producción, o emitir graciosamente moneda y licuar los ingresos de los asalariados y no asalariados.

Sr. Carreira. — ¿Esa es la solución que propone el señor diputado?

Sr. Sandler. — Yo no propongo. Mi solución debe ser precedida por lo siguiente: el señor ministro se ha quejado en público de que la oposición —en este caso éramos nosotros, porque conmigo fue el diálogo en la Comisión de Presupuesto— se lamenta de estas cosas —como para no lamentarse—, pero no arrima soluciones. Yo tendría que contestarle al señor ministro —y lamento que no esté presente— que lo que *Natura non dat, Salamanca non prestat*. Y en este caso, lo que Salamanca ni la oposición pueden prestar —y no es una ofensa— es la visión de futuro, la actualización de las ideas, la audacia para cumplirlas. No hay que quejarse de que existen intereses que perturban. No necesitamos quejumbrosos; necesitamos hombres de acción y de visión, y eso la oposición no se lo puede prestar.

Sr. García. — Pecado de soberbia, distinguido colega doctor Sandler.

Sr. Sandler. — Puede ser.

Sr. García. — Es una pena.

Sr. Sandler. — Además, lo menos que pudieron haber hecho los autores del proyecto es variar su composición de lugar. Vale decir, una más amplia concepción del mundo. No estamos viviendo hoy aisladamente como pudo ocurrir hace cientos de años. Las experiencias están a la mano. Hay países que han estado en situación tanto o más grave que la nuestra. Han aplicado métodos; hay que verlos, observarlos y emplearlos si convienen. Además, tenemos

experiencias propias. Nuestra actual situación no es de ahora. No reprocho al ministro como causante de la situación. Sería indigno que dijera eso. Lo que digo es que no se puede sobrevivir en esa situación sin reaccionar violentamente contra ella, porque no solamente se hace mal teniendo el designio de hacerlo sino dejando de hacer el bien que corresponde cuando el mal está avanzando.

Nuestra situación no es de aquí ni de ahora. ¡Cómo va a serlo! Hay experiencias propias. Si los argentinos miráramos para atrás largos años...

Sr. Mujica. — No miremos para atrás. ¡Dios nos libre y guarde de ello!

Sr. Sandler. — Tenemos experiencia propia y hay también experiencia ajena. A pedido del señor diputado no voy a mirar para atrás, pero en ese caso me va a permitir mirar hacia adelante.

Sr. Ferreira. — Muchos de los señores diputados tienen sus miradas puestas hacia atrás.

Sr. Presidente (Mor Roig). — No interrumpan al orador los señores diputados. Está en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Tengo en mi banca un libro no traducido aún al castellano, publicado en Alemania en 1962.

Sr. Fernández Núñez. — ¿Lee alemán el señor diputado?

Sr. Sandler. — Mi ascendencia me lo permite.

El autor del libro citado es Ludwig Erhard. He extraído una serie de tablas que demuestran que en Alemania el ministro de Economía se preocupó esencialmente de la estabilidad monetaria, en un denodado esfuerzo contra una opinión que era adversa. Se consiguió, por ejemplo, que el costo de la vida entre 1950 y 1961 aumentara nada más que a razón del uno por ciento anual, acumulativo.

Sr. Carreira. — ¿Eso fue exclusivamente en función de la estabilidad monetaria?

Sr. Sandler. — No exclusivamente; pero la estabilidad monetaria fue una causa determinante esencial.

Sr. Gualco. — Puso precios máximos al carbón y al acero.

Sr. Sandler. — Cosa curiosa: el señor diputado Gualco ha tocado un tema que me interesa mucho. Lo primero que hizo Erhard fue dejar de lado las leyes similares a las que nosotros fabricamos: la ley de abastecimiento. Pero quedaron muchos rubros que no se pudieron descongelar; entre ellos el carbón y el acero. Cuando en 1952/53 se produjo un alza en los precios de esos productos, de casi el ciento por ciento, el ministro tomó una determinación: hay un alza de precios —dijo—, quitemos entonces el control. A partir de ese momento no hubo más alza de precios en el carbón y el acero.

Está informado el señor diputado Gualco.

Sr. Muñiz. — Hay otros antecedentes en Alemania...

Sr. Sandler. — Estoy trayendo una idea nueva, señor diputado Muñiz, y es tan nueva...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase dirigirse a la Presidencia el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Bien, señor presidente.

Decía que esa idea es tan nueva que en Alemania, donde tuvo muy fuertes raíces el socialismo, que luego se propugnó en muchas partes del mundo...

Sr. Muñiz. — En Alemania también hay antecedentes...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase no interrumpir, señor diputado Muñiz.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — En Alemania, señor presidente, donde se encuentran muchos de los orígenes y principales representantes del socialismo, e, inclusive, del marxismo, a raíz de este fenómeno curioso que se observaba en 1959, se reconoció que las medidas adoptadas no eran incompatibles con el sistema socialista, puesto que representaron muchas ventajas para el pueblo, como el mercado libre y el libre juego de las fuerzas que concurren a la producción. Tengo sobre mi banca un libro con los programas y plataformas de los partidos socialistas europeos, en que se manifiesta este reconocimiento. Hay que tener en cuenta que estamos en una Alemania que no vive en 1848 sino en 1964, y que asistimos a la reforma de todas estas plataformas porque se absorben las nuevas ideas. Y es curioso señalar —y lo hago a manera de observación histórica— que mientras en Alemania se observan estos fenómenos de desplazamiento —y podría incluir también a Italia y Japón, de cuyos famosos milagros también se habla—, una tendencia a la libre determinación de las fuerzas económicas, en este cono Sur del hemisferio ocurre a la inversa.

Sr. Muñiz. — Pero, señor diputado, el 40 por ciento...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia reitera al señor diputado Muñiz que no debe interrumpir al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Yo no sugiero, en manera alguna, que se copie el sistema, pero sí que se lo tenga en cuenta. Y señalo que en aquel país no hay villas miserias. En 1950 un obrero ganaba en Alemania 2.839 marcos anuales, y en 1956, 4.473 marcos, esto es, el doble, pero con la aclaración de que se trataba de marcos valederos. Con ese sistema, el obrero tiene derecho a hacerse rico, que es lo que yo sostengo: que tenga acceso a lo que llamamos hoy lujo, a las comodidades que hoy nos parecen disparatadas, que cada uno pueda tener su coche, los artículos del hogar que necesite y la posibilidad de vacacio-

nes y de educar a sus hijos. Este sistema, que reniega de la fijación de precios, del dirigismo en economía, del control de cambios, de la fijación de salarios, pero que controla a empresarios y obreros para que se mantenga el libre juego de la oferta y la demanda, es el que ha producido estos beneficios. Es una experiencia que no se puede ni se debe ignorar.

Sr. Maglietti. — ¿Qué dice el señor diputado de la experiencia de Alsogaray?

Sr. Sandler. — A Alsogaray no lo conozco ni tengo relación con él. Las ideas son objetivas e independientes de los hombres.

Sr. Maglietti. — Pero es la misma experiencia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia exhorta a los señores diputados a que se sirvan no interrumpir al orador.

Sr. Sandler. — Hay materias que preocupan mucho, como es ésta del salario y el famoso pleno empleo. Ahí está la CGT pidiendo el pleno empleo, como si fueran cuestiones, junto con la del salario móvil, que nosotros pudiéramos resolver por la vía legislativa. Ya dije una vez que si tuviese la posibilidad de legislar para aumentar los salarios reales, no ya a 14.000 pesos, sino a lo que fuere necesario, incluso daría a cada argentino un millón de pesos para que reiniciara su vida. ¿Pero por qué no lo hacemos? Simplemente, porque es un dislate, lo mismo que pretender establecer por ley el pleno empleo.

En 1950, en Alemania, sobre 13 millones de empleados había 1,3 millones de desocupados, es decir, el 10 por ciento. En 1956, sobre 18 millones de empleados, pues los beneficios de la economía libre fueron tales que se infiltraron trabajadores que provenían del otro lado de la cortina, los desocupados alcanzaban a 411.000. Vale decir que en seis años casi seis millones de personas consiguieron empleo, a razón de un millón por año. Y eso es posible cuando a cada persona se le deja desplegar su máxima potencialidad y administrar sus propias cosas sin que el Estado le robe, de día y de noche, el sustento. De modo que, sin inflación, estas cosas, estos milagros son posibles.

Sr. Ghioldi. — ¿Cómo explica que en los Estados Unidos, que tienen esa libre iniciativa, exista un 8 por ciento de desocupados?

Sr. Sandler. — Podría explicárselo, señor diputado Ghioldi, pero usted lo sabe muy bien.

Creo que todo esto exige una revisión general de muchas ideas. Recuerdo que hace pocos días se pretendió, con un propósito bien inspirado, pero no fundado en la causa más adecuada, no dejar entrar en el país al señor Schacht. La imputación que se le hacía era que había estado complicado con el nazismo. Era un error, porque si a este señor no se lo debiera haber dejado entrar es, en cambio, porque instituyó en la Alemania de aquel entonces, 1933, un sistema económico que debía acabar necesariamente en la dictadura, en la autarquía y en la pobreza del pueblo alemán. En 1953 los obreros alemanes ganaban el doble de lo que ganaban en 1936,

y con un régimen de libertad. Por esta causa no se lo debió haber dejado entrar. Vale decir que se le repudia por su filiación política y, sin embargo, se coincide con él en su concepción económica como si el ser humano pudiera partirse por el medio...

Sr. Massolo. — La libertad es más importante que los problemas económicos.

Sr. Sandler. — No hay libertad sin solución de los problemas económicos.

Sr. Massolo. — La libertad hace a la dignidad humana.

Sr. Sandler. — La angustia económica no permite ser libre.

Por eso, yo que he leído algún folleto de economía que anda por ahí suelto, y que no pertenece al sector del trabajo sino al sector empresario, en donde se sugiere la posibilidad de aplicar el sistema de la economía nazi de 1933, me lleno de espanto, porque no se cae en la cuenta de que han pasado treinta años, que las ideas cambian, y que hay que dar la posibilidad a todos los habitantes del país para que desarrollen con su máxima potencia la energía que cada uno tiene. No ha de ser con estos sistemas de limosna, fijando salarios mínimos, que este país va a salir adelante.

Ante la trágica situación que el señor ministro de Economía nos ha planteado en cuanto al presupuesto yo digo lo siguiente: en este país y con semejante presupuesto un ministro de Economía que no se levante todos los días con la convicción de haber reducido el déficit en quinientos millones está perdiendo el tiempo miserablemente. No se puede admitir que en un presupuesto de doscientos mil millones de pesos haya un déficit de cien mil millones. Esto es la locura, estamos perdiendo el tino...

Sr. Muñiz. — La locura es que no tengamos todos el coraje de terminar con el déficit del presupuesto obteniendo los dineros necesarios para ello de los detentadores del privilegio económico.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega al señor diputado Muñiz se sirva no interrumpir al orador, y le advierte que de continuar haciéndolo se va a ver obligada a llamarlo al orden.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Por eso digo que el Poder Ejecutivo, juntamente con nosotros, tiene la obligación de alentar la producción velando por la estabilidad monetaria e incitando al ahorro y a la capitalización. Si además de esta obligación positiva se descuida aquella otra que furtivamente, por error o por falta de conocimiento de datos —que exijo y no se me dan—, se filtren proyectos inflacionarios, nosotros no solamente

dejamos de hacer lo que debemos, sino que contribuimos a que el país se desbarranque.

Este es un proyecto que acelerará más el paso hacia la miseria del pueblo argentino. Por eso digo con toda seriedad y honestidad que creo estar en lo cierto; quizás no muy acompañado, pero sí en lo cierto.

Yo reclamo a los señores diputados que cuando voten este proyecto que tienen entre manos piensen bien las cosas que he dicho; piensen que se debe invertir la tendencia; piensen que en vez de hacer un bien con lo que proyectan, seguramente harán un tremendo mal a todo el país. (Aplausos.)

Sr. Pizarro. — ¿Y su solución, señor diputado?

Sr. Elena. — No la dio, ni la dará.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — Señor presidente: según el Antiguo Testamento el trabajo es por su naturaleza una maldición y un castigo para el hombre. Le ha sido impuesto en virtud de sus pecados y siendo el hombre un ser manso tolera esta situación y trabaja con el solo objeto de sostenerse en la vida juntamente con su familia. Si las condiciones en que desenvuelve su actividad son mínimamente aceptables, se conservará en aptitud física apta para que se obtenga un alto rendimiento.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Domingorena. — Señor presidente: no se puede escuchar así una exposición.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia exhorta a los señores diputados a permanecer en sus bancas y no conversar mientras está exponiendo un orador.

Sr. Monte. — Esto revela un poco el síntoma de descomposición en que vivimos.

Sr. Fernández Núñez. — No puede hacer esa afirmación, señor diputado; es un agravio.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — Ya se quedarán tranquilos los representantes de la bancada oficialista después de haberme escuchado.

Decía que si las condiciones en que el hombre desenvuelve su actividad son humanamente aceptables se conservará en aptitud física apta para que se obtenga un alto rendimiento desde el punto de vista mecanicista y funcional.

Existirían dos factores que impulsan al hombre a trabajar: uno positivo y otro negativo. El positivo estaría dado por el dinero, que resultaría ser el grande y fundamental incentivo. El aspecto negativo fundamental consistiría en el temor de perder su empleo.

Con posterioridad y en los primeros años de nuestro siglo, el enfoque de estos aspectos de la vida humana evoluciona impulsado por los avances de la física, en particular, y de las cien-

cias, en general. Y es Taylor uno de los primeros que aplica los conocimientos técnicos y psicológicos para obtener del hombre el máximo de su capacidad laborativa. Así es que sostiene que la naturaleza del ser humano posee algunas condiciones o propiedades fijas y que ellas son las que hacen que el trabajo le resulte desagradable y que, en definitiva, se desplace activamente impulsado por el afán de lucro y por la codicia, no obstante ser naturalmente perezoso, según Taylor. En esto consiste la ley del pan y del garrote.

Sostenía también Taylor que en la industria, a diferencia del deporte, las ineficiencias se pagan con dinero, y en otro aspecto, que las fábricas existen, existían y existirán en todo tiempo para satisfacer la necesidad de dividendos de sus propietarios.

Uno de los recursos esgrimidos para descartar la posibilidad de entrar a considerar las condiciones en que se desenvolvía el trabajo de los seres humanos era que el patrono no adquiría el operario en sí mismo, sino su fuerza de trabajo, y que, por lo tanto, sólo le interesaba el rendimiento.

A propósito de la capacidad de iniciativa del obrero, se sostiene, según la vieja concepción, que no le corresponde tomarla ni tenerla ni provocar discusiones; en fin, no debe opinar y sólo debe limitarse a cumplir las órdenes que se le imparten. Así es como la gente que necesita vivir recurre a la venta de sí misma, por supuesto que con íntimo y profundo odio hacia el comprador.

Era un triste y desgraciado modo de hacer transcurrir los días. De esa manera todo el poder de iniciativa queda en manos del patrono, al que el obrero sumisamente debe obedecer. No hay que dudar que esa situación no sólo genera profundos rencores, sino que paralelamente los patronos comienzan a temer a sus empleados y no aciertan a transferirles responsabilidades. Sólo atinan a efectuar concesiones mínimas en materia salarial y, con el correr del tiempo, algunas mejoras en las condiciones de la tarea cotidiana.

Estoy señalando, aunque sintéticamente tal vez, los orígenes de los problemas a que asistimos hoy en el campo de las relaciones entre el trabajador y el empleador, y, en una esfera más amplia, diría que son problemas de las relaciones humanas en general.

Está claro que la mujer y el hombre no aceptan que su trabajo sea considerado una mercancía que pueda entrar en cotización como las acciones en la Bolsa de Comercio, y que, por lo tanto, no está sujeto a la ley de la oferta y de la demanda, al igual que las materias primas que el industrial debe adquirir en el mercado.

Avanzan los tiempos, pero el patrono que trató al obrero como se trata a una máquina comienza a horrorizarse porque el obrero ha creído lo que le inculcaron. Se le hizo creer que

el trabajo era una cosa horrible y sumamente desagradable; se le inculcó el miedo a la miseria para incentivar su actividad y obtener así los altos rendimientos que, como decía, generan crecientes dividendos.

En nuestros tiempos, el avance de la psicología y un mayor conocimiento de la sensibilidad humana; el conocimiento más amplio de la mentalidad del individuo que está en constante evolución, así como también el impulso de la concepción democrática, han determinado una tónica totalmente distinta. Se han invertido los términos y, en consecuencia, lo que antes se conceptuaba una maldición hoy es una bendición y es un motivo de felicidad, o por lo menos, debería serlo en plenitud.

En la vida humana el trabajo se ha constituido en una de las partes esenciales, puesto que otorga condición y ubica al ser humano como nexo y lo liga a la sociedad. La sociedad moderna, con los descubrimientos de la técnica, con los medios avanzados de producción masiva de bienes y con el sistema de publicidad, para citar algunos tópicos, ha creado nuevas apetencias, nuevos deseos. La gente advierte que necesita otras cosas, cosas que son de orden espiritual y de orden material. Una de las grandes contradicciones de esta sociedad, y quizá uno de sus defectos más evidentes, es la de que a la par que se crean apetencias, se limitan las posibilidades de satisfacerlas. Esto trae desconcierto y, consecuentemente, provoca nuevas luchas. El hombre aparece colocado al servicio de la máquina y de los intereses del capitalismo, cuando los términos deben ser a la inversa: la máquina al servicio del hombre, y los instrumentos de que se vale el capitalismo al servicio de la felicidad de la criatura humana.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

Sr. Monte. — Por supuesto que en nuestro país no somos extraños a los avatares de la sociedad de que hablo, y una serie de fracasos de las clases dirigentes, por miopía, por insensibilidad, por apetito de poder por el poder mismo, nos ha colocado en la grave situación que hoy contemplamos azorados y perplejos. Las viejas estructuras económicas, sociales, políticas y mentales han caducado y se derrumban. Asistimos a la muerte de una concepción y a los intentos de nacimiento de otra. Necesariamente, este proceso ha de ser apasionante, y evidentemente ha de resultar doloroso para algunos sectores que luchan y que van a seguir luchando para mantener incólumes las viejas fórmulas y los viejos moldes de nuestra sociedad argentina, que ciertamente no sirven ya para la realización revolucionaria que nos proponemos una gran mayoría de los argentinos.

El proyecto de salario mínimo vital y móvil que consideramos puede resultar una solución importante, pero no definitiva. Esta medida debe ir acompañada de otras más sustanciales que impulsen aceleradamente el desenvolvimiento de la economía argentina.

En un estado de ocupación plena, puede ocurrir que en determinado momento se produzca una distorsión entre la oferta y la demanda, y entonces es aceptable y no peligroso el arbitrio que vamos a adoptar ahora, porque evidentemente tiende a corregir la situación apuntada. Pero, ¿qué ocurre en nuestro país en estos momentos? Hay aproximadamente 800 mil desocupados, lo que supone una tasa de desocupación sumamente elevada y con tendencia, a juzgar por lo ocurrido hasta este momento, a sostenerse en ese nivel, no obstante las manifestaciones que hiciera el señor ministro de Economía en la Comisión de Legislación del Trabajo.

El doctor Blanco ha sostenido que, en virtud de estadísticas en su poder, se ha producido una merma del 14 por ciento en esa tasa de desocupación.

Sr. Musitani. — Del 14,8 por ciento.

Sr. Monte. — He escuchado al señor ministro mencionar una reducción del 14 por ciento, y, además, referida a un sector muy reducido, lo que equivale objetivamente a aceptar que la realidad no es exactamente tal como pretende que sea el señor ministro.

Sr. Pugliese. — ¿Si me permite, señor diputado?

Quiero recordarle que la disminución del 14,8 por ciento se ha establecido sobre las mismas bases en que se había calculado la tasa de desocupación.

Sr. Monte. — Lo que ocurre, señor diputado, es que en el país hay sectores que en esta materia opinan de distinto modo, y no nos ponemos de acuerdo acerca de la cifra exacta de los desocupados.

Sr. Presidente (Del Pero). — La Presidencia ruega a los señores diputados se sirvan no dialogar.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — Si el gobierno no se decide, mediante una política intrépida y corajuda —diría—, a tomar medidas económicas que conduzcan a una rápida reactivación, y que como consecuencia ésta absorba mano de obra, corremos el peligro de haber legislado en el vacío.

Quiero advertir sobre estos problemas en modo especial al Poder Ejecutivo, que es el que tiene la responsabilidad de la conducción de la economía del país.

Hay que cuidar que este importante paliativo no se convierta en un *boomerang*. El dictamen de la mayoría está basado en las ideas del economista Moyano Llerena y es sin duda mejor que el que ha remitido el Poder Ejecutivo.

Sr. Massolo. — Moyano Llerena no es la única fuente inspiradora.

Sr. Pugliese. — Es una fuente importante.

Sr. Monte. — Así es; es muy importante y es la que acogieron los señores legisladores del radicalismo del pueblo en la Comisión de Legislación del Trabajo.

Mi opinión, que es también la del gobierno —y hago referencia a las manifestaciones de los ministros de Economía y de Trabajo—, es que este proyecto tiene puesta su mira en el núcleo familiar, lo que me parece positivo; por eso lo aprobamos sin reservas en este aspecto. Pero se olvida del trabajador soltero, lo que constituye un aspecto negativo del proyecto.

Sr. Massolo. — Si se casa, resuelve el problema.

Sr. Monte. — De esa forma se estaría introduciendo tangencialmente un impuesto a la soltería.

Sr. Musitani. — Es todo lo contrario; es una ayuda social.

Sr. Monte. — Volviendo al problema de la desocupación, señalo que Beveridge sostiene que el mayor de los males del desempleo es el que hace que los individuos se sientan inútiles, indeseables y sin patria. Y en otro aspecto, Collier dice que muchas veces el desempleado acepta menores remuneraciones que las estipuladas por los convenios, simplemente por recuperar una condición social reconocida.

Estos aspectos psicológicos y morales deben ser tenidos muy en cuenta de manera especial por el Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de conducir la cosa pública. Pienso que si el gobierno no adopta una política crediticia concordante con las necesidades de la industria, la sanción del proyecto que consideramos puede provocar mayor desocupación.

Opino que sería indispensable una enérgica acción paralela a la del orden económico por parte del Ministerio de Trabajo encaminada a impedir que la patronal despidiera a sus empleados por razones fundadas en la ley que estamos considerando, si es que así lo hacen. Sería altamente beneficioso para el país que las autoridades piensen en estas cuestiones, a las que asigno fundamental importancia, pues son de mayor interés que soñar con una posible división de la CGT.

Si se resiste el impacto psicológico que puede acarrear este salario mínimo, porque no es vital, las mayores erogaciones de las empresas serán revertidas a través de una mayor demanda de bienes y servicios, es decir, que el incremento del poder adquisitivo de los salarios dará una resultante positiva.

Las medidas de contenido social, para que tengan fundamento, sustento sólido y perdurabilidad —y eso ya lo hemos dicho en otra ocasión—, deben ir acompañadas de una acción dinámica, enérgica, decidida y contundente por parte del gobierno nacional. Deseo verlo al presidente Illia, a sus ministros y a la bancada oficialista en esa tesitura, para que el pueblo

recupere la fe en los gobernantes y en las instituciones democráticas, que sin duda deben ser adecuadas a los requerimientos de este subyugante y muchas veces desconcertante momento de la vida nacional.

En todas estas cosas el pueblo debe tener participación muy activa. Un verdadero desarrollo económico, para que sea real, efectivo, para que se produzca ciertamente, debe contar, como acabo de decir, con una participación decidida y consciente del pueblo trabajador.

Digo que hay que tener cuidado con volver a etapas de la economía pastoril, y hay que tener cuidado con la transferencia de ingresos suculentos de la oligarquía vacuna hacia una nueva oligarquía de tipo industrial que se está gestando en el país.

Hay sectores políticos que hablan de desarrollo económico, pero se olvidan del pueblo; creen que el desarrollo económico es posible sin una participación denodada y esforzada del pueblo trabajador. Hablan de desarrollo pensando en desarrollo para unos pocos. Piensan en transferencias de ingresos de la oligarquía vacuna hacia una nueva oligarquía industrial. ¿Y el pueblo? El pueblo está ausente en todas estas cosas.

Soy uno de los hombres convencidos de que no podrá haber desarrollo en éste ni en ningún otro país del mundo si el pueblo trabajador no tiene una activa y permanente participación en la elaboración de los planes de desarrollo, en su concreción y en una distribución equitativa de la riqueza. Y cuando digo equitativa no lo digo a la usanza conservadora, al modo de la vieja mentalidad conservadora.

Sr. Almada. — ¿Me permite una aclaración?

Sr. Monte. — Ahora no, señor diputado.

Sr. Almada. — Ahora es la oportunidad.

Sr. Monte. — Quiero reconocer —y tal vez estas palabras satisfagan al señor diputado— que hay sectores industriales...

Sr. Almada. — El señor diputado ha hecho manifestaciones imprudentes.

Sr. Presidente (Del Pero). — El señor diputado Monte no desea ser interrumpido.

Sr. Monte. — Digo, señor presidente, que hay sectores industriales que interpretan este proceso que se está viviendo en el país. Lo interpretan cabalmente, diría. No me atrevo a hacer una afirmación en cuanto al porcentaje de dichos sectores, pero sí digo que es un sector importante de empresarios que cree que el país tiene que ir hacia nuevas modalidades, que advierte que hay una nueva mentalidad en el mundo y fundamentalmente en este país, mentalidad que no se puede ignorar.

Sr. Almada. — La mentalidad de los ministros de economía que tuvo la UCRI.

Sr. Presidente (Del Pero). — Señor diputado: las interrupciones deben hacerse con el consentimiento del orador y la venia de la Presidencia. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — Los señores ministros Alsogaray y Pinedo fueron colaboradores del gobierno que presidió el doctor Arturo Frondizi, es exacto. Y también es exacto que son correligionarios del señor diputado que me interrumpió.

Sr. Jofré. — Eso sí que no es exacto.

Sr. Caro. — Pinedo fue ministro de Justo.

Sr. Monte. — No quiero que el pueblo pierda la confianza que deben merecer leyes como la de abastecimiento...

Sr. Almada. — Los ministros que citó el señor diputado han estado al servicio de los intereses que tenían prevalencia en el gobierno de la UCRI, pero no pertenecen a nuestro partido.

Sr. Presidente (Del Pero). — Sírvase el señor diputado Almada no interrumpir al orador.

Sr. Monte. — Yo no estoy arrepentido de las cosas que he hecho en función de diputado de un partido gobernante, pero sí tengo el coraje suficiente para reconocer errores y para decirle al pueblo argentino que estamos dispuestos a enmendarnos, a rectificar errores, a cambiar de rumbo para que el país ande por la senda que debe seguir. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

No quiero, decía, que el pueblo pierda la confianza que deben merecer leyes como la de abastecimiento, por ejemplo, que para alguna prensa y para algunos sectores políticos afines aparece como un verdadero fracaso. En realidad, lo que anda mal es su aplicación; aquí hay una defectuosa aplicación, y esto es lo que a mí me preocupa. El gobierno la proyectó y el Parlamento le dio sanción. Nuestra bancada procuró perfeccionarla, aunque admito, como acabo de decirlo, que la ley es buena. Después de ello me pregunto qué ha pasado. Al gobierno lo noto indeciso, y me pregunto si en definitiva se dispondrá a aplicarla con rigor o no.

Lo peligroso de estas sanciones es que se materializan a veces compelidas por la gravedad de la hora, gravedad que se traduce en estos días en la ocupación de los centros de producción. Me preocupa, también, que pueda interpretarse este tipo de sanciones como una contraofensiva gubernamental, cuando la realidad —lo reconozco— es que el Ejecutivo pretende atender un reclamo de los trabajadores, tardíamente, pero a tiempo. También reconozco que desde hace tiempo figura en los programas del partido gobernante como postulación de soluciones de tipo social.

Permitaseme que diga que aparecemos rezagados en estas cosas. Los problemas existen y subsisten y el reclamo del pueblo es cada vez más sentido y perentorio, y cuando la gota rebalsa la copa salimos a buscar soluciones.

Esta administración radical del pueblo, como todas, triunfará o fracasará en la medida en que pueda obtener un consentimiento espontáneo y libremente expresado por el pueblo. Debe tener presente el gobierno que juegan factores eco-

nómicos y emocionales que determinan la conducta de nuestros compatriotas.

A propósito de esto, quiero recordar que el señor ministro de Economía, en una reunión realizada cuarenta y ocho horas atrás con la Comisión de Legislación del Trabajo, manifestó que cada vez que quiere tomar una medida que tienda a beneficiar al pueblo e impulsar el progreso del país se encuentra con que hay fabulosos intereses que se oponen a esas medidas de gobierno. Yo le expresé en esa reunión —y me complazco en reiterarlo aquí— que en su condición de conductor de la economía del país se habrá trazado seguramente una estrategia para combatir a esos sectores del privilegio que no se resignan a perder las posiciones alcanzadas, y como uno de los tantos movimientos tácticos que tendrá que adoptar estará seguramente —confío en ello— denunciar ante los representantes del pueblo, ante el Parlamento, dónde están esos intereses, en qué consisten y quiénes los representan, para que le preste todo el respaldo necesario a fin de combatirlos con eficacia, porque en definitiva el Parlamento es gobierno, integrado por representantes de distintos sectores de la opinión del país. Y nosotros estamos dispuestos, aunque no pertenezcamos al oficialismo, a dar todo nuestro apoyo, enérgico, firme y patriótico para que el gobierno pueda triunfar en esta lucha, porque, finalmente, no será el triunfo del gobierno sino de todo el pueblo argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

He señalado antes que la determinación de incrementar las asignaciones familiares supone un acto de estricta justicia, fortalece uno de los grupos primarios, fundamentales de nuestra sociedad, y fortalecerlo equivale a potencializar su influencia, que regula, a la postre, la conducta del individuo, como bien se ha dicho en otras ocasiones.

No se debe olvidar que con motivo de la desocupación la población se desplaza constantemente y esto produce un serio desarraigo de la familia.

Discrepo en cuanto se sostiene que el trabajador soltero tendrá un mínimo de 9.800 pesos mensuales, cuando esta cifra sería aproximadamente el promedio actual fijado en los convenios colectivos, promedio ya existente, a juzgar por los datos que nos ha proporcionado el señor ministro de Trabajo en la comisión y que demuestran que evidentemente, para algunos sectores de la actividad laboral, ese mínimo ha sido superado por convenios que están en vigencia desde hace meses o tal vez un año.

De manera entonces que el aumento de los mínimos salariales que se fijan por el dictamen de la primera minoría es, a mi juicio, ilusorio. Por eso, proponemos en nuestro despacho en disidencia elevarlo a 11.200 pesos. No se nos escapa que el soltero, en muchos casos, es sos-

tén de hermanos menores, de sus padres o de otros familiares, y por eso hemos debido elevar los montos por cargas de familia a fin de mantener la relación de 70 por ciento por salario mínimo y 30 por ciento por asignaciones familiares.

Quiero hacer hincapié en lo referente al concepto de lo que sancionaremos hoy, en el sentido de que no es un salario mínimo, vital y móvil, sino únicamente salario mínimo móvil. El artículo 2º del dictamen del radicalismo del pueblo y las estadísticas sobre costo de vida corroboran mis afirmaciones. Las cifras de ambos dictámenes no posibilitan —hay que reconocer— al trabajador y su familia alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación de sus hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión, como lo señala el mencionado artículo 2º.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Monte. — Por lo tanto, la sanción que daremos no tiene las características que debe reunir el salario mínimo, vital y móvil.

Por otro artículo, coincidiendo en parte con lo que sostiene la bancada mayoritaria, proponemos la congelación de los precios de los artículos de primera necesidad, sin excepciones. El vino y la carne también quedan, en consecuencia, comprendidos en esta disposición, según nuestro punto de vista, si se sanciona nuestro proyecto. Se trata de los precios vigentes, a nuestro juicio, a la fecha de sanción de la ley de abastecimiento.

Esta medida que tomará el Parlamento, analizada objetivamente, supone un llamado de atención al Poder Ejecutivo, por la vía de la sanción de ese artículo. Parece un poco redundante, pero desde el punto de vista de la técnica parlamentaria, es así. Políticamente analizada, revela que el Poder Legislativo toma la iniciativa en el problema del alto costo de la vida.

Pensamos que los trabajadores del Estado deben estar incluidos en estos beneficios a partir de la vigencia de la ley. Creo que el Estado, que es representante de la comunidad organizada, no puede ni debe exigir a una parte de esa comunidad el cumplimiento de disposiciones que el propio Estado no puede hacer efectivas.

El ministro de Economía nos ha dicho en la comisión que la inclusión de los servidores estatales en este proyecto llevaría a una erogación en más del orden de los 10.000 millones de pesos. Es decir, que incrementaríamos el déficit del presupuesto nacional, llevándolo a 102.000 millones de pesos. Pero nos ha anunciado que es posible una merma en ese déficit del orden de los 20.000 millones, ya sea por mayores recaudaciones o por economías que se harán en el presupuesto. Esto último es muy importante: aunque les moleste a los correligionarios del

partido gobernante, tendrán que apretarse el cinturón, disponerse a colaborar con el Poder Ejecutivo y no pretender seguir ocupando puestos públicos.

Sr. Grau. — Es lo que estamos haciendo.

Sr. Monte. — A propósito de la interrupción del señor diputado, debo recordar que en la provincia de Córdoba, por ejemplo, se ha producido una verdadera barrida de empleados públicos y que el número total de empleados es mayor ahora que cuando el gobernador Lázar Molina se hizo cargo del gobierno.

Sr. Fernández Núñez. — Se han hecho nombramientos en cargos de confianza del Poder Ejecutivo.

Sr. Monte. — No todos son cargos de confianza. Lamento tener que decirlo, porque yo desearía que el gobierno no se equivoque. Pero la impresión general es que este gobierno está buscando la cabeza del adversario político para cortársela, y reemplazarlo por sus correligionarios.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Exhorto al señor diputado a ceñirse a la cuestión en debate y a dirigirse a la Presidencia.

Sr. Monte. — Si hago referencia a este asunto es porque está en debate en virtud de una interrupción de sus propios correligionarios, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia no tiene correligionarios.

Sr. Monte. — El señor diputado sí. Y no me quejo de ello porque no creo que pueda ser presidente de la Cámara una persona que no pertenezca a un partido político.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Me refiero a que no los tiene en la función, señor diputado.

Sr. Monte. — Estoy de acuerdo con el señor presidente en esto último.

Estimo que, incluyendo desde ahora a los servidores del Estado hasta el nuevo ejercicio, habría un aumento del déficit de dos o tres mil millones de pesos.

En otro orden de cosas, en lo que atañe a las quitas por zonas, creo que habría que escuchar a las organizaciones sindicales que reclaman su supresión del proyecto en consideración y de los convenios colectivos de trabajo. Esta es una vieja aspiración de los trabajadores organizados sindicalmente y creo que sería de estricta justicia escucharlos. Pienso que las quitas zonales han sido fijadas arbitrariamente y que en la mayoría de los casos sólo han servido para tratar injustamente a los obreros del interior del país. Esto ha ido en desmedro evidente del poder de adquisición salarial de estos trabajadores y, por supuesto, en desmedro del nivel de vida de los hombres del interior del país.

En cuanto al proyecto en general, como se trata de un derecho constitucional que el Poder Ejecutivo considera que debe consagrarse definitivamente mediante esta ley, nosotros vamos a apoyarlo. Pienso que el gobierno, con los medios de información y las estadísticas oficiales

a su alcance, habrá sopesado los pro y los contra de esta medida y las implicaciones de tipo económico y social. Pienso y confío que así lo habrá hecho. Por eso prestamos nuestro respaldo, aun teniendo reservas que formular a la política general del gobierno, reservas que en algunos casos ya he señalado y que en otros casos omito señalar porque son públicamente conocidas, como es públicamente conocida la posición de nuestro partido, la Unión Cívica Radical Intransigente.

Estoy seguro de que no se podrá argumentar que nuestra bancada haya obstruido en función de opositora, en alguna medida, la labor gubernamental. Hay una conducción del país que yo, honestamente, creo que es más aparente que real, y deseo que se inviertan los términos de esta situación para evitarle males mayores al país.

Soy un convencido de que las teorías sirven como guía general, y que por lo tanto no conviene aferrarse a ellas cuando, como en el caso presente, las teorías de gobierno no se ajustan a la realidad que hoy vivimos. Pienso que el gobierno está demasiado encerrado en una concepción anticuada que no responde a los requerimientos de la hora presente, que es indudablemente muy cambiante y fluida.

Sr. Alfonsín. — Está en posición de avanzada el señor diputado.

Sr. Monte. — Por supuesto. Hay una retrogradación en cuanto a concepción de gobierno. Lo digo muy respetuosamente, y lamento discrepar al respecto con la bancada mayoritaria.

Si el gobierno se decidiera a escuchar el reclamo de la mayoría abrumadora de los argentinos, si se condujera con energía y dinamismo, si saliera del aletargamiento en el que se encuentra, como el país está maduro para una gran realización, habrá de acompañar a todo gobernante que se decida a actuar dinámica y eficientemente. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: debió ocupar la atención de la Cámara, en representación de nuestro sector, el señor diputado Rois. Razones de salud hacen que tenga yo el honor de expresar en este debate la opinión del grupo demócrata progresista, en momentos en que el país espera del Congreso de la Nación la sanción de una ley que posibilite un mejor standard de vida para los sectores trabajadores de la República.

La democracia progresista tiene desde tiempo ha posición tomada en materia de salario mínimo, vital y móvil. Lo tiene inserto en su programa partidario y sus hombres representativos en la Convención Constituyente de Santa Fe, junto con los demás sectores que componían aquel cuerpo —porque en esto no tiene la paternidad ningún sector político argentino—, coincidieron en la inclusión en el único ar-

título que logró ser aprobado en aquella oportunidad, de la institución del salario mínimo, vital y móvil. Es, pues, norma de la Constitución Argentina, norma declarativa hasta el día de hoy, como las otras que contiene el artículo 14 bis, que la República está esperando se plasmen y reglamenten en las instituciones jurídicas necesarias para asegurar su funcionamiento.

Es, pues, un mandato de la Constitución que nos promueve como legisladores de la Nación para crear las bases necesarias que aseguren la vigencia en el país del salario mínimo, vital y móvil, presupuesto básico para una estabilidad de nuestra economía y, sobre todas las cosas, para asegurar la paz social.

Se ha dicho ya —no agregamos nada nuevo— que es necesaria una verdadera justicia distributiva en lo económico y en lo social. La democracia es un instituto que necesita del soporte del bienestar de sus integrantes para poder funcionar con sentido orgánico y coherente.

La justa distribución de la riqueza es una de las bases de sustentación de las instituciones democráticas. No puede pedírsele a los pueblos la capacidad para convivir en un régimen de respeto y de libertad, si no se les asegura la subsistencia en lo más elemental, en lo que atañe a la vida del hombre. La seguridad pasa a ser así un presupuesto fundamental de la vida de los pueblos civilizados de la tierra. Leyendo a Lipset en *El hombre político* encontramos una reflexión que surge del análisis de las estadísticas a que tan afectos son hoy los economistas y los sociólogos. Por vía de las cifras llega a la conclusión de que los países que tienen democracias estables presentan un nivel de vida muy superior al de las democracias inestables y, sobre todo, al de las dictaduras estables. El distingue, en el ámbito mundial, las que llama así, como he dicho, democracias estables, y toma en Latinoamérica las otras dos categorías: la de las democracias inestables y la de las dictaduras estables.

También da cifras diversas, reveladoras de este proceso. Así, por ejemplo, en los países europeos más democráticos existe un vehículo automotor por cada 17 personas, comparado con un vehículo por cada 143 personas en los países menos democráticos de Europa. En Latinoamérica, en los países que llamamos de democracia inestable —Argentina, Brasil, Chile, México, Costa Rica— hay un automóvil por cada 99 habitantes, contra uno por cada 274 en los países calificados como dictaduras permanentes o estables. Los ingresos en dólares per cápita varían, de 695 por habitante y por año en las democracias estables mundiales a 119 en las dictaduras. El consumo de energía va del 3,6 en los primeros al 0,25 en las dictaduras latinoamericanas.

Así podemos seguir aportando cifras, como por ejemplo en algo tan fundamental como es la salud: en las democracias inestables de La-

tinoamérica existe un médico por cada 2.100 personas, contra uno por cada 4.400 en las dictaduras estables. De la misma manera, hay 25 teléfonos, 85 aparatos de radio y 102 periódicos por cada 1.000 personas en las democracias inestables de Latinoamérica, contra 10, 43 y 43, respectivamente, por cada 1.000 personas en las dictaduras estables.

Esto nos lleva a la conclusión de que se cumple el axioma de que a mayor pobreza corresponde una mayor posibilidad de dictadura. Debemos, pues, replantearnos mentalmente los grandes principios de libertad e igualdad, e insertar dentro de ellos el principio de seguridad, de justicia distributiva, porque aquellos primeros han roto su viejo molde y buscan una revitalización que les permita ser pilares de las nuevas necesidades del hombre. Los que queremos a la democracia tenemos la necesidad de no refugiarnos en la caparazón de las tortugas y de suministrar esta nueva savia para ampliar los horizontes de la democracia.

Es por ello que a esta ley del salario vital mínimo y móvil le damos la categoría de un seguro para las instituciones democráticas de la Argentina. Hemos escuchado esta tarde a distintos sectores de la Cámara que expusieron su posición al respecto, y no podemos dejar de recoger la afirmación del señor diputado Sandler, cuyo planteo parte de un error inicial que, en nuestro concepto, destruye toda la figura que él ha elaborado con su habilidad dialéctica y con su gran elocuencia. El error estriba en partir del supuesto de la producción, olvidando el supuesto de la distribución.

Naturalmente, el ejemplo de Alemania que él ha dado nos entusiasma, a veces, por lo extraordinario y por lo verdaderamente vertiginoso que fue el crecimiento de esa gran nación europea. Pero aparte de jugar en Alemania factores ambientales y humanos de tipo completamente distinto a los de la Argentina, debemos computar algunos que son muy importantes. Alemania logró su gran recuperación, a la que calificamos todos como el milagro alemán, mediante la confluencia de distintas circunstancias que deben señalarse. En primer lugar, ese país no tenía ejército, de modo que no incidían en su presupuesto todos los gastos de defensa que absorben gran parte de los presupuestos de los países latinoamericanos, y sobre todo del nuestro, que es lo que nos interesa. En segundo lugar, Alemania recibió, no mediante préstamos, sino mediante donación, del llamado plan Marshall, varios miles de millones de dólares. No tengo la cifra exacta, pero el total para Europa ascendió a 22.000 millones de dólares en el período que va desde la posguerra hasta 1960. Pero hay otro factor que es importante, y respecto del cual existe un elemento comparativo con nosotros. En Alemania, cuando las circunstancias lo determinaron necesario, se aplicaron las le-

yes antitrust y contra los monopolios. En la Argentina, en cambio, a lo largo de muchos años los factores de la producción y de la comercialización han estado trustificados y monopolizados. Ahora ha llegado al Congreso un proyecto de reformas a la ley de monopolios y precisamente por llamarse de reformas presupone que existe en el país una ley contra los monopolios.

En oportunidad de la interpolación sobre comercialización del trigo, dije al señor ministro de Economía que en la Argentina no se conocen prácticamente casos en los cuales se hubieran hecho jugar las disposiciones de la ley punitiva de la acción monopólica y trustificadora de las grandes empresas. En cambio, en esos países que se traen como ejemplo para señalar el progreso vertiginoso, la estabilidad de su moneda y la capacidad real de adquisición de su salario, juegan efectivamente las leyes contra el monopolio y tocan hasta los más altos niveles de los grandes grupos empresarios.

Esos y otros factores que fueron fundamentales en la recuperación alemana, sin dejar de reconocer, por supuesto, el extraordinario esfuerzo que rindió su pueblo con sentido de patriotismo y apego hacia la tierra en la que habían nacido, determinan que no pueda entusiasmar demasiado el ejemplo para aplicarlo a nuestra realidad actual.

Pero hay algo más, señor presidente. En Alemania y en los Estados Unidos se produjo este proceso de expansión de su economía y del mejoramiento del standard de vida de su pueblo porque a medida que se incrementaba su producción se aseguraba una justa distribución de la riqueza.

En Alemania no solamente se instituyeron los consejos de fábrica y se hizo realidad la cogestión obrero-patronal, sino que también se interesó en la producción y en los beneficios de las empresas al hombre que rendía su trabajo a ella en particular y a la Nación en general.

Si analizamos en los Estados Unidos el proceso de distribución de los ingresos, observamos que el 70 por ciento del producto bruto va al sector del trabajo, mientras que en la Argentina sólo llegamos al 44 o al 45 por ciento. Advertimos entonces que la expansión y el mejoramiento de la producción tienen sentido en aquellos países porque la expansión y el mejoramiento de la producción han sido correlativos con la justa distribución de la riqueza. Ese es el principio fundamental.

Es cierto que el ejemplo que voy a relatar es bastante conocido, pero me parece importante señalarlo. La disidencia fundamental que yo señalo con la brillante exposición del señor diputado Sandler, consiste en que él quiere primero hacer la torta para después repartirla, y nosotros queremos que la torta se vaya repartiendo a medida que se va haciendo. Esa es la disidencia que separa a ambos criterios.

Sr. Sandler. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Martínez Raymonda. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — En las obras que comentan el llamado «milagro alemán», señor diputado Martínez Raymonda, se hace especial hincapié en el plan Marshall, al que le dedican varias páginas. Y allí se reconoce que si bien el ingreso de dólares a través del plan Marshall fue un factor coadyuvante del desarrollo, se advierte, además, que ese plan constituyó una verdadera traba al auténtico desarrollo alemán porque fue determinado en base a un plan de desarrollo de largo alcance, que no permitía jugar libremente todo lo posible a las fuerzas del mercado como lo pensaba y quería el ministro de Economía de ese país.

Respecto a la falta de ejército, le recuerdo al señor diputado que es cierto que no había ejército, pero fuera de la consideración que hacía el ministro de Hacienda alemán de que el rearme no produce una perturbación económica, hay que tener presente que en Alemania entraron doce millones de refugiados sin trabajo, sin posibilidades y nada más que con pesares.

Sr. Tróccoli. — Mano de obra barata, señor diputado.

Sr. Sandler. — Posiblemente el señor diputado desconozca otra realidad: que el problema más importante de Alemania desde 1954 es la escasez de mano de obra. Además se señala que una de las hipotecas dentro de la economía alemana —que también las tiene— es que en un desarrollo tan considerable muchas veces empresarios y obreros celebraron convenios colectivos más allá de lo que la producción permitía, y esto fue lo que causó el alza del costo de la vida en un 1,4 por ciento promedio durante los años que he citado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — El planteo que hace el señor diputado Sandler nos llevaría a entrar en el debate sobre la economía alemana. Si simplemente señalé estos episodios fue para marcar que el ejemplo que él traía debía ser analizado a la luz de esas diferencias y de los matices diferenciales que presenta en relación a nosotros.

Pero a fuer de agregar algo más, me atrevería a decir que la Argentina, juntamente con otros países subdesarrollados, contribuyó al milagro alemán, por aquello del deterioro de la relación entre los precios del intercambio. Nosotros contribuimos a pagar el jornal de sus obreros, mientras ellos compraban a niveles bajos y de preguerra nuestros productos básicos.

Pero eso es entrar en un debate que nos alejaría del tema en discusión.

En este asunto de la producción y de la distribución quiero citar un ejemplo que, en mi concepto, es decisivo para demostrar cómo el exceso de preocupación por la producción sin distribución puede crear el caos, más perturbador que el que se quiere evitar con la otra política.

En la década de 1920 se produjo en los Estados Unidos, como es de público conocimiento, una extraordinaria expansión de su economía. Las industrias producían cada vez más cantidad de bienes, la técnica se fue incorporando a los procesos productivos, y a medida que eso ocurría cada vez había más bienes a disposición del público y cada vez eran mayores las ganancias de las grandes empresas; pero por un error de concepto, por una verdadera estrechez mental del sector empresario norteamericano, esas ganancias y esa mayor producción revertían solamente en dividendos para los accionistas y no se trasladaban en manera alguna como mayores ingresos al sector trabajo, que es lo mismo que decir al sector consumidor.

¿Qué consecuencia trajo esta política? El *crack* de 1929. Los colosos que se habían montado sobre una extraordinaria expansión no tenían la base del consumo popular, y cuando faltó quien comprara, las industrias no tuvieron a quien vender, y, en horas, Wall Street vivió el pánico que provocó una política equivocada que no había sabido ver el futuro económico ni la verdadera dimensión de sus posibilidades.

Llegó así la hora en que Roosevelt, comprendiendo el problema, lanzó la política del *New Deal*, basada entre otras cosas en la justa distribución de la riqueza, y de donde iba a surgir la prosperidad de la nación. Los empresarios, que temieron y combatieron las medidas de Roosevelt porque las consideraban contrarias a sus propios intereses, a la larga han advertido, aunque no se atrevan a confesarlo, que esa política fue la que aseguró la estabilidad de sus empresas y de sus ganancias.

Este ejemplo lo transmito a los empresarios argentinos, a quienes veo preocupados frente a este proyecto que la Cámara está considerando. No se preocupen de que pueda haber una mayor capacidad de ingresos en el sector trabajador, que a la vez es el sector consumidor de la República, porque en la medida en que eso se complementa con otros procedimientos que luego señalaré, traerá un incremento de la demanda, lo que permitirá colocar más bienes en el mercado e incrementar a su vez la producción; al lograrse esto disminuirán sus costos, y al vender más obtendrán más ganancias.

Hace un momento comentaba con un diputado de mi bancada sobre el juego de lo que es producción y lo que es expansión, cómo se iban produciendo las curvas de disminución de los costos en función de la explotación plena y eficaz de las fábricas. En forma de curva parabó-

lica va descendiendo el costo unitario en la medida en que lleguemos a la producción ideal; pero para que esto conjugue en un proceso de microeconomía de fábrica al trasplante general de la macroeconomía nacional tenemos que crear las condiciones de consumo, para que cuando corriamos el déficit de producción en el que hoy están nuestras fábricas, teniendo capacidad para incrementarla, tengamos además el público consumidor con posibilidades de absorber los bienes que se produzcan. Entonces sí habrá una equitativa y justa distribución de la riqueza y las empresas que hoy temen a esta ley que el Congreso proyecta podrán disponer de una mejor y más estable corriente de ingresos.

Entrando ya en la segunda etapa, digamos que para que esto tenga sentido, para que el salario vital mínimo que pretendemos establecer mediante una norma legal sea una realidad estable, y para que el obrero argentino no sea una vez más defraudado por el juego de la política económica que se ha seguido en el país, debemos adoptar los recaudos indispensables para que la economía nacional se vea impulsada y produzca esos bienes, ya que tiene los medios idóneos para hacerlo pero le faltan los elementos movilizadores del crédito y de la incentivación industrial, y llegar así, finalmente, a poner en equilibrio las fuerzas de la producción con la capacidad de consumo del pueblo.

Como dije anteriormente, el desarrollismo sin una justa distribución de la riqueza se convierte en enemigo de sí mismo. Esto es lo que ha ocurrido en el país, pues en varias etapas de nuestra historia económica ha habido programas de equipamiento y de incentivación industrial, pero ha faltado cerrar el circuito económico, sin lo cual la corriente no se transporta; ha faltado la capacidad de consumo, y entonces ese coloso con pies de barro se derrumba en cuanto no halla una base de sustentación en el consumo popular. Ahora podríamos cometer otro error, al revés del anterior, si creásemos la base de sustentación del consumo, dando a la población los elementos financieros necesarios para adquirir bienes, y al mismo tiempo no pusiésemos a nuestra industria y al sector productor en condiciones de proveer los bienes en la cantidad necesaria para evitar la inflación y el costo exagerado de los productos.

Aquí está, precisamente, la responsabilidad del Poder Ejecutivo, responsabilidad derivada de la falta de una política económica. Yo no me atrevo a decir que la política que sigue es equivocada, sino que aparentemente no la tiene, o, por lo menos, la Honorable Cámara no conoce un conjunto ordenado y coherente de medidas que permita ver con claridad el futuro a que aspira a conducir a la República en materia económica y social.

En lo que se refiere a la promoción industrial, los primeros días de noviembre último el Poder Ejecutivo derogó una serie de medidas que fomentaban la instalación de ciertas indus-

trias y que estaban encaminadas a la promoción de ciertas regiones del territorio nacional. Lo hizo con el propósito de eliminar algunos privilegios impositivos, que es posible que fueran irritantes, como en el caso típico de la exención del impuesto a los réditos para las sumas invertidas en la suscripción de acciones de determinadas empresas, ya que no existían los recaudos para impedir que el que compraba hoy vendiera mañana y por esa sola operación de base, de pocos minutos, se ahorrase el pago de sumas cuantiosas por impuesto a los réditos. Yo admito que era necesario corregir esa situación de inmoralidad protegida por las leyes impositivas, pero no olvidemos que esta derogación demoró por cuatro meses la puesta en marcha de las medidas que habían sido motivo de tales decretos. Esto trajo inseguridad e incertidumbre en los sectores inversores tanto nacionales como extranjeros, que hubieran querido venir a poner su esfuerzo al servicio de nuestro trabajo y de nuestra economía.

Es necesario también proveer al sector productor de un crédito activo, integral y eficiente. Sabemos que el Poder Ejecutivo ha dicho en reiteradas oportunidades que está dispuesto a hacerlo. Yo no dudo de los buenos propósitos del señor ministro de Economía, pero me permito señalar que no los veo realizados en la práctica.

Las cifras estadísticas son claras, y así, mientras desde el mes de octubre de 1963 hasta febrero último, según datos estadísticos del Banco Central, los depósitos bancarios aumentan en 44 mil millones de pesos, el total de los préstamos del sector bancario se incrementa sólo en 12 mil millones de pesos; vale decir que hay 32 mil millones de pesos de incremento de los depósitos que no han llegado a volcarse a los créditos.

Si tomamos el índice discriminado del destino de los préstamos bancarios a febrero del corriente año, advertimos que la producción primaria absorbe 46 mil millones de pesos; la producción industrial en conjunto, 86 mil millones; el comercio, 32 mil millones de pesos; la construcción, 10 mil millones, y los servicios, 8 mil millones.

Frente a esto vemos que en el estado de las instituciones bancarias al 29 de febrero de 1964 aparece, en el rubro operaciones en moneda extranjera, que los bancos particulares de la República tenían invertidos 73.941 millones de pesos, mientras que el total de préstamos de esos bancos, a todos los sectores productivos del país, ascendía a 97.000 millones. Es una política crediticia equivocada, que permitió el juego del dinero de los depositantes argentinos para la ganancia de los bancos sobre la base de operaciones en divisas extranjeras, de compras al contado y ventas a plazo, en los casos en que los márgenes del futuro daban un beneficio superior al 15 por ciento. Se llegó al absurdo de que el monto de las operaciones en

divisas extranjeras ha estado casi equiparado con el total de los préstamos.

Reconozco que las últimas medidas cambiarias tomadas por el Poder Ejecutivo han contribuido a corregir esta situación, pero eso no basta, porque debe instaurarse una política de crédito activa, audaz y corajuda. No es un momento para la contemplación meditativa, sino que es el momento de la acción. El ritmo de 1964 está medido en el tiempo en que un satélite da vuelta a la Tierra, y ése es el ritmo que debemos imprimir a las actividades económicas y sociales de la República. No podemos seguir con la mentalidad del siglo pasado, donde imperaban procesos económicos de menor dinamismo.

Hoy es un error quedarse, no mirando hacia atrás sino en donde estamos, pues los acontecimientos nos superan en forma vertiginosa, y cuando quisiéramos correr tras ellos ya se habrán producido las consecuencias nefastas que podríamos habernos evitado si hubiéramos encarado los problemas con más energía.

6

MOCION

Sr. Pugliese. — ¿Si el señor diputado me permite? ...

Sr. Martínez Raymonda. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Pugliese. — No es para interrumpir su brillante discurso, pero necesito formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado Pugliese.

Sr. Pugliese. — A fin de ordenar el debate formulo la siguiente moción de orden: que la Cámara continúe en sesión hasta las 24 y luego pase a cuarto intermedio hasta las 9 y 30 de mañana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción de orden.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se pasará a cuarto intermedio a las 24 para continuar la sesión mañana a las 9 y 30.

7

SALARIO VITAL MINIMO Y MOVIL

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Esperaba alguna observación del señor diputado Pugliese que hubiese contribuido a tranquilizar al país transmitiéndonos el deseo del Poder Ejecutivo de poner en marcha el proceso de la reactivación

industrial. Pero de todos modos la moción fue constructiva, por cuanto demuestra la vocación y el deseo de los legisladores de seguir trabajando hasta lograr una ley que el país reclama y necesita.

Sr. Pugliese. — ¿Si el señor diputado me permite? ...

Estuve tentado de aprovechar la interrupción para contestar al señor diputado. Pero por la forma sería en que va desarrollando su exposición pensé que era mejor que le contestáramos luego de concluida, momento en que demostraremos que muchas veces la meditación no es permanencia en el mismo sitio.

Sr. Martínez Raymonda. — Me agradaría, porque descubriríamos que la meditación andante también es una cosa importante.

Sr. Maglietti. — Muy importante.

Sr. García. — Lo importante es traer cosas originales al debate.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Martínez Raymonda. — Evidentemente, las cosas originales son bastante difíciles de lograr, pero espero que las logre el Poder Ejecutivo en beneficio del pueblo argentino, preocupado por un proceso económico-social de deterioro. Además, lamentablemente, los lugares comunes de los oradores de la oposición son los lugares comunes del pueblo argentino; son los lugares comunes de un pueblo que quiere encontrar el camino definitivo de la paz y del progreso.

Sr. García. — Los lugares comunes...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sirvase no interrumpir al orador el señor diputado García.

Sr. Martínez Raymonda. — Yo digo que tengo una gran preocupación...

Sr. García. — Quiero pedir...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por tercera vez la Presidencia ruega al señor diputado García no interrumpa al orador y guarde el orden en el debate.

Sr. García. — He pedido excusas al señor presidente y al señor diputado a quien he interrumpido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sin proponérselo, el señor diputado puede malograr el buen orden del debate.

Sr. Martínez Raymonda. — Agradezco y acepto las excusas del señor diputado García, a la vez que presento las mías, por si yo también tuve algún desliz al contestarle.

Decíamos que es necesario poner como contrapartida de la ley que estamos considerando una verdadera y auténtica reactivación de la economía. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Nuestra preocupación es porque queremos verla pronto en marcha, y tengo la seguridad de que el Poder Ejecutivo encontrará el respaldo de todos los sectores de la Cámara —me atrevo a invocar una representación que no tengo— cuando se trate de adoptar medidas que contribuyan a la promoción de nuestra economía.

Con el sentido y en la línea en que he expresado mis palabras, el bloque de la democracia progresista suscribió un dictamen en disidencia juntamente con otros sectores de la Cámara: el de la Unión Cívica Radical Intransigente (sector alendista), el justicialista, el de la democracia cristiana y el del socialismo argentino.

Este dictamen en disidencia parcial ha sido elaborado —lo quiero señalar con claridad, por lo menos en lo que a nosotros comporta— dentro del dictamen de la mayoría. Incluso, reglamentariamente pudo ser más práctico instrumentar un dictamen en disidencia total, pero el sentido y el espíritu de la disidencia parcial consiste en que queríamos expresar nuestra adhesión al principio de la ley, que instituye el salario mínimo vital y móvil, porque no queremos aparecer, ni siquiera por un retaceo reglamentario, como no prestando nuestro apoyo a una institución que la queremos y la sentimos, y creemos que, bien utilizada, puede ser útil para la República.

Además, porque dentro del dictamen de la mayoría —a veces es agradable coincidir— encontramos, por lo menos en lo que respecta a nuestra bancada, una institución que consideramos útil y positiva, cual es el aumento en el porcentaje del salario familiar con respecto al salario básico para el hombre sin cargas de familia.

Creemos, como bien dijo el señor diputado Pena, que eso contribuirá no sólo a la estabilidad de la familia sino también a una mejor regulación del consumo, porque éste irá dirigido hacia los artículos de subsistencia, vestido, confort, y no a los improductivos. Ello, esperamos todos, ha de ser un factor de estabilidad social y de progreso institucional para la República.

Pero tenemos con el dictamen de la mayoría algunas disidencias que muy someramente he de señalar. Algunas de ellas han sido expuestas por el señor diputado Monte en su exposición, porque son comunes; pero quiero expresar el sentido de la posición demócrata progresista al respecto.

En primer lugar, eliminamos las quitas zonales. Reconocemos que en el país hay regiones, zonas, ciudades, lugares donde la situación económico-social es diferente, por mil causas que no es el momento de analizar; pero creemos que en este caso particular lo que estamos estableciendo es el mínimo vital, que alguna vez se llamó salario de sacrificio, salario de emergencia, el que cubre el ingreso mínimo para subsistir. Por eso eliminamos las quitas zonales, pero auspiciamos que el consejo pueda hacer los reajustes en más, en las zonas donde las necesidades vitales sean superiores a las de otras. El concepto es fundamentalmente distinto, y por eso quería recalcarlo.

Señalamos luego en el artículo 7º que la representación de los trabajadores en el consejo debe ser efectuada a propuesta de la Confederación General del Trabajo. Si en el caso de los

representantes empresarios no existe en el país una entidad legalmente constituida y auténticamente reconocida como la más representativa, no ocurre lo mismo en el sector laboral, donde es de público conocimiento que la Confederación General del Trabajo ocupa ese lugar. Por eso creemos que es más coherente decir las cosas por su nombre y no dejarlas libradas a la ambigüedad de «la más representativa».

Luego, aunque entendíamos que el régimen de asignaciones familiares prevé que cualquiera sea el monto que fijemos a la asignación por esposa y por cada hijo, él comprenderá también a los hijos que excedan de dos y comprenderá igualmente a aquellos trabajadores que tengan ingresos superiores al vital y mínimo, hemos querido aclararlo por aquello de que lo que abunda no daña, agregando en el artículo 12, después del párrafo que termina «y la ley 15.223», lo siguiente: «El monto de las asignaciones familiares por cada persona que genere el derecho a percibir las, será del 10 por ciento del que se fije como salario vital mínimo, de acuerdo al artículo 99.»

Luego hemos incorporado un artículo nuevo, que ubicamos como 17 bis, porque creemos que hace a la sistemática permanente de la ley. En el mismo establecemos que la presente ley no afectará los mejores derechos que tuvieran los trabajadores por aplicación de otras normas legales o convencionales. Naturalmente que hay un principio general en derecho laboral de que las conquistas obtenidas y los mejores derechos no pueden ser cercenados por otras normas que intenten crear o aportar nuevas conquistas; pero como muchos sectores de la actividad laboral argentina nos transmitieran su preocupación, para no ir más lejos, los del gremio gastronómico, que temían que con la estructura de esta ley se pudiera modificar su sistema de remuneración basado en una suma pequeña como sueldo fijo y la distribución del laudo que se percibe en los restaurantes y hoteles, hemos creído conveniente —dando esto como simple ejemplo, porque hay muchas otras situaciones similares— que quedara claramente establecido y llevara tranquilidad a esos sectores en cuanto a la seguridad de que las conquistas o las mejoras obtenidas a lo largo de las luchas gremiales o por leyes, no serían modificadas, disminuidas o retaceadas por esta ley, que viene a ser un instituto de seguridad y no de cercenamiento de derechos.

Con el mismo criterio se establece que a los fines de la presente ley se entiende por jornada de trabajo la que normalmente desempeñe el trabajador o fije la convención colectiva. También se trata de disipar las dudas —que el diputado que habla no tiene— que han sido planteadas, porque en algunas actividades laborales hay un horario diferente al de las ocho horas tradicionales o que por convenios internos de fábrica se modifican las jornadas de trabajo, y eso podría, mediante una interpretación equi-

vocada de la ley, si no está claramente dicho, crear confusiones en cuanto al salario vital que aspiramos sea para todos.

Luego modificamos el monto de emergencia que fija el dictamen de la mayoría. Este establece entre las disposiciones transitorias un artículo 20 que dice que hasta tanto el consejo se constituya y determine para el primer período anual el monto del salario vital mínimo a que se refiere el artículo 99, fíjase el mismo en la suma de 14.000 pesos mensuales, con las modalidades establecidas en el artículo 11, o sea, para la familia tipo. Nosotros propiciamos, en cambio, 16.000 pesos mensuales en igual carácter.

En su discurso de hoy, el señor diputado Pena hizo la defensa o la explicación de por qué se había arribado a la suma de 14.000 pesos mensuales, y tomó el salario en 1954 con un promedio mínimo de 968 pesos, al cual le adicionaba las asignaciones familiares, 20 pesos por esposa y 20 pesos por cada uno de los dos hijos que forman la familia tipo. Total, 60 pesos, que, incorporados a los 968, nos daba un importe de salario vital mínimo en 1954 —llamémosle así— para la familia tipo, de 1.028 pesos. El costo de la vida, según las estadísticas que ha recogido el miembro informante, aumentó trece veces desde aquel momento, por lo que, por la aplicación de este índice a los 1.028 pesos que teníamos en 1954, nos resulta un salario de 13.364 pesos. En consecuencia, él conceptuaba que esos 14.000 pesos contemplaban el deterioro de los precios, la inflación y el aumento del costo de la vida partiendo de aquel índice y de aquel salario para la familia tipo.

Creemos que hay un error de concepto en la apreciación del señor miembro informante de la mayoría. En 1954, los 60 pesos de la asignación familiar para la familia tipo representaban sobre los 1.028 pesos que integraban el salario conjunto apenas el 6 por ciento del salario total. En cambio, ahora —me parece muy bien y no estoy en contra— la proporción establecida en el dictamen de la mayoría, con el que coincidimos, alcanza al 30 por ciento para las asignaciones familiares. Es decir que lo que dejaríamos como salario básico real para el trabajador sin cargas de familia es notoriamente inferior a aquel de 968 pesos de 1954.

Nosotros vamos, en cambio, a los 16.000 pesos, que no es una cifra arbitraria. Hemos tomado como base para esta estimación el jornal mínimo para el obrero peón en los convenios colectivos de trabajo vigentes al mes de abril de 1964, última cifra que tengo en mi poder de la Dirección Nacional de Estadística y Censos. Tomamos, por ejemplo, para el obrero electricista un jornal de 53,50 pesos la hora; lo mismo para el herrero, para el pintor; cifras algo inferiores para el radiotécnico, ponepliegos, sastre, etcétera. Multiplicada por las doscientas horas, promedio mensual, nos da un salario de 10.700 pesos mensuales, que, en nuestro proyecto, al

deducir las asignaciones familiares queda en alrededor de 11.200 pesos. De tal manera, no establecemos por la ley un salario mínimo inicial inferior —como sería el de los 14.000 pesos, que, reducidos, quedan en 9.800— a los últimos convenios colectivos de trabajo firmados y que el señor diputado Pena recuerdo con acierto ayer en la reunión de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.

Sr. Sandler. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Martínez Raymonda. — Sí, señor diputado.

Sr. Sandler. — He escuchado con mucha atención esta parte de la exposición del señor diputado y quisiera saber si él tiene alguna información que le señale que, alguna vez en la historia argentina de los últimos veinte años, un aumento de salarios ha superado al del costo de la vida.

Sr. Martínez Raymonda. — El señor diputado Sandler me retrotrae a lo que fue materia de mi exposición anterior. He dicho y repito que si el aumento de salarios no está compensado con un incremento de la producción, y si no tenemos los bienes de consumo a mano de los consumidores a quienes incrementamos la capacidad adquisitiva, naturalmente el precio subirá, porque habrá más demanda que oferta. Pero si logramos mediante una enérgica promoción industrial la creación de los bienes necesarios, ese factor se corregirá y no sufriremos los riesgos inflacionarios que hemos tenido en otras épocas.

Pero voy más lejos, y podría contestarle igualmente, por el método Ollendorf, preguntándole al señor diputado Sandler si sabe de alguna vez en la República Argentina en que no hayan subido los precios, a pesar de no haberse aumentado los salarios.

Entonces, ¿dejaremos que se siga deteriorando la situación de los que tienen menos posibilidades de defensa, en un proceso económico ya deteriorado? Esta es la situación difícil de nuestra economía, que tiene muchas distorsiones y que muchos aspiramos a corregir.

Continúo con nuestras observaciones al dictamen de la mayoría.

En el artículo 21 —es un mero detalle— establecemos que el consejo, dentro de los treinta días, podrá establecer las variaciones porcentuales que determina el artículo 99, pero no las quitas zonales, que no aceptamos.

Otra disidencia importante es la que señalamos en el artículo 22. En él auspiciamos que la vigencia del salario vital mínimo, tanto para los sectores de la actividad privada como para los del sector público, comience en la misma época.

Sr. Maglietti. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Martínez Raymonda. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Maglietti.

Sr. Maglietti. — En cuanto al análisis que hizo el señor diputado de los datos compara-

tivos aportados por el señor diputado Pena, quiero hacerle notar que el salario mínimo vital y móvil fijado en esta circunstancia va a superar ampliamente al del año 1954. La familia tipo, según lo expresaron los señores diputados, alcanzó en 1954 a 1.028 pesos, que por efecto de la inflación se transforma en un valor actual de 13.364 pesos. Si a esa familia tipo de aquel año se le agrega un miembro más, tenemos que el salario para una familia con tres hijos sería tan sólo de 13.624, al valor actual; en tanto que, de acuerdo con el proyecto que estamos estudiando, ahora se elevaría a 15.400 pesos. Dicha diferencia se hace más notable a medida que aumentan los miembros de la familia.

Con esto quiero demostrarle al señor diputado que este proyecto otorga a un obrero con familia un salario mucho más elevado que el del año 1954, que es al que se refiere la CGT en su demanda, sin entrar a considerar al trabajador individual sin familia, que indudablemente percibirá menos. De manera que, siempre con referencia a la familia, con este proyecto que estamos tratando la situación del obrero se encuentra mejorada en todo sentido.

Sr. Martínez Raymonda. — Antes de contestarle al señor diputado Maglietti, le voy a decir algo en su favor: la cifra correspondiente a la familia con tres hijos no sería 14.980 sino 15.400 pesos, porque correspondería el 10 por ciento más, como asignación familiar por el tercer hijo.

Aun con ese supuesto, que le concedo porque es la realidad, quiero señalarle que no estamos considerando a la familia ni al número de sus hijos, sino el problema integral. Porque también debemos tener en cuenta al hombre sin cargas de familia. Aunque me parece bien el porcentaje fijado para las asignaciones familiares, no debemos olvidar al hombre que todavía no se ha casado. De lo contrario, sería crear una sanción legal al soltero, y eso podría traer algunas complicaciones de tipo social.

Sr. Mujica. — Ya tiene bastante con la falta de vivienda para poder casarse.

Sr. Martínez Raymonda. — Estamos de acuerdo, y por eso queremos que no se lo perjudique.

En el artículo 22, nosotros establecemos para el sector privado y público la misma fecha de puesta en vigencia del salario mínimo de emergencia que se instituye por esta ley. Comprendemos que hay disposiciones de tipo presupuestario; sabemos que el déficit del presupuesto ha llegado a cifras astronómicas; tenemos noticia por el señor ministro de Economía, que de acuerdo con los cálculos primarios este nuevo salario representaría 10 mil millones de pesos en un ejercicio, es decir que para los meses de agosto, septiembre y octubre próximos, período en el que se anticiparía la vigencia, podría hablarle de tres mil millones de pesos. Comprendemos que esta Cámara debe obrar

con responsabilidad; pero uno se pregunta a veces si la responsabilidad puede llevarnos a retacear al sector de empleados públicos conquistados consideradas elementales para toda la población. Eso costaría tres mil millones de pesos, pero debemos confrontar esta cifra con el déficit ferroviario de 45 mil millones de pesos, en crecimiento, con otros deterioros de nuestro presupuesto y con tanta cosa que se despilfarra en la República, sin hacer historia de quién ni de cuándo. Lo importante es que hagamos este pequeño esfuerzo más, y no con desprecio de las cifras, porque tienen mucha importancia. Pero el Estado tiene que dar el ejemplo moral de predicar cumpliendo lo que exige o impone a los demás empleadores de la República.

Por ese sentido moral, por esa fundamentación ética y porque, además, consideramos que se trata también de un sector de argentinos que viven en esta República y que padecen las mismas consecuencias del deterioro económico social, hemos querido colocarlo en un pie de igualdad.

Pero queda un sector fuera de la ley. Es el de los empleados provinciales a quienes por una norma constitucional y por un principio de respeto del federalismo esta ley no puede comprender. El dictamen de la mayoría propone que el Poder Ejecutivo insinúe, sugiera y proponga a los gobiernos provinciales la adopción de normas similares a las que establecemos por la ley nacional. Pero sabemos que las provincias no tienen las mismas posibilidades de obtener recursos financieros que tiene el gobierno de la Nación.

Algunos de los oradores recordó que nosotros hemos votado —es cierto que nuestra bancada quiso imponer alguna limitación— una modificación a la carta orgánica del Banco Central en virtud de la cual esta institución crediticia de la Nación podía tomar títulos de la deuda pública para facilitar medios financieros a la Tesorería de la Nación. Yo me pregunto si las consecuencias que esta emisión puede producir no las soportan todos los habitantes de la República; yo me pregunto si los fondos de que dispone el gobierno nacional no son de todos los habitantes de la República. Entonces, por qué no ir el Estado federal en auxilio de los Estados provinciales que no tienen la posibilidad de obtener de inmediato recursos para cubrir las diferencias presupuestarias que les podría irrogar los aumentos al sector de sus servidores, estableciendo así la equidad entre la Nación y las provincias.

Es por esto que hemos propiciado un nuevo artículo en las disposiciones transitorias en virtud del cual el Poder Ejecutivo nacional prestará asistencia financiera a las provincias que por la aplicación en su jurisdicción de las normas de la presente ley la requirieran hasta tanto

puedan adoptar las provisiones presupuestarias correspondientes.

Sr. Sandler. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Martínez Raymonda. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — ¿Tiene noción el señor diputado del impacto inflacionario que ello puede significar? ¿Qué está repartiendo el señor diputado? Los billetes que se van a fabricar. Perdóneme el señor diputado, pero debo decirle que con toda honestidad creo que está en un proceso de fantasía monetaria.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Dije que tengo tanta preocupación como el señor diputado Sandler por las consecuencias de este proceso económico. Dije que solamente hemos de salir de él con correctivos heroicos, de promoción de nuestra economía. Pero hasta tanto lleguemos, tenemos que darle oxígeno al enfermo para que subsista y pueda recibir los beneficios de esa promoción. Sabemos que estamos caminando en el tembladeral de nuestro déficit presupuestario. Pero cuando pedimos esos 3.000 millones de pesos más, es porque hemos visto que nos hemos excedido en 45.000 millones en los ferrocarriles. Por ello cualquiera que tenga sentido de sensibilidad se irrita y subleva al ver que vamos a negar 3.000 millones de pesos que pueden resolver los problemas de un sector importante de nuestra economía, mientras que, por razones que no quiero analizar, porque no están en debate, no los hemos negado para otros sectores de nuestro presupuesto.

Comprendo que es necesario corregir los déficit de nuestro presupuesto si no queremos ser devorados por ellos. Esta ha sido la posición tradicional de nuestro partido. Pero no somos monetaristas ortodoxos. Creemos que la política monetaria debe tener un sentido dinámico y adaptado a la realidad de un pueblo. Si un remedio puede a veces empeorar a un enfermo, la mayoría de las veces puede salvarlo. Es peor mantenerse en la actitud pasiva, sin siquiera intentar algún recurso salvador para sacarlo del estado de sopor en que se encuentra.

Tal es nuestra posición. No hay irresponsabilidad ni fantasía. Conozco las consecuencias y me preocupan tanto como al señor diputado Sandler, que se interesa por los problemas económicos y financieros de la República. Pero algunas veces hay que tomar medidas, y ésta es una de esas horas difíciles. No tenemos en nuestras manos el poder divino de la infalibilidad, pero creemos encontrar en esta ley un recurso a nuestro alcance para crear mejores

condiciones de vida para el pueblo trabajador a fin de que, a su vez, se transforme en un consumidor ordenado y positivo. Por eso apoyo las asignaciones familiares, con un rumbo orientado a las necesidades de la familia argentina. Con una producción y una industria puestas en actividad enérgica y decididamente, creo que tal vez podamos encontrar —no se pueden hacer afirmaciones rotundas— el camino que todos esperamos ha de ser el que nos conduzca al bienestar de todo el país.

Sr. Mujica. — ¿Me permite una breve interrupción, señor diputado?

Sr. Martínez Raymonda. — Sí, señor diputado,

Sr. Mujica. — Lo que ocurre es que los que pueden pagar impuestos y no lo hacen defraudan al país. Si el Estado pudiera percibir los impuestos que deberían abonarse tal cual están estipulados en la ley, no tendríamos ningún problema que debatir esta tarde.

Sr. Pizarro. — Los que no pagan son los peces grandes.

Sr. Martínez Raymonda. — Agradezco al señor diputado Mujica su interrupción, porque era algo que tenía in mente y que se me había pasado. En efecto, es necesaria una política tributaria con sentido social. Nuestra política impositiva tiene un mero alcance fiscalista, el de conjugar los déficit de tesorería, y ocurre a veces que, por un error de enfoque, los impuestos van a gravar al que produce, y dejan liberado, en gran medida, al capital ocioso o a los sectores no útiles a la comunidad. Naturalmente que una política impositiva con sentido social sería un factor coadyuvante en el proceso de ruptura de las estructuras de que tanto hablamos y que aspiramos a hacer.

A través del artículo 26, señor presidente, damos expresión legal a nuestro deseo de promoción industrial de que hablaba hace un rato. Expresamos que, dentro de los 30 días de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo deberá promover la reactivación industrial y arbitrar las medidas necesarias para un efectivo incremento de los créditos destinados a la producción de bienes. Admitimos que desde el punto de vista de la ortodoxia legislativa no resulte muy coherente esta disposición, pero queremos volcar en la letra de la ley las aspiraciones que nos impulsan a defender la posición que hemos sostenido esta tarde.

Concluyo, señor presidente. Sabemos todos los riesgos que tiene el instrumento legal que estamos sancionando. Conocemos las dificultades y los problemas que afligen a la vida argentina. Enfrentamos la oposición de importantes sectores respecto de esta ley, que queremos votar para asegurar mejores condiciones de vida a los trabajadores. Frente a todas esas circunstancias, yo afirmo, señor presidente, que si no fuera así, si esta ley se votara en un ambiente pastoril, tranquilo, sereno, sin encrespamientos, tal vez no sería más que una mera expresión

teórica, que no tendría la fuerza que da la lucha ni la solidez que dan las convicciones triunfantes.

Con estas palabras, la democracia progresista deja sentada su posición con respecto a la institución que vamos a crear, y fundadas las disidencias con referencia al dictamen de mayoría y que he señalado en el curso de mi exposición. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Peña y Lillo.

Sr. Peña y Lillo. — Señor presidente: en realidad, este debate no daba margen para la dilucidación de aspectos doctrinarios. Su origen está en el proyecto del Poder Ejecutivo, que tomó estado parlamentario a fines de abril, por el cual se procura, lisa y llanamente, reglamentar el precepto constitucional contenido en el artículo 14, según el cual el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador salario mínimo, vital y móvil.

Posteriormente, el 1º de mayo, en ocasión de que el señor presidente de la República abriera las sesiones del Congreso y diera cuenta del estado de la Nación y de las reformas prometidas por la Constitución, recomendó la pronta sanción de ese proyecto. Los diputados estábamos abocados ya al estudio del proyecto, que es de reglamentación de la cláusula constitucional, como he dicho, por el cual se crea un organismo y se establecen las normas mínimas para su actuación. Cuando de pronto, y a último momento, ese proyecto del Poder Ejecutivo se ha transformado en otra cosa; se ha transformado esencialmente en un aumento de emergencia.

La Federación de Partidos del Centro ha mirado con profunda simpatía el proyecto del Poder Ejecutivo. Por otra parte, la vigencia de un salario vital mínimo y móvil está contemplada en nuestra plataforma partidaria. Nuestros representantes lo votaron en la Convención de 1957. También un diputado nacional de nuestras filas, Joaquín Méndez Calzada, presentó en 1939, y lo reprodujo en 1941, un proyecto creando un organismo encargado de fijar los salarios básicos para regir en la industria y el comercio de todo el país. Luego un laudo dictado por el ministro Cullaciatti, durante la presidencia del doctor Castillo, estableció como principio general, en noviembre de 1941, que el salario debía seguir un movimiento acorde con el aumento del costo de la vida, siempre que la industria pudiera soportarlo, dando tiempo para su adaptación teniendo en cuenta los contratos preexistentes. Dicho laudo advirtió también de la intención del gobierno de hacerse cargo de las diferencias que se operaban en obras públicas por el aumento de salarios, a fin de hacer factible que los contratistas de obras públicas reconocieran a sus obreros y empleados las diferencias a que obligaba el aumento del costo de la vida. En el laudo también

se señala que monseñor De Andrea en aquella ocasión había sido partidario del aumento directo de salarios y no del aumento a través de un fondo de salario familiar, formado con el aporte patronal del 10 por ciento de todos los salarios, con el cual se pagaría a los que tienen cargas de familia.

También debo recordar un decreto del presidente Castillo, que lleva el número 142.353, del año 1943, que sostuvo la misma tesis, que creó una junta, dentro del entonces Departamento Nacional del Trabajo, que tenía por objeto establecer las condiciones para poder llegar a la retribución mínima básica completada con asignaciones familiares, estudiando las probabilidades de las distintas ramas de la actividad por regiones y por zonas. Dicho decreto mereció en su hora dos extensos comentarios del que después cobró mucha notoriedad, doctor Figuerola, y que entonces era funcionario de la División Técnica del Departamento Nacional del Trabajo.

Con estos antecedentes estamos en una situación muy cómoda para tratar el proyecto del Poder Ejecutivo, pero debo cumplir con el deber de señalar a la Cámara las condiciones excepcionales en que esta Cámara está tratando, ya no el proyecto originario del Poder Ejecutivo, sino éste, de aumento de emergencia. En momentos en que, desde hace un mes, la fuerza sindical organizada a diario hace gala del conculcamiento de las garantías constitucionales, como las de propiedad y de libertad. Esas mismas organizaciones sindicales están actuando en un sentido directamente dañoso para los obreros que ellas pretextan proteger. Esas organizaciones sindicales, so pretexto de obtener mejoras salariales, están actuando con un neto y claro sentido político, que es incompatible con la justificación de su existencia y con las condiciones que permiten su reconocimiento.

Ante la pasividad del Poder Ejecutivo de la Nación, confrontada con sus expresiones en los mensajes del 12 de octubre del año pasado y del 19 del mes corriente, pregunto si él no advierte que esa acción sindical politizadora está desconociendo prácticamente que la democracia es la de la Constitución, con su Preámbulo, declaraciones, derechos y garantías, tal como lo dijera enfáticamente el presidente Illia el 12 de octubre de 1963.

¿Es que no advierte que esa actividad es una gimnasia totalitaria, respecto de la cual previno también el señor presidente de la República en octubre de 1963? ¿Es que no advierte que esa actividad es incompatible con el propósito de preservar el gremialismo de su instrumentación política, sobre lo que también llamó la atención en el mismo mensaje? ¿Es que no advierte que esa actividad se caracteriza por la falta de respeto a elementales normas jurídicas, sobre las que el Poder Ejecutivo prometió encarrilar su acción?

¿Es que no advierte que hay un sector de la ciudadanía que no se siente comprometido frente a la Nación para resolver pacíficamente sus problemas, tal como exhortara a hacerlo el señor presidente en su mensaje del 12 de octubre pasado? ¿Es que no lo advierte, y por ello guardó silencio absoluto sobre esta situación en su mensaje del 19 del mes corriente?

¿Es que no advierte que esta acción concertada y subversiva, por los fundamentos que invoca, desautoriza su propio informe sobre el estado de la Nación, cuando se jacta de haber procurado convenios colectivos que logran los más altos salarios posibles; de haber tratado en todo momento de conciliar los intereses; de haber celebrado 110 convenios de alcance nacional con mejoras del 20 al 35 por ciento; de haber logrado la disminución de 328 mil a 81 mil del número total de obreros afectados por conflictos, comparando los períodos de octubre de 1962 a marzo de 1963, y octubre de 1963 a marzo de 1964?

¿Es que no advierte que esta acción subversiva está sustentada en una mentís a su afirmación, fundada en los informes que le suministrara el Consejo Nacional de Desarrollo, sobre el mejoramiento en el nivel de ocupación que, en el Gran Buenos Aires, del 87,9 por ciento habría llegado a 90,1 por ciento?

¿Es que no advierte el Poder Ejecutivo que esto desautoriza y frustra las esperanzas que cifraba a propósito del éxito obtenido al laudar respecto de los empleados de comercio?

¿Es que no advierte el Poder Ejecutivo que la paz social, que se jactó en el mensaje del 19 de mayo haber logrado para el país, está conmovida? ¿Es que no advierte que nos quedamos absortos sin saber a qué quiere referirse cuando nos exhorta a la «revolución del orden» y al «pacto social»?

Nosotros advertimos que esta situación es, en alguna medida, atribuible al propio Poder Ejecutivo de la Nación, porque ha quedado en descubierto que no sería exacto ni real que ya el 12 de octubre de 1963 tuviera para el lapso a transcurrir hasta octubre de 1964 medidas concertadas para eliminar la desocupación, para lograr el pleno aprovechamiento de los factores productivos, para estabilizar el nivel de precios, para resguardarnos del envilecimiento del signo monetario y para defender el salario real de los obreros, como lo afirmó el 12 de octubre de 1963.

Advertimos, también, que, en alguna medida, esta situación revela el fracaso de la aplicación práctica de leyes propiciadas por el Poder Ejecutivo y que la Cámara le votó, muchas veces con reservas —como lo hizo nuestro bloque—, con el afán de darle el instrumento que el Poder Ejecutivo creía necesario para un mejor gobierno, tales como las de abastecimiento y de medicamentos.

Advertimos que, en alguna medida, esta situación es consecuencia de una conducta del

Poder Ejecutivo contraria a la toma de conciencia, que en sus referidos mensajes expusiera, acerca de que para el primer año de gobierno lo más urgente era atacar el desequilibrio presupuestario, disminuyendo los gastos y los déficit de explotación de las empresas estatales, haciendo que estas últimas cumplieren planes de producción preestablecidos y trabajasen a costos adecuados.

Advertimos también que esta situación es consecuencia de algunos puntos de vista expresados en octubre de 1963 y en mayo de 1964 por el Poder Ejecutivo y que carecen, en realidad, de verdadero rigor científico en materia económica. Me refiero a cuando, en mayo de este año, el Poder Ejecutivo fundaba la recuperación en un proceso que debía partir del aumento de demanda para determinar un aumento de producción y reducir los precios unitarios y a cuando, en su mensaje del 12 de octubre, señalaba como remedio la tesis inversa, es decir no partir de un aumento de demanda sino de un aumento de producción.

Error de concepto y científico que he oído repetir en el seno de las comisiones de la Cámara y en el recinto, al plantearse una y otra vez el falso dilema de qué es lo que debe hacerse primero: si procurar la posibilidad de un aumento de demanda, dando más dinero a la población, o si para procurar un aumento de producción debe darse más dinero a los productores y a los industriales. Es un falso dilema, porque la realidad es que para salir de situaciones como las que padece actualmente el país la solución no está ni en uno ni en otro de esos factores, sino que la única solución es lograr el aporte de nuevos capitales, que sólo pueden ser engendrados por el ahorro nacional o por el ahorro extranjero que se consiga traer al país. Sólo cuando por aplicación de nuevos capitales se logre aumentar la producción, se creará la demanda de los factores productivos y especialmente de la fuerza laboral. Sólo un aumento de capital mediante ahorro legítimo nacional o extranjero es lo que puede dar salida a esta situación.

Sr. Bobillo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Peña y Lillo. — Deseo continuar con mi exposición. Luego se la concederé.

Sería erróneo creer que esa falta de aportación de capital-ahorro, nacional o extranjero, pueda ser substituida por emisiones o disposiciones de liberación de fondos mínimos, aquellas en el fondo no son nada más que arbitrios inflacionarios y las últimas son insuficientes.

Quiere decir que esta situación en que nos encontramos en alguna medida es imputable al Poder Ejecutivo de la Nación, que no ha dado con el medio de acelerar el proceso de capitalización, incrementando el porcentaje de capital por individuo, y tampoco ha logrado que el

Estado deje de ser el gran consumidor de capitales. También en alguna medida esta situación, ante la cual estamos tratando esta ley, se debe a la pasividad del Poder Ejecutivo frente al anuncio de esta campaña de desconocimiento y de conculcamiento de derechos fundamentales. Y así, incluso, fue calificada por la mesa directiva de su propio partido.

La pasividad del Poder Ejecutivo está en abierta contradicción con la declaración del señor ministro del Interior, doctor Palmero, cuando dijo allá en momentos en que se anunciaba el plan: «No creo que se altere el orden, pero si se materializara alguna acción que pueda caer en el Código Penal, el gobierno sabrá tomar las medidas para preservar el orden.» Estas medidas, en lo que depende del Poder Ejecutivo, no han sido tomadas.

Sr. Serú García. — Porque no se alteró el orden.

Sr. Peña y Lillo. — El subsecretario de Interior, doctor Vesco, simultáneamente anunciaba: «Actuaremos frente a hechos concretos en defensa del orden público, al que debemos preservar en el ámbito de la Constitución, en cuanto estas medidas vayan más allá de los derechos que la Constitución acuerda a los ciudadanos.»

Esta situación, en medio de la cual la Cámara trata esta ley que, en definitiva, viene a ser un simple aumento de emergencia, ha sido alentada por la actuación del Poder Ejecutivo en el caso SOMISA, en el de la empresa Construcciones Electromecánicas, en el de la empresa AVANT sociedad anónima, con el laudo del ministro Fleitas a propósito de la remuneración del personal marítimo. Incluso se alentó con el proyecto de enviar al Congreso el convenio mercantil, aprobado después por vía del laudo, para que tuviera la solución excepcional de ser fijado un salario para una determinada actividad por el Parlamento mismo.

Pero no todas las culpas son del Poder Ejecutivo. También hay actuaciones de algunos partidos políticos que en alguna medida han estimulado, ante el hecho, el juego a esta subversión, a este desorden.

Sr. Pedrini. — ¿Qué subversión?

Sr. Pizarro. — El señor diputado quiere que los trabajadores se mueran de hambre.

Sr. Peña y Lillo. — No voy a contestar a argumentos sensibleros.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sirvanse no interrumpir los señores diputados.

Sr. Peña y Lillo. — Estoy hablando racionalmente a señores diputados.

La subversión del orden es muy fácil de demostrar. Basta leer el artículo 14 de la Constitución Nacional...

Sr. Pizarro. — Y el 14 bis.

Sr. Peña y Lillo. — ... y el 17 y 18, y los demás que se refieren al derecho de propiedad y al derecho a la libertad.

Pregunto si no es subvertir el orden el apoderarse de la propiedad ajena, tomar rehenes, privar de libertad a los ciudadanos y exigirles que firmen convenios bajo la coacción.

Pregunto si eso es o no subversión, y me explico que algunos crean que eso no es subversión del orden porque durante muchos años ellos vivieron bajo un sistema que era precisamente la subversión del orden constitucional.

Por eso es que no tienen sensibilidad para advertir que esto sí es una subversión del orden constitucional.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse los señores diputados no interrumpir al orador.

Sr. Peña y Lillo. — Yo he dicho estas palabras no para discordia, y me dirijo especialmente al bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo, sino como expresión de leal colaboración y preocupación, porque sé que también es preocupación de muchos de los señores diputados de ese sector así como también de otros sectores.

Es necesario que los sindicatos obreros adviertan que el sindicalismo obrero auténtico sólo puede existir en una sociedad libre, que el sindicato no puede convertirse en una amenaza para la libertad, para la productividad y para la existencia de una sociedad libre; que si bien las sociedades libres no pueden suprimir a los sindicatos sin negarse a sí mismas, es preciso que los sindicatos tomen conciencia que deben actuar en forma compatible con las normas vigentes en una sociedad libre, en un estado de derecho.

Sr. Pizarro. — Libres de la miseria.

Sr. Pedrini. — Y del hambre.

Sr. Peña y Lillo. — Sobre miseria, sobre hambre y sobre muchas otras cosas podemos hablar largo y tendido con los señores diputados que interrumpen.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse los señores diputados no interrumpir al orador, que no desea ser interrumpido.

Sr. Jofré. — La historia la escriben los hombres que saben trabajar para el país y no hacer demagogia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvese el señor diputado Jofré contribuir al orden del debate y no interrumpir al orador de su propio bloque.

Sr. Peña y Lillo. — No me interrumpe el señor diputado, colabora.

Yendo a la ley que nos concitó a considerar el señor presidente de la República y que por mandato constitucional nosotros debemos considerar y no debemos transformar en otra cosa, que el señor presidente no recomendó y que precisamente quiso eludir...

Sr. Mujica. — El señor presidente quiere vencer y no dar palos. Esta es la realidad.

Sr. Peña y Lillo. — Le advierto al señor diputado que ya he cerrado ese capítulo y he pasado a otro.

En los fundamentos expuestos en el mensaje con que el Poder Ejecutivo acompañó este proyecto de ley señala a la reflexión y a la consideración de esta Honorable Cámara que el mismo sería sancionado en medio de un cuadro de paralización económica, de desequilibrio financiero y de procesos de producción, de cambio y distribución, lesionados, alterados o interferidos. Señala también en ese mensaje que no debía considerarse a la democracia como un mero proceso de distribución, porque para que la sociedad sea justa con el hombre es necesario que éste, a su vez, sea justo con la sociedad.

Señala el Poder Ejecutivo en su mensaje que la concepción de la riqueza como la abundancia total de bienes real y eficazmente distribuidos según justicia para garantía de desarrollo de sus miembros —tal como lo proclamara el papa Juan XXIII— debía ser una norma que iluminase la consideración de este texto legal.

Repárese bien en esta concepción de la riqueza: que haya riqueza como punto primero, como premisa; riqueza que debe consistir en la abundancia total de bienes.

Por fin, el señor presidente señaló que el crecimiento económico sin el ritmo necesario, agravado por el crecimiento de la población y una distribución de la renta nacional, en regresión, con menor participación del sector laboral, había concurrido a este proceso de desajuste y desocupación.

Termina ese mensaje con unas palabras que expresan cautela, y es en base a esa misma cautela, a esa misma prudencia, que nuestro bloque se apegó al proyecto del Poder Ejecutivo y se resistió a transformarlo en una ley de aumento de emergencia.

Dice allí el señor presidente que en este proyecto que acompaña, y que íbamos a tratar, no se establece una cifra, una expresión numérica del salario, porque quiere eliminar el sistema, o ponerse a cubierto del error del sistema de aumentos de salarios por decisión política de las ramas ejecutiva y legislativa, y que debe abordarse con prudencia, no como mero alarde intelectual que cree expectativas que después no pueden ser satisfechas. Con esa prudencia que inspira el mensaje del Poder Ejecutivo y la redacción de su proyecto nosotros estamos plenamente de acuerdo, y por eso es que no queremos avanzar más allá.

Tenemos experiencia de lo que es lanzar un aumento de emergencia, sin mayor examen, simplemente para hacer más fáciles los primeros tiempos de un gobierno. Debemos recordar aquel aumento de mayo de 1958, de un 40 por ciento, transformado después en un 60 por ciento. Debemos recordar también todo lo que vino después en materia de inflación, desocupación y encarecimiento de la vida.

Señor presidente: creemos que la Cámara, y sus comisiones no están suficientemente informadas acerca de las consecuencias de la modificación hecha al proyecto del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo, con anterioridad a este proyecto de ley envió otro por el que establecía asignaciones familiares para los obreros y empleados rurales. Aquí, en este mismo recinto, reunidos por emergencia, por no tener otro local disponible, hemos escuchado del señor ministro de Trabajo cómo era que ese proyecto modesto, de extender las asignaciones familiares al obrero rural en cantidad de 400 pesos para la esposa y de 200 para los hijos constituía, en realidad, un salto en el vacío, porque no había estadísticas admisibles, ciertas, sobre el número de obreros rurales y la composición de la familia rural.

Más aún; se tenía la certeza de que la caja de compensaciones de asignaciones familiares del obrero rural que se crearía por esa ley no podría funcionar, porque cuando se puso de manifiesto que los cálculos del ministerio estaban hechos en base a una familia rural tipo constituida por el marido, como trabajador, esposa y dos hijos, se tuvo la evidencia de que se partía de un principio falso, porque la familia rural está constituida por mayor número de miembros. Y se advertía entonces que la financiación de esa caja, que tendría el mismo sistema de las que funcionan para la industria y el comercio, iba a ser deficitaria.

¿Por qué iba a ser deficitaria? ¿Por qué no iba a poder funcionar como clearing? Porque, dado que la composición de la familia rural es mucho más extensa que lo que presumía el ministro, no se daría sino excepcionalmente el caso de que el empleador tuviese que pagar menos del 6 por ciento y girar al diferencia a la caja para compensar lo que otros empleadores pagarían en exceso.

Es decir que no se iba a reproducir, respecto de la caja compensadora de asignaciones familiares para el obrero rural, lo que ha ocurrido en las cajas de asignaciones familiares para el obrero y empleado de la industria y el comercio, que han podido atesorar, capitalizar, cifras que exceden, algunas de ellas, de los 3.000 millones de pesos. Que ahora, por otra parte, el ser llevados a un fondo común para los obreros rurales, de la industria y del comercio, esos fondos acumulados son los que van a permitir el funcionamiento de ese clearing que funciona respecto de las asignaciones. Es decir, que la incorporación del obrero rural a esta ley de salario mínimo vital, que el Poder Ejecutivo no contemplaba y que nosotros aceptamos como un acto de justicia, nos preocupa desde el punto de vista de su realización práctica. Esto, entonces, nos hace participar de la cautela del Poder Ejecutivo acerca de la asignación en la propia ley del monto a que debe llegar ese salario mínimo vital y móvil.

Se han dado esta tarde y en las reuniones de comisión muchas estadísticas; pero se ha

omitido decir que no hace más de treinta días que ha quedado en evidencia que todas esas series estadísticas de la Dirección Nacional de Estadística y Censos son erróneas, son falsas, no traducen la realidad, y que sobre ellas no se puede hacer cálculo alguno. Ha sucedido que sobre una muestra industrial del año 1943 se ha seguido trabajando hasta ahora, durante veinte años, porque los resultados del censo industrial de 1953 recién fueron conocidos en 1960, y a partir de entonces una de las gerencias del Banco Central se dio a la tarea de actualizar, de rectificar las estadísticas.

Como primer resultado de esa rectificación, que también ha hecho por su parte el Consejo Nacional de Desarrollo, aunque éste llega a cifras no del todo idénticas a las del Banco Central, se llegó a la conclusión de que el producto bruto nacional ha crecido año por año, por lo menos, en esa famosa tasa del 2,5 por ciento anual que, desde el informe Prebisch, soñábamos como panacea para nuestro desarrollo, como solución de nuestros males. Ahora descubrimos que la hemos tenido, que hemos estado creciendo a razón de una tasa del 2,5 por ciento anual, pero que aun así ha resultado insuficiente, sobre todo si se la compara con el crecimiento de la población. En términos absolutos, nos demuestra un error, si bien en términos relativos, al trasladarlo a la distribución per cápita, disminuye los efectos de ese error.

Ha quedado también una evidencia: que las bases tomadas para calcular el número de desocupados que había en el país también son erróneas. Eso lo ha reconocido el ingeniero Carranza, del Consejo Nacional de Desarrollo, y lo han establecido economistas de las más diversas tendencias.

Para citar un ejemplo, diré que en cuanto a la industria del ácido sulfúrico, que tiene una gran importancia en el complejo industrial de un país, esas series de la Dirección Nacional de Estadística y Censo estaban basadas en la actividad de cinco empresas del año 1943, que a la fecha sólo representan el 30 por ciento de la producción de ácido sulfúrico del país.

Quiere decir que si el Poder Ejecutivo, por naturaleza cauto, aconseja prudencia, limitación en el contenido de esta ley, la misma prudencia nos debe sugerir lo que hemos sabido después a propósito de la certeza de las estadísticas con que hemos estado trabajando, con que hemos estado haciendo proyectos, con que hemos estado haciendo discursos, con que hemos estado haciendo la apología de gobiernos o la crítica de gobiernos. Todo reposa sobre bases falsas y también es falsa la distribución del producto nacional entre el sector asalariado en relación de dependencia y el sector de capital. Porque para tomar en cuenta la parte del capital se han tomado en consideración los precios de costo de las partes de capital que hay

que asignar a los costos y no la parte de capital que hay que asignar a la reposición que, en épocas de inflación galopante como la que hemos vivido y seguimos viviendo, es importantísimo.

Es así como en el orden de las estadísticas, en los últimos 30 días hemos tenido algunas informaciones, como las que voy a citar del Consejo Federal de Inversiones, y adviértase qué diferentes cifras da respecto del nivel de ocupación comparadas con las que hemos oído del miembro informante de la comisión. El Consejo Federal de Inversiones, sobre la base 100 para el año 1962, establece que desde julio de ese año empieza una mayor demanda de mano de obra hasta mayo de 1963. En noviembre de este año, sobre el índice 100 para 1962, la ocupación era de 111 y en diciembre de 1963 había bajado a 105, y en enero de 1964 a 93,9. El ofrecimiento de trabajo se ha reducido considerablemente en el mismo período. Además señala para el personal de producción y para los oficinistas niveles de salarios distintos de los que da la Dirección Nacional de Estadística y Censos. Así, para los oficinistas, el Consejo Federal de Inversiones dice que en octubre el nivel de los salarios estaba entre los 8.174 y 10.179 pesos, y para el personal de producción, entre los 9.790 y 12.075 pesos. Dice también que sobre la base de 200 horas mensuales de trabajo, calculadas a la remuneración promedio, resultaba que con una hora de trabajo en octubre de 1963 se podía comprar 2,08 kilos de pan y en enero de 1964, 2,31; que de carne se podía comprar en octubre 710 gramos y en enero 670 gramos; que de leche se podía comprar en octubre 4,34 litros y en enero 4,49; que de queso se podía comprar en octubre 0,50 kilogramos, y en enero 0,71; que de papa en octubre se podía comprar 2,540 kilogramos y en enero 3,540; que de azúcar se podía comprar en octubre 1,33 kilogramos y en enero 4,07; y que de café se podía comprar en octubre 250 gramos y en enero 280 gramos.

Esta lectura de cifras un poco fatigosa, revela la incertidumbre y la ignorancia sobre las que nos movemos. No es posible que una ley concebida con cautela, para que no fracase, para que sea un instrumento que ponga en movimiento a su debido tiempo y con eficacia una cláusula constitucional que todos deseamos tenga plena vigencia, se transforme en un fracaso a breve término, precisamente por ser mal llevados de la mano por estadísticas falsas.

Señor presidente: creo que el Poder Ejecutivo ha dicho bien. La cuestión del salario mínimo vital y móvil no puede ser tratada con criterio político; debe ser tratada con más rigor; debe crearse la institución con elementos necesarios y suficientes para que la ley concebida con honestidad intelectual por el Poder Ejecutivo de la Nación dé el fruto que debe dar. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Señor presidente: llego al debate con la comodidad espiritual que significa la circunstancia de haber suscrito sólo en disidencia parcial el dictamen de la mayoría que legisla sobre un instituto del derecho laboral que fuera proyectado y sancionado inicialmente a través del famoso decreto ley 33.302 de diciembre de 1945 y que constituyera algo así como la portada a través de la cual se encolumnara la clase trabajadora organizada, protagonizando durante diez años sus mejores conquistas sociales y refirmando el progreso del derecho laboral argentino.

Pero sería injusto si me detuviera en aquella fecha de diciembre de 1945 sin recordar otros antecedentes del instituto al cual nos estamos refiriendo. Los antecedentes son muchos, no sólo en el país sino también en el extranjero.

Podría referirme muy rápidamente a los originados en la Organización Internacional del Trabajo en el año 1923, en cuyas reuniones fue ya motivo de preocupación el salario mínimo dentro del campo de los obreros de la industria. En América podemos recordar la Conferencia de Chapultepec, celebrada en 1946, donde también se hizo tema de los debates el salario mínimo vital. Posteriormente, en 1948, se realizó la IX Conferencia Interamericana, donde también se consideró el tema del salario mínimo. Finalmente, para cerrar esta breve reseña de antecedentes americanos, recordaré la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, realizada en Bogotá en 1963, donde no sólo se trató el tema del salario mínimo, sino que también se incursionó en el tema de la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas.

También la Iglesia con su doctrina social ha incursionado fructíferamente en este campo. Bastaría recordar a León XIII con su encíclica *Rerum novarum* y sus referencias al salario vital, a Pío XI con la *Quadragesimo anno* y su consideración sobre el salario vital y sobre el salario familiar y a Juan XXIII con su *Mater et Magistra*.

Sr. Mujica. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Serú García. — Con mucho gusto.

Sr. Mujica. — Sólo para decir que desgraciadamente a los sumos pontífices de gloriosa memoria se los menciona mucho pero se los imita poco.

Sr. Pizarro. — Es cierto, señor diputado; hay que tratar de hacer realidad lo que propugna la doctrina social de la Iglesia, aunque no les guste a los liberales.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Bien, señor presidente; no es necesario destacar que desde el momento que he citado la opinión de los pontífices, ha sido porque entendemos que el pensamiento de

ellos, exteriorizado a través de sus conocidas encíclicas, puede servir de norma rectora en el problema que nos preocupa. De conformidad con lo manifestado por el señor diputado que me ha interrumpido, pienso que, si no se entendiera que constituye una osadía, debemos todos tratar de imitar a los pontífices romanos.

Los antecedentes también existen en la República. Habrá de perdonármelo que no los mencione a todos, porque estimo que deben ser muchos más que los que en este instante puedo recordar; pero creo que es interesante remontarnos al proyecto de código del trabajo, de Joaquín V. González, del año 1904, y a los proyectos del diputado Nicolás Repetto, del senador del Valle y del diputado Anastasi.

Sr. Fabrizio. — Lo que significa que los liberales entendieron este problema antes que la Iglesia.

Sr. Serú García. — Yo no creo que éste sea un problema de liberalismo o antiliberalismo.

Tal vez haya otros antecedentes parlamentarios, que no cito porque no los recuerdo en este instante, pero que posiblemente sean del conocimiento de muchos de los señores diputados.

Llegamos así a diciembre de 1945, en que por primera vez se sancionan, mediante el decreto ley 33.302, disposiciones relativas al instituto laboral al que nos estamos refiriendo. El decreto fijó, de una manera clara y categórica, sus alcances, y muchos de los caminos abiertos por aquella disposición legal han sido transitados por el dictamen de la mayoría. Bastaría recordar que el artículo 18 de aquel decreto, al definir el salario vital mínimo, hace las enumeraciones que también han sido incorporadas al mencionado dictamen, que en general el bloque justicialista ha suscrito, entre otras razones, por ese motivo. Lo mismo ocurre con el artículo 21 del mismo decreto, que establece la posibilidad del reajuste periódico, es decir, la movilidad del salario vital mínimo, como una de las mejores conquistas de la clase trabajadora.

A este respecto, es bueno que digamos algo con relación a manifestaciones que se han vertido en el recinto. Se ha dicho, y desde luego es verdad, que la creación del instituto establecido en el decreto 33.302 no llegó a hacerse efectiva. Quiero destacar que si bien no es así, no significó, desde ningún punto de vista, desatender los requerimientos de la clase trabajadora argentina y las exigencias de la justicia social. Lo que en realidad ocurrió, es que en 1945 se sancionó el salario mínimo, vital y móvil como una prevención para el futuro, y por si él debía llegar a aplicarse en el supuesto de que las necesidades de la clase trabajadora lo exigieran.

Las doctrinas nacional e internacional establecen con perfecta claridad que los objetivos del salario mínimo, vital y móvil no son otros que los de evitar la explotación de los trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de oferta de mano de obra,

de modo que, en tanto no se dé previamente esta condición de hecho, no es necesaria la sanción o la aplicación de aquel instituto. Así lo estableció también, como objetivo preciso, la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo reunida en Bogotá, Colombia, en marzo de 1963, como lo reconoce el mensaje del Poder Ejecutivo.

Precisamente a partir de 1945 no existió exceso de oferta de mano de obra, de modo que no fue necesario poner en vigencia el instituto creado por el decreto 33.302. Con esto aclaro las manifestaciones del señor diputado de la Unión Cívica Radical Intransigente que recordó opiniones concordantes públicamente vertidas por el secretario general de la Confederación General del Trabajo, compañero José Alonso. Quiero insistir sobre este tema. Tengo sobre mi banca un recorte del diario «La Nación», de Buenos Aires, del 22 de abril del año en curso, que se refiere, en un editorial, al salario mínimo, vital y móvil, el que da otra versión acerca de la razón por la que el Instituto de las Remuneraciones no fue puesto en vigencia en 1945.

Con autorización de la Presidencia, me voy a permitir leer la parte pertinente: «Tenemos entre tanto en el país un precedente no despreciable: el famoso decreto 33.302/45, que tanta influencia ejerció sobre las masas obreras en favor de la campaña peronista de 1946. Establecía ya el reajuste periódico de los salarios en función del costo de la vida, y creaba, con los mismos fondos que ahora se destinarán al llamado Consejo del Salario Mínimo, el Instituto de las Remuneraciones. Como se ve, nada nuevo hay bajo el sol. La diferencia estribaría en que, llevado al gobierno en gran parte merced al decreto 33.302, el general Perón, que permaneció en el poder hasta septiembre de 1955, jamás se preocupó en dar efectividad al mandato del referido decreto ley, ratificado por el Congreso de la Nación.

»Todo lo contrario, porque en el fondo él —se refiere al general Perón— era el primer convencido de la acción inflacionista que habría tenido ese periódico reajuste masivo de salarios en un país ya carcomido por el cáncer de la inflación. Prefirió, pues, desarrollar la campaña de la relación entre aumentos y acrecentamientos de la productividad, que sigue siendo, a pesar de lo que cuesta imponerla, el auténtico remedio para dar al salario real, sin mover las ilusorias cifras del salario nominal, siempre vencido por los precios.

»En suma, ha de juzgarse peligroso el experimento que se anuncia, impulsado por la reforma constitucional de 1957, porque la salida está en un plan que lleva a la abundancia de bienes y no en retribuciones engañosas.»

Desde luego, este editorial del diario «La Nación» me causa —no puedo negarlo— una particular satisfacción, porque al explicar las razones por las cuales el presidente Perón no habría puesto en movimiento el instituto creado

por el decreto 33.302, hace un acabado y terminante elogio de la política salarial y de la posición antiinflacionista de aquel gobierno.

Sr. Jofré. — No es exacto...

Sr. Serú García. — Le ruego, entonces, que dirija una carta al director de «La Nación» y conteste el editorial, señor diputado. Yo dispongo de un tiempo muy limitado.

A pesar de este elogio que el editorial de «La Nación» hace de la política salarial del general Perón, entendemos que el editorialista se equivoca cuando cree que el instituto del salario mínimo, vital y móvil no se puso en vigencia por las razones que él expresa. La verdad es que no fue puesto en vigencia porque no había exceso de oferta de mano de obra, porque había plena ocupación, porque no había desempleo, y, por lo tanto, de acuerdo con la mejor doctrina nacional e internacional, no era necesaria la actuación del instituto del salario mínimo, vital y móvil. Hoy, en cambio, tenemos la necesidad imperiosa de establecerlo precisamente, porque la clase trabajadora argentina se encuentra sumergida y no existe plena ocupación en la República.

Este decreto 33.302/45 es el antecedente que reconoce la legislación argentina. Posteriormente se sancionó la reforma constitucional de 1957. Y es bueno recordar su artículo 14 —artículo nuevo—, señor presidente, no sólo porque en él se establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador entre otras cosas salario mínimo, vital y móvil, sino también porque ese artículo 14 agrega que queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, y también los autoriza a recurrir a la huelga, que no es subversión sino que constituye un instrumento de lucha para la defensa de las conquistas gremiales.

En la actualidad el problema del salario vital, mínimo y móvil ha sido tocado por los empresarios y también, desde luego, por la clase obrera organizada a través de la Confederación General del Trabajo. Los empresarios, casi sin excepción, se han colocado en una posición prácticamente indefendible. Han reconocido en mayor o menor grado la situación por la que atraviesa la clase trabajadora. Varios de ellos, como, por ejemplo, el señor Figueroa, de la Unión Industrial Argentina, según informa el diario «La Nación» —que goza en la tarde de hoy de mis simpatías (*Risas*)—, ha dicho que la entidad no enjuicia la legitimidad de las reclamaciones obreras. Más o menos del mismo tenor son las expresiones de otros empresarios como, por ejemplo, el representante de la Confederación General Económica, señor Dujovne, quien reconoce que el nivel de vida actual de la clase trabajadora argentina es sumamente bajo. Así se han expedido otros representantes del empresariado argentino, lo cual quiere decir

que el hecho de que los sectores asalariados se encuentran sumergidos, no admite discusión para el empresariado. Pero, sin embargo, señor presidente, los empresarios dicen que no es la oportunidad más conveniente este momento para la sanción de la ley que consideramos. Y yo digo: ¿qué esperamos? ¿La carroza? (*Risas.*)

Es evidente que esta posición del empresariado contradice esa doctrina nacional e internacional a la que ya me he referido, que sostiene que el salario mínimo vital y móvil debe aplicarse precisamente cuando hay exceso de oferta de mano de obra. Así lo han establecido las conferencias internacionales y la opinión de los organismos técnicos y de los entendidos. Y ese caso está dado precisamente en este instante en la República Argentina. Es ésta la oportunidad de sancionar esta ley. Por ello entiendo que los empresarios argentinos se descolocan una vez más frente a los problemas fundamentales que acucian a la República.

En cambio, la Confederación General del Trabajo viene luchando intensamente por la sanción de esta ley. Incluso ha corrido el riesgo de que se le imputen actitudes subversivas, precisamente porque, para obtener el clima que favorezca la más rápida sanción de la ley, se ha visto en la necesidad de proyectar un plan de lucha y llevarlo a la práctica. Hace muy pocos días, señor presidente, yo dije en este recinto que la CGT no estaba incurso en la comisión de ningún delito y que la actitud de los compañeros trabajadores no constituía subversión alguna. Y agregué también, llevando mi posición a un extremo, que si los propósitos, que leí, que animan a los trabajadores se los puede calificar de subversión, bendita sea la subversión. Y traje el ejemplo de la solidaridad expresa de muchos señores diputados, que inclusive están en este instante en el recinto, que habían concurrido a la central obrera para expresar su apoyo al plan de lucha —entiendo—, porque estaban convencidos de la justicia de la causa de los trabajadores y no por una mera actitud demagógica. Esta era la opinión de los diputados. Hoy tenemos otra. En «La Nación» de la fecha se transcribe un mensaje pronunciado por el señor ministro del Interior, en el que incluye palabras que reconozco serenas y profundas en alguna medida, particularmente cuando se refiere a este tema del plan de lucha de la CGT. En efecto, el ministro afirma categóricamente que cuando se habla de la ocupación de fábricas se trata, en realidad, de un paro parcial por horas en los lugares de trabajo, paros que en muchos casos no pasan de la colocación de un letrado en la puerta mientras se continúa trabajando en el interior. Se llama «ocupación» a cerrar la puerta o a cumplir una operación de las llamadas de «brazos caídos», que en todos los casos se han normalizado inmediatamente ante la presencia policial.

Es decir, que el ministro del Interior reconoce, con la autoridad que representa la titularidad

del ministerio político de la República, que la CGT, en la ejecución de su plan de lucha y de ocupación de fábricas, talleres, etcétera, no está cometiendo ningún delito, sino que está ejercitando los derechos que la Constitución le acuerda y que los trabajadores tienen toda la capacidad para practicarlos en el mismo grado que los empresarios practican los suyos, sin interferencias ni interpretaciones capciosas.

Esto debía quedar en claro en la sesión de hoy, porque es una respuesta a la posición inexplicable de mi distinguido comprovinciano, el señor diputado Peña y Lillo, que insiste en hacer aparecer a la CGT como protagonista de actitudes delictivas.

Sr. Peña y Lillo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Serú García. — Lo haría con mucho gusto, pero por una razón de equidad no voy a acceder a la interrupción ya que usted se negó a conceder una interrupción a un diputado del bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Sr. Peña y Lillo. — Pero, señor diputado, usted me ha aludido expresamente.

Sr. Serú García. — Ante la insistencia del señor diputado, le concedo la interrupción.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Peña y Lillo.

Sr. Peña y Lillo. — Cuando yo he calificado el plan de la Confederación General del Trabajo, me he limitado a la propia definición de ese plan dada por las autoridades de la CGT, que han dicho que es un plan revolucionario.

Sr. Serú García. — Revolucionario no es subversivo.

Sr. Peña y Lillo. — El señor diputado en su exposición y con la cita está diluyendo la figura jurídica delictual, que existe desde el momento que una persona entra en la casa ajena y saca al dueño como rehén, desde el momento que lo retiene en un edificio contra su propia voluntad, y desde el momento en que entra a la fábrica, no para trabajar, sino para impedir trabajar y para impedirle al dueño la libre disposición de su bien.

Sr. Amura. — ¿Me permite una pregunta, señor diputado Serú García? Usted me ha aludido en distintas oportunidades.

Sr. Serú García. — Sí, señor diputado.

Sr. Amura. — ¿Entiende usted, señor diputado, que de no haber mediado el plan de lucha puesto en práctica por la CGT, este Congreso no hubiera sancionado la ley del salario vital y móvil?

Sr. Serú García. — Yo no soy adivino; soy diputado de la Nación. De todas maneras nadie puede negar en la República que el afán de la clase trabajadora argentina es obtener la sanción de esta disposición legal que hoy estamos considerando y de otras incluidas en su plan de lucha. Prueba de ello son, no sólo los aportes técnicos que la CGT ha hecho y que han servido a más de un diputado, de éste y otros sectores, para preparar sus intervenciones en

este debate, aportes logrados a través de las oficinas técnicas de la central obrera, sino también la presencia de sus representantes, los esclarecidos dirigentes gremiales, que han concurrido a las comisiones de esta Cámara para traer los puntos de vista de la CGT.

Así está, por ejemplo, la opinión del compañero Angeleri, publicada en «La Razón» del 6 del corriente, que me voy a permitir leer, y que dice: «A lo que se aspira —se refiere a la aspiración de la CGT— es a obtener un salario capaz de satisfacer las necesidades más elementales, sobre todo cuando vemos que el costo de la vida no se soluciona. El problema está en que mientras los empresarios no quieren sacrificar ganancias, los asalariados deben sacrificar necesidades. No nos ubicamos en situación de exigir mejores sueldos o reivindicaciones; estamos reclamando un mínimo de subsistencia.»

Esta es la verdadera situación económico-social, señor presidente, tanto más evidente cuanto el compañero Riego Ribas pudo decir en la comisión respectiva de esta Cámara que la renta nacional, que era del 55 por ciento para el sector laboral y del 45 por ciento para el capital, es ahora del 55 por ciento para el capital y del 45 por ciento para el sector asalariado. Es decir, esta inversión de las cifras es, ni más ni menos, que la representación matemática de la injusticia social.

Estos son, en general, los antecedentes que nos han llevado a suscribir el dictamen de la mayoría, con disidencias parciales, a las que ya se han referido algunos señores diputados y que a continuación detallaré.

Al respecto ratifico que nos hemos opuesto al mantenimiento de las llamadas quitas zonales, y, muy por el contrario, pretendemos abrir la perspectiva para establecer los aumentos zonales; es decir que el salario mínimo vital y móvil será único en todo el territorio de la República, pero ello no impide que las autoridades de aplicación propuestas en la propia ley puedan aumentar este mínimo en las zonas que así convenga a los intereses económicos y sociales en juego.

También hemos entendido útil emplear un lenguaje claro en lo que se refiere a los integrantes del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. A ese respecto hemos sostenido, en asociación con otros bloques, que la representación obrera debe estar a cargo de la CGT, porque entendemos que ella es la entidad obrera con personería gremial reconocida más representativa de la República.

En cuanto a las asignaciones familiares, hemos admitido —porque lo consideramos beneficioso— la distribución de porcentajes establecida en el dictamen de la mayoría entre el 30 y el 70 por ciento; pero hemos hecho un agregado al artículo 12, tendiente a determinar con suficiente claridad que los beneficios del salario familiar alcanzarán en igual monto, por cada familiar a cargo, a todos los trabajadores en

actividad, cualquiera sea el salario que ellos devenguen y el número de beneficiarios con derecho a percibir el salario familiar.

Hemos establecido también, a través de la disposición respectiva, la defensa del salario real; vale decir que a fin de no hacer ilusoria la conquista social que con esta ley se procura y evitar el deterioro que en el salario producirá el proceso inflacionario, se ha proyectado la congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y de los materiales de construcción en forma más eficaz que la del dictamen de la mayoría. Al referirme a este tema no puedo menos que recordar que en ocasión de considerarse en esta Cámara la Ley de Abastecimiento el sector justicialista propuso, sin éxito, un artículo que decía: «El Poder Ejecutivo procederá a congelar al nivel que tenían al 1º de octubre de 1963 los precios de bienes de consumo y servicios de primera necesidad.» Hoy, el sector oficialista y el Poder Ejecutivo reconocen la necesidad de establecer la congelación, y no sólo lo reconocen, sino que debemos destacar de manera muy particular que el sector de la mayoría ha incluido en el dictamen, desde luego que con nuestra aquiescencia en ese sentido, la congelación de los precios de algunos artículos de primera necesidad. Esto significa señalar la omisión en que hasta el presente había incurrido el Poder Ejecutivo.

Tengo confianza en que el Poder Ejecutivo habrá de cumplir, de ahora en más, con las obligaciones a su cargo, aplicando la ley de abastecimiento y haciendo uso de las facultades que esa ley le acuerda, para que en el futuro esta Cámara y el Congreso no tengan necesidad de volver a incluir de manera imperativa en disposiciones legales las sanciones que pueden establecerse en uso de facultades que con anterioridad le han sido acordadas al Poder Ejecutivo.

Finalmente, llegamos a uno de los puntos principales de nuestra disidencia. El se refiere al monto del salario fijado en el dictamen de la mayoría.

Entendemos que ese monto no cubre las necesidades mínimas actuales, y por eso es que proyectamos elevarlo, tomando como base, para el trabajador sin cargas de familia, un mínimo que supera el salario determinado para la categoría inicial en los últimos convenios colectivos vigentes. Es así que establecemos ese monto elevándolo de 14 a 16.000 pesos para la familia tipo, resultando para el trabajador sin cargas de familia un salario de 11.200 pesos mensuales y 1.600 pesos de incremento por cada familiar a su cargo.

Al respecto hemos tenido en consideración las siguientes circunstancias. A nuestro juicio hay tres tipos de salario en la materia en este instante: el salario de sacrificio, aquel salario de \$ 1.120 que nació en 1956 en el proyecto de Prebisch y que elevado conforme con los índices actuales, teniendo en consideración un aumento de

once veces del costo de la vida, llegaría a un salario de sacrificio de 12.320 pesos, sin ponderar, inclusive, todos los rubros que debió haber ponderado el propio Prebisch al establecer su salario según lo destaca la CGT.

Nosotros, de acuerdo con otros bloques, fijamos el salario para el trabajador sin cargas de familia en \$ 11.200, es decir, aun algo por debajo de lo que sería el salario de sacrificio. Por eso lo llamamos salario de emergencia.

Con cuánta mayor razón, señor presidente, estará más por debajo el salario propugnado por el dictamen de la mayoría, que es más reducido que el auspiciado por nosotros.

Además del salario de sacrificio existe éste que nosotros propiciamos y al que en nuestro dictamen hemos llamado «salario de emergencia», a fin de que quede bien claro que cuando entre en funcionamiento el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, este organismo no deberá considerar mínimo vital este salario sino reconocerle el carácter de remuneración de emergencia.

Además de los dos tipos de salarios referidos, existe otro, que es el salario realmente mínimo y vital. Esto es, el salario que deberíamos establecer para cubrir todas las necesidades de una familia tipo y que al mes de abril de 1964, conforme con los estudios hechos por los organismos técnicos del Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal, debería elevarse a la suma de 26.403,15 pesos, incluyendo como rubros fundamentales los siguientes: alimentación, vestimenta, vivienda, bienes de uso para el hogar, limpieza y conservación, combustibles, aseo e higiene personal, movilidad, escolaridad e información, esparcimiento, aportes jubilatorios y varios, y sin estar incluidos los servicios asistenciales.

Esto solo basta para señalar que los reclamos de la clase trabajadora y los cálculos que hacemos los bloques que hemos suscrito las disidencias parciales están fundados en una realidad incuestionable, que nosotros tenemos el deber de considerar en esta oportunidad.

Solicito que este estudio sobre salarios y costo de la vida para la familia tipo, preparado por el Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal, se inserte en el Diario de Sesiones.

Sr. Maglietti. — ¿Me permite, señor diputado, una interrupción?

Sr. Serú García. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Maglietti.

Sr. Maglietti. — Quiero recordar al señor diputado que está haciendo uso de la palabra que en la exposición realizada en la Comisión de Legislación del Trabajo por el señor Ribas, integrante de la CGT, dijo lo siguiente: «En el país, en el año 1956, se estableció por decreto un salario mínimo cuyo monto era de 1.120 pesos. Nosotros traducimos ese monto a pesos actuales y pedimos su equivalencia, en este caso, 13.500 pesos.» Vale decir que se pedía la equi-

valencia del salario con respecto a los vigentes en 1956, y el dictamen de la mayoría fija en relación a la familia tipo un salario superior al de aquella fecha. De modo que con este dictamen se vienen a cubrir todas las exigencias de la CGT, y con la ventaja para el trabajador de que a mayor número de miembros del grupo familiar mayor es la diferencia del salario actualmente proyectado en relación al año 1956. Si bien es cierto que ese salario mínimo resulta inferior al solicitado por la CGT con respecto a la persona que no integra un grupo familiar.

En síntesis, teniendo en cuenta la circunstancia fundamental de que debemos referirnos al grupo familiar, nuestra bancada propicia un salario superior al que pidiera la CGT en la Comisión de Legislación del Trabajo.

Sr. Ig'lesias. — En estos últimos meses ha aumentado mucho el costo de la vida.

Sr. Maglietti. — El pedido realizado por la CGT data de poco tiempo, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Lamento tener que rectificar al señor diputado.

El dictamen de la mayoría no hizo lugar al petitorio de la Confederación General del Trabajo en punto al tema que acabo de abordar...

Sr. Pena. — Lo mejora.

Sr. Serú García. — ...ni tampoco, desde luego, lo mejora.

Cuando la Confederación General del Trabajo dice que el salario en 1956 era de 1.120 pesos y que en la actualidad debiera ser de 13.500 pesos, se está refiriendo al trabajador sin cargas de familia, y el dictamen de la mayoría establece para ese trabajador un salario mínimo de 9.800 pesos, es decir, inferior al monto solicitado por la CGT.

Sr. Maglietti. — Compare el salario del trabajador con cargas de familia correspondiente a 1956 con el salario del mismo trabajador en la época actual. Eso es a lo que me referí.

Sr. Serú García. — Pero eso no se desprende de la cita que leyó.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Serú García. — Termino estas breves palabras exhortando de manera respetuosa al Poder Ejecutivo a que cumpla en término y en forma, una vez que sea sancionada esta ley, con las obligaciones que la misma pone a su cargo. Esto es urgente, para que los obreros y trabajadores, tanto del sector privado como del sector de la administración pública nacional, obtengan efectivamente la conquista que auspiciamos, lo antes posible. Pienso que en materia laboral la justicia, cuando llega tarde, no es más que una forma analgésica de la injusticia. Es preciso que pongamos remedio a la situación que padece la clase trabajadora en el momento oportuno y no después. Después será tarde. Es-

tos son los votos del sector justicialista. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Salado.

Sr. Salado. — En nombre del bloque demócrata cristiano voy a exponer las motivaciones de nuestra actitud y de nuestro voto en el tema que tratamos.

Cuando las circunstancias nos colocan frente a un grave problema del país, no puedo menos que reflexionar acerca del valor y de la importancia que tiene en este momento el Parlamento argentino. Y reflexionando acerca de las funciones y de las obligaciones inherentes a mi representación, yo me veo ante el país no en una visión panorámica, sino colocado en el centro mismo de la realidad social de la República. Lo veo al hombre argentino manejándose en su drama. Lo veo al hombre tributando su cuota de dolor en la vida. Lo veo al hombre sacrificado a lo largo y a lo ancho de todo el país. Lo veo al hombre viviendo en malditas condiciones. Lo veo también en esa gran «villa miseria» que integra una inmensa proporción del país. Y me coloco en el seno de esa realidad no solamente para fundamentar nuestro voto a este proyecto de salario mínimo vital y móvil, sino también para hacerme cargo de todas las circunstancias que comprometen a nuestras funciones en este año de 1964, en momentos en que nos urge el compromiso ante las clases populares y el progreso del país.

Nosotros ante ese panorama podemos muy bien decir que somos culpables de la condenación del hombre argentino a su propia soledad, a la soledad que no le permite ejercitar sus condiciones en el ritmo social, en la altura moral que le corresponde y tal cual indican hoy las modernas teorías que ubican al hombre en esos movimientos sociales.

Y digo yo que hemos condenado al hombre a su propia soledad —y estamos también un poco complicados en esa soledad a la que lo hemos condenado, porque no hemos sabido estructurar perfectamente las condiciones generales de la vida de nuestra población—, porque ha faltado ese reconocimiento a la fuerza y a la participación del trabajador en el consenso social; ha faltado también el reconocimiento a la contribución del trabajador en el producto de la Nación, y más que nada, creo yo, que lo hemos puesto al trabajador y a todo hombre argentino en una circunstancia histórica en cuya coyuntura nosotros pareciéramos todavía no ver claramente.

Pero es ya una realidad que se agranda en América y en nuestro país, porque el trabajador y la masa popular toman cada vez mayor conciencia de su miseria, de su fuerza y de su trascendental misión en el mundo. Es esa América, la que nosotros estamos viendo, y cuya población subalimentada, con niveles educativos ínfimos en general, sin viviendas, está

buscando los cauces de su propia y profunda revolución.

A esta altura de mi exposición, me permitirá hacer una aclaración, por cuanto no puedo estar comprendido en los términos políticos a que se refirió el representante del radicalismo del pueblo que informó el dictamen de la mayoría, cuando ubicó a una cierta circunstancia momentánea en la lucha de la clase trabajadora. Lo digo porque yo no califico de subversiva la actitud de la CGT ni de los obreros argentinos, no tan sólo porque mi partido haya prestado su adhesión a esos planes, sino también porque en la valoración moral que hago de lo humano, prefiero sentir el rumor de la calle y ver las multitudes plantadas verticalmente ante la vida y la sociedad, antes que las crueles y calladas dominaciones de los económicamente poderosos.

Por esa razón, señor presidente, me podría remitir a los antecedentes que el tema tiene en la historia del mundo, pero tan sólo quiero destacar que hoy la ley, la ley en sentido genérico, viene a ser, como ya lo reconocieran concretamente tantos tratadistas y especialmente Carlos Cossio, una interferencia intersubjetiva, es decir, que hay allí una comunicación humana. Esta ley es una síntesis dialéctica entre la teoría y la práctica del comportamiento humano, llevado a las valoraciones morales que le corresponden y ensamblada también en una realidad social determinada.

Esa ley que nos obliga a todos por igual ha tenido en su evolución diversas formas del derecho. Concretamente nos corresponde ubicarnos en el derecho que contiene toda esta materia que estamos tratando, el derecho social, que ya figura en las constituciones de todas las naciones del mundo. Ese derecho social, invocado desde hace tanto tiempo, que en nuestro país tuvo un nacimiento bastante doloroso, pero que que no pudo dejar de crecer ante el empuje reivindicatorio de tantos dirigentes y de tantos obreros. Ese derecho insertado ya en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, representa, para nosotros, la estimación precisa, jurídicamente hablando, de toda la necesidad de ubicar en un movimiento jurídico esas premisas y ponerlas vivientes en la realidad. Y ese constitucionalismo social da su protección perfecta al salario del hombre que trabaja.

¿Qué es entonces para nosotros, los demócratas cristianos, el salario? No vamos a recordar otras teorías. Nos limitaremos, por una razón de tiempo, a expresar nuestro propio concepto del salario; pero antes quisiera recordar brevemente que las teorías que informan hoy lo que se ha dado en llamar salario mínimo, vital y móvil, han surgido en gran parte de la doctrina canonista y de la doctrina social de la Iglesia. Esto lo digo no sólo para aclarar ciertas expresiones que se han vertido hoy en este recinto sino también para hacer plena mi posición en este tema.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara doctor Miguel P. del Pero.

Sr. Salado. — Desde la Edad Media, y quizá mucho antes, refiriéndose concretamente al salario, se establecía que debía ser justo y no tan sólo retribuir el esfuerzo sino también el fruto del trabajo; eso es lo que se decía en la Edad Media por canonistas y sociólogos católicos; eso es lo que se vivía en la corporación de la Edad Media y que se perfeccionó en ese período histórico.

Tanto es así que Ruprech reconoce la existencia inicial del preaviso y de las primeras formas de la seguridad social en el trabajo comunitario del taller de la Edad Media.

Si bien alguien ha dicho que no hay nada nuevo bajo el sol, tampoco es posible, ni nos es legítimo, dejar de reconocer quiénes han hecho mucho y tanto por la vigencia de un salario mínimo, vital y móvil. Y lo digo porque en la Edad Media, sin querer remitirme mucho a la historia, y sabiendo que el tiempo me comprime, las formas del trabajo humano han tenido una completa participación en el alma del hombre que trabajaba. Esto no lo reconozco tan sólo yo, sino que un dirigente socialista europeo, Henri de Man, ha dicho que la perfección de las obras maestras logradas en la Edad Media se ha dado con el concepto de trabajo por la conciencia de participación vital que tenía el hombre cuando trabajaba por su unidad de trabajo del alma y de la obra que realizaba.

Yendo al siglo XIX, León XIII, en su famosa *Rerum novarum*, proclamó el principio del salario vital, o sea, el salario justo de los canonistas como un deber moral que se impone a la conciencia, porque del deber de conservar la vida deriva el derecho de procurar las cosas necesarias para ella, y estas cosas no las hallan los pobres sino ganando un jornal con su trabajo. Luego, si nosotros sabemos que el salario viene a nivelar los grandes desequilibrios sociales, aun cuando nosotros reconocemos y estimamos que nuestra sociedad debe progresar y evolucionar tanto como para abolir el salario en sus formas actuales y establecer una verdadera sociedad, una verdadera comunidad en el mundo, ¿por qué es tanto el desequilibrio, por qué son tan pocos los que ganan mucho y por qué son tantas las riquezas que acumulan unos pocos?

Eso ha permitido decir a un autor que es injusto, porque se entiende que se enriquece una minoría en perjuicio de una mayoría. Y éste es el orden social que tenemos y estamos viviendo: acumular en manos de los menos la mayor suma de beneficios y privar a los más de la mayor parte de los bienes. Se advierte así por qué las estadísticas señalan que el término medio de vida de las clases ricas es aproximadamente de 55/56 años, en tanto que el de las clases pobres oscila alrededor de los 28 años. Esta espantosa

desigualdad ante la muerte revela de modo elocuente la desigualdad en la vida.

Y aquí me permito traer otra cita de un papa, que no sé cómo sería calificado hoy por muchos que proclaman su sapiencia, pero que no aplican ni en sus leyes ni en su vida esos principios. Dice así: «Unos cuantos opulentos y riquísimos hombres han puesto sobre los hombros de la multitud un yugo que difiere muy poco del de los esclavos.»

Si nosotros hemos establecido el artículo 14 bis como una premisa constitucional a la que estamos obligados todos los habitantes del país, mucho más los que estamos gobernándolo en este momento, ¿por qué esa desigualdad de un principio que ha sido sancionado ejercitando los deberes y los derechos que tienen sus representantes y que lo han tenido en su convención reformadora? Nos ha llegado ya el tiempo, y por necesidades apremiantes, de hacer este estatuto legal, a fin de consagrar definitivamente un derecho ya establecido en la Constitución, pero que requiere la forma de esta ley que hoy discutimos.

En el país hay muchos antecedentes. ¡Cuán poco nos puede costar a nosotros decir y reconocer, que aunque haya habido algunos en forma embrionaria, no han sido menos los que han tendido desde entonces a un sentido de justicia social que nosotros aplaudimos, y que si ahora podemos verlos aminorados por la distancia de los años, no podemos dejar de reconocer que en el momento oportuno han sido una cierta revelación de progreso en materia legislativa!

A los proyectos mencionados de Joaquín V. González, a las iniciativas de distintos y distinguidos legisladores que han pasado por el Congreso Nacional, podemos agregar la ley de 1918 dictada en la provincia de San Juan —antecedente provincial que nos sirve y nos honra—, que establecía el salario mínimo para quien trabajaba en las haciendas. También podemos mencionar una ley de mi provincia dictada a principios de 1923, que fijaba ya entonces un salario mínimo de 4,20 pesos para los que trabajaban en las fábricas y talleres de Tucumán. Debemos citar, además, la ley 1.413, sancionada en 1938, en la provincia de Jujuy, que establecía un mínimo de 3 pesos para el obrero, cantidad que debía irse acrecentando, pero nunca disminuyendo; es decir, salvaba la posibilidad de una disminución por la competencia o atribución provincial para muchas de estas leyes.

Podemos decir, sin embargo, que ya estaban inscribiéndose en el país muchos principios que hoy venimos a establecer. Porque así como los establecieron constituciones como la de Weimar, como la de Querétaro, de México, de 1917, los reconoce, sobre todo en el valor de los salarios y del trabajo, el Tratado de Versalles. Los reconocía también, y lo dice expresamente, el

Código de Malinas, de 1920. Los reconocen, así mismo, el Brasil en su Constitución de 1926; España, en su Fuero del Trabajo de 1938; y muchos países más cuya enumeración sería muy larga.

Me excuso de tratar antecedentes extranjeros, que nos serían muy valiosos, por supuesto, pero ya las consideraciones generales que se han hecho en este recinto me eximen de referirme a tales antecedentes.

Sabemos perfectamente, nos consta y nos hacemos cargo, que el salario mínimo, vital y móvil es una institución de primerísima importancia. Si bien es cierto que muchas objeciones se han formulado desde ciertos sectores, no podemos dejar de reconocer o de pensar siquiera en cuáles son las virtudes o las potencialidades que en el consenso general y en la sociedad ha de traer como beneficio primigenio esta ley.

La institución del salario mínimo beneficia al empleado, al obrero; directa y concretamente, beneficia al empleador, aunque no lo quiera reconocer en este momento, y beneficia a la comunidad. Porque es una ventaja económica y social que haya un mínimo del cual no se pueda bajar; aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores de más bajo salario, porque esta ley, si la sancionamos, va a cubrir grandes capas de trabajadores hasta ahora casi olvidadas de la legislación en materia de salarios. Al mejorar las condiciones de trabajo, hay mejores condiciones de salud, de alimentación, de atención médica, de bienestar general del trabajador. ¿Acaso no se mejoran así las condiciones generales del trabajo? ¿No es así también que se posibilita un acrecentamiento de la capacidad productiva del país? ¿Acaso no es contribuir al bienestar social alentar a quien la vida está negando muchas expansiones y muchas veces está colocándolo en el límite de la miseria?

Esta ley protegerá también a los empleadores, porque ningún empleador desleal podrá pagar salarios inferiores a los que pagan los empleadores conscientes. Ningún empleador podrá disminuir esa tasa mínima que fijamos, y de esta forma vamos a mantener el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que es mayoría en el país, y al aumentar ese poder adquisitivo modificamos también los niveles de vida y acrecentamos la producción, alentamos al empresario y a todo aquel que en este país quiera hacer un negocio digno y honrado.

Hagamos la distinción entre salario mínimo y salario básico para que no haya confusiones en el futuro y para precisar más los conceptos correspondientes. El salario mínimo es el que se fija de acuerdo con necesidades vitales, las más estrechas o las más bajas, a las que determinaríamos, en palabras de autores que se han ocupado del tema, un salario que prevenga a todos de la miseria, o como han dicho otros, el salario mínimo viene a ser aquí la medida del de-

recho a la vida del trabajador, porque está en directa relación con sus posibilidades reales, con sus necesidades elementales.

Podría repetir aquí, para definir fundamentalmente al salario mínimo, las palabras que pronunciara el señor diputado Vedia, integrante de nuestra bancada, cuando reconocía que el hombre es un sujeto de necesidades, y a esas necesidades teníamos que hacer todos nosotros en la sociedad un servicio a fin de que las pudiera cubrir con holgura.

Desde esta bancada demócrata cristiana hemos señalado que los inconvenientes que se encuentran a este proyecto no van más allá de los que se señalaron en otras oportunidades. Recuerdo lo que ocurrió en el país cuando se dictó el decreto 28 169 que establecería salarios mínimos en el Estatuto del Peón. ¡Cuántas esperanzas, cuánta sed de justicia que se había clamado! Con ese Estatuto del Peón el país volvió su mirada a un sector bastante olvidado. En su artículo 5º el Estatuto del Peón fijaba los salarios mínimos. También recuerdo las objeciones que se hicieron al decreto 33.302, en sus artículos 3º y del 18 al 21, cuando habla del salario mínimo, y cuánta desesperanza creían ver algunos cernirse sobre el panorama de la República, como si ya no hubiese posibilidades ni para el empleado ni para el obrero, porque no iban a tener más trabajo; cuando se decía que las cosas iban a producirse caóticamente en un futuro cercano e inmediato. Sin embargo, nosotros, que hemos vivido ya esas experiencias, como representantes del pueblo, las tenemos que volver a evaluar y podemos decir que de esas experiencias hemos sacado gratos beneficios al otorgar mejores condiciones de vida a muchas personas que las estaban esperando. Es decir, estaban esperando que la estructura del Estado, no tan sólo los recuerde, sino que los ubique en el complejo social con las características y con la dignidad correspondientes.

Pero es que también el decreto 33.302/45 en mucho nos estaba recordando una ley olvidada, una ley derogada. Me refiero a la 10.505, reemplazada posteriormente por la 12.713, vigente en la actualidad, sobre el trabajo a domicilio, que establece concretamente el salario mínimo y la forma de fijarlo y da participación a los trabajadores, empleados y patronos para que, con la intervención también del Estado, puedan fijarse salarios mínimos y contemplar la necesidad de esa gente. A propósito, desearía poder recordar en toda su extensión las palabras que pronunciaran los senadores del Valle Iberlucea y Melo en el año 1918, y sí puedo destacar que con toda precisión, con un sentido casi literario, ubicaron perfectamente el problema en las corrientes sociales de la época y las que ya se vislumbraban en el país.

Nosotros, como representantes del pueblo que somos, como provenientes de un partido que es y se siente popular, hemos podido recoger las necesidades y angustias que andan por ahí, por-

que ya no son las necesidades ni las angustias que nosotros podríamos mencionar en un elegante discurso de fin de siglo. Acá es la angustia, el hambre, la desesperación de los sin techo, de los sin trabajo. Es ya una cosa completamente densa, que nos toca y nos apura. A eso tenemos que responder y darle el contexto legal a fin de que estas generaciones que estamos sufriendo este proceso argentino podamos hallar la solución con la vista, no en la miseria inmediata, sino en las posibilidades futuras, con un algo de esperanza que nos da la razón hoy, no mañana.

Ese es para nosotros el sentido de un salario mínimo, vital y móvil en este momento, porque cuando en todos los países del mundo se han establecido salarios mínimos, como queremos establecerlos hoy nosotros acá en el país, ha sido en momentos de crisis. Y eso es lo raro: a nosotros nos indican que estamos errando el camino económico porque nos encontramos en momentos de crisis. Pero, ¿es que acaso con un espíritu de justicia no podríamos decir nosotros que en los tiempos de crisis hay que volver los ojos a los que más la sienten?

Pero aun en el complejo económico del mundo moderno hemos visto ejemplos en todos los países, donde esta mejora del nivel salarial, esta fijación de un mínimo, ha venido a reeditar en el mercado social o ha producido lo que podríamos llamar la tendencia a la ejecución de los fines de la vida social. Esos salarios mínimos en todo el mundo han dado posibilidades a los empresarios para mejorar sus sistemas de trabajo, para impelerlos con la urgencia que tienen estos tiempos nuevos a buscar otras empresas, a organizar nuevas actividades, a recoger más aún los frutos del trabajo colectivo.

Podríamos señalar con respecto a este proyecto que hubiéramos deseado una mejor y mayor participación de los sectores interesados en su formulación, en su faz inicial, lo que no ha ocurrido, tal como lo han reconocido todos los sectores que han participado en esas primeras conversaciones con el Poder Ejecutivo. Pero de todos modos, cábeme recoger la opinión de los trabajadores, que exigieron o solicitaron, como corresponde a toda plenitud de derechos que puede tener un hombre o un conjunto de hombres socialmente organizados, como es la CGT, un salario mínimo que compense un poco los grandes déficit que vienen soportando desde hace años.

También hemos escuchado al sector empresario, que simplemente ha aportado a estas discusiones el sello de una reserva formal expresando que sería una buena cosa, pero que no ha reconocido que en el país, en este momento, se deben sacrificar todos los elementos que participan en la vida social y en la producción. Cuando los empresarios hablaron de la posibilidad de implantar este salario mínimo, se dijo que eso sólo sería posible transfiriendo los mayores costos a los precios, como resultante de este proceso. Se dijo también que contemporá-

neamente debían establecerse créditos preferenciales por parte del gobierno para que las empresas puedan afrontar esta nueva erogación. Pero no he sentido a nadie —y entiendo que alguna vez lo hemos de escuchar en el país— ni he visto a ese sector que se siente a la mesa de esta comunidad nacional y nos diga: «Yo también me voy a sacrificar.» Así como debemos reconocer el sacrificio del obrero, deberíamos escuchar también alguna vez en este país que la empresa se va a sacrificar. Y esa contribución de sacrificio que necesitamos todos en este momento, que constituye un imperativo moral, para otros sectores no es sino la falacia de algunos ilusos que pretenden mejorar a la clase obrera. Solamente han tenido a la vista de todo el mundo una exposición de sus posibles males, pero nunca de un beneficio, ni nunca tampoco han expresado querer participar en el sacrificio de hacer y organizar una comunidad en este país.

Ya hemos analizado que las incidencias finales de esta ley van a ser beneficiosas para todo el país. En cuanto al proyecto en sí, a su estructura y a su texto, nosotros, que lo suscribimos en general —aunque dejando a salvo nuestras discrepancias parciales, que yo considero fundamentales y que vamos a plantear en oportunidad del tratamiento en particular—, podemos señalar que queremos desde ahora y para siempre la universalidad del principio del salario mínimo para todos los que trabajan en relación de dependencia y por cuenta ajena en el país. Esta extensión, esta universalidad, se debe ver conciliada en todo el ámbito del país. Es decir que las quitas zonales, que han venido a ser, por virtud de convenios colectivos, una realidad, para nosotros no tienen motivo de permanencia en la estructura salarial. Y lo decimos no solamente porque esta bancada ha presentado por intermedio del diputado Pizarro un proyecto por el cual se derogan todas las disposiciones que posibilitan el establecimiento de quitas zonales, sino también porque quisiéramos ver en esta continuidad jurídica que debe ser el país una continuidad intencional en todos los partidos políticos.

Si los partidos políticos propiciamos una cosa es porque debemos tener algunas razones para ello, y mañana lo tenemos que reiterar si el principio sigue siendo justo o si, por lo menos, tiene el valor absoluto de una pretensión de justicia social. Lo digo porque hemos visto cómo tantos legisladores van cambiando de opinión en cuanto a las quitas zonales. El diputado Pizarro ha mantenido en este Congreso la posición que sostuvo antes; así lo sostiene ahora y así será también después de ser legislador.

Nosotros, que desde la instauración de este Congreso hemos votado una serie de leyes que iban a producir un impacto en el proceso económico a fin de provocar siquiera la revitali-

zación del país; nosotros, que hemos apoyado iniciativas para solucionar grandes necesidades, como ha sido la reforma a la carta orgánica del Banco Central, hoy tenemos que hacer presentes las mismas reservas que hiciéramos entonces por boca del diputado Busacca. Y debemos recordarlas no tan sólo en el afán sentimental de los que están a su lado en una bancada, sino también porque creemos necesario, oportuno, y llegado ya el momento de que nos fijemos una enérgica conducción económica.

En diciembre del año pasado, en enero de este año y cada vez que se ha tratado una ley de importancia, como la que estamos tratando en este momento, nosotros hemos puesto de manifiesto la necesidad de que el país tenga planes concretos de expansión económica y de desarrollo integral. Hemos reconocido la necesidad de esperar, pero esa espera debe también tener un término. Hemos pedido al gobierno planes y una conducción enérgica en lo económico, conducción coherente al servicio del país. Hoy lo reclamamos, como ayer lo hicimos.

También reafirmamos nuestra voluntad de servir al país con esta ley, con otras que apoyamos y con las que podamos propiciar con nuestra iniciativa.

Esta ley del salario mínimo ha de ser posible históricamente —digamos así— si se consiguen otros institutos legales, como el de la cogestión obrera, el de la coparticipación en las utilidades y el de la participación de los obreros en el más alto nivel de la conducción económica, tal como lo requirió Juan XXIII en su famosa encíclica *Mater et magistra*.

Creemos también que este Consejo Nacional del Salario, al que algunos agregan el carácter de mínimo, vital y móvil, va a determinar la conducción de la política salarial del país, al establecer los mínimos y al hacer los estudios de los otros aspectos referentes a esa política, por lo cual aumentamos las funciones de dicho consejo.

Pero también tenemos una serie de discrepancias, que yo llamaría estructurales antes que conceptuales, como el destino de los fondos que anteriormente se descontaban en virtud del artículo 48 del decreto 33.302, que nosotros determinamos concretamente. En este país, con ciudades rodeadas de villas miserias, también insertas en su misma estructura urbana y en el campo argentino que, como he dicho, resulta en este momento una gran villa miseria, queremos que esos fondos que se descuentan de los sueldos anuales complementarios integren planes eficientes para la vivienda obrera. Es dinero de los obreros y debe estar destinado a ellos. Ningún sector del país puede apropiarse de lo que no le pertenece y el Estado debe procurar que todos los bienes de los diferentes sectores y núcleos sociales, especialmente de los trabajadores, se destinen a conseguir la mayor cantidad de beneficios.

El proyecto que se presenta a esta Honorable Cámara tiene una importancia fundamental y una característica que no podemos pasar por alto, que es la defensa del núcleo familiar, establecida en proporción suficiente y justa en los artículos respectivos, al atribuir al núcleo familiar el 30 por ciento del salario mínimo, dejando a la persona sin cargas de familia el 70 por ciento.

Esto entraña un espíritu de justicia con la familia y la posibilidad cierta del establecimiento de vínculos duraderos en el matrimonio y la familia. También entraña la seguridad de que los padres de familia van a educar a sus hijos a mejores niveles que los actuales. Implica además el reconocimiento de las funciones sociales de la familia, no sólo como núcleo primario de la sociedad, sino también como conjunto de personas que llega a integrar con sus conceptos morales y sus vivencias educativas el concepto del hombre ya inserto en la vida en sociedad.

Es en la familia donde se forman los hombres y es en ella donde se forman también los principios generales para toda la vida, y este reconocimiento que se hace en el proyecto es digno de todo mérito y de todo respeto.

En nombre de mi bancada manifiesto claramente que apoyamos el instituto legal que se crea, aun cuando tenemos discrepancias parciales o estructurales. Y lo apoyamos porque representa en este momento la posibilidad de solución para muchos problemas; implica —repite— la prevención de la miseria del hombre argentino, y más que nada, implica paz social y progreso efectivo para toda la Nación. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Palacios.

Sr. Palacios. — Señor presidente: la oportunidad no es propicia para pronunciar un discurso. En realidad estamos realizando un acto ficticio: casi no hay diputados en el recinto, y los pocos presentes están fatigados. De manera que sería una impertinencia de mi parte contribuir a la sobresaturación de fatiga de los señores legisladores. Podría impedir que continuase esta reunión formulando una moción de orden para que se levantara la sesión, pero tengo serios escrúpulos para hacerlo, porque este asunto fundamental que estamos tratando exige una rápida solución que no tendríamos si yo procediera en esa forma. Por ello voy a hacer uso de la palabra con la mayor brevedad que me sea posible.

Hemos escuchado muchos discursos, algunos realmente de importancia. El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y el señor diputado Martínez Raymonda han hablado con una gran preparación en este tema, y pienso que acaso alrededor de esos dos grandes discursos se está realizando este debate.

No voy a ocuparme de las cuestiones que ya han sido tratadas. Simplemente quiero hacer algunas reflexiones sobre la evolución que se ha producido en los problemas relativos al trabajo para hacer notar la importancia que ahora adquiere, no la legislación del trabajo —designación a mi juicio equivocada—, sino el derecho del trabajo, que ha tomado carta de ciudadanía y se presenta en estos debates con una verdadera autonomía.

El salario mínimo, vital y móvil se refiere a la remuneración que garantiza al trabajador y su familia alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestido digno, asistencia sanitaria, educación, esparcimiento, seguro y previsión. Así lo consigna mi proyecto presentado en 1961 en el Senado de la Nación y reproducido ahora en este año en la Cámara de la que tengo el honor de formar parte. Esa definición demuestra que con este proyecto se pretende continuar en la marcha de la justicia social, principio consagrado en el artículo 14 bis de la ley de las leyes. En la Constitución Nacional reformada en 1957 en la ciudad de Santa Fe, está consignado de una manera amplia cuando se afirma que «el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial». Todo un programa de justicia social.

Antes de que se sancionara el artículo 14 bis, el bloque socialista sostuvo en la Asamblea Constituyente que el Congreso debía dictar el Código Nacional del Trabajo con carácter orgánico y sistemático para toda la República, con sujeción a los derechos y principios que se enunciaran. En primer término, que el trabajo no es una mercancía y que el salario vital, mínimo y móvil debía corresponder a un nivel de vida digna, que cubra plenamente las necesidades materiales, morales y culturales y de sano esparcimiento de los trabajadores y sus familias.

Después de la primera guerra de 1914, el Tratado de Versalles dejó consignado que el trabajo de los obreros no podía en ningún momento considerarse como una mercancía. Fue una simple declaración de carácter moral que no tuvo repercusión en ningún país del mundo, en todos los cuales regían los preceptos de una economía política ortodoxa que había de acentuarse después de la segunda guerra, sancionando el liberalismo económico, teoría que tuvo su explicación en el siglo XVIII, pero que ya no podía referirse a la realidad en que vivía el mundo. Esa economía ha sometido al trabajador, consi-

derándolo como un instrumento al servicio de un régimen que mutila las energías creadoras utilizándolas en beneficio del privilegio.

El problema de los salarios ha sido mal entendido en casi todos los Parlamentos del mundo cuando se ha tratado de dictar disposiciones relativas al derecho del trabajo. Los hombres son desiguales, sin duda, pero todos son hombres y deben por eso tener aseguradas sus condiciones de existencia digna —no de subsistencia—, no ser colocados en ningún momento en situación inhumana, como todavía existe en muchos países del mundo, situación por la cual ha pasado nuestra clase obrera.

Yo he sostenido muchas veces que la personalidad humana entraña un valor absoluto, por constituir el hombre un fin en sí mismo. No es posible por eso, tratarlo como un medio, que tal situación es la que corresponde a las cosas, de mero valor condicional y relativo. La igualdad es la raíz intelectual de la argentinidad y debe acordar posibilidades comunes propicias al desarrollo integral del ser humano, en armonía con las condiciones de la evolución social. Una igualdad positiva que asegure a todos los hombres, por el solo hecho de ser tales, los medios de subsistencia así como la garantía de un pleno desarrollo, es lo indispensable para potencializar la capacidad humana, es decir, lo que interesa a la existencia vital de la Nación.

La democracia, fundada en principios morales, permitirá el surgimiento de las legítimas superioridades debido a la selección espiritual.

La fijación de los salarios por virtud de la libre contratación implica el sometimiento del débil al fuerte. Yo he dicho antes de ahora que, al presentar este proyecto, no pretendía suprimir por la ley el régimen del salariado, que considero injusto, pero trataba de atenuarlo obedeciendo a un mandato de la Constitución de mi patria.

Es claro que el régimen del salariado es injusto. Después de muchas tentativas y discusiones así lo reconocen hoy todos los hombres que se han ocupado de las cuestiones sociales en profundidad. Creo firmemente con Justo, el ilustre fundador de mi partido y senador eminente, que ni el salariado es, en realidad, un contrato, ni la fuerza humana de trabajo puede considerarse una mercancía. Las mismas disquisiciones sobre el precio del trabajador a que da lugar el absurdo y monstruoso concepto del trabajo-mercancía patentizan que el salariado no es una relación voluntaria y libre entre iguales, una relación de derecho, sino una esclavitud atenuada, relación de hecho basada en la coerción indirecta que la apreciación del suelo y demás medios de vida y de trabajo ejercen sobre el trabajador.

Esto dice el doctor Justo en su libro *Teoría y práctica de la historia*, primera edición, Buenos Aires, páginas 222 y 225.

Esta es la teoría sostenida por el autor del *Dogma socialista de Mayo* desde 1837. Eche-

verría, como saben los señores diputados, aspiraba a la emancipación del obrero desde antes de que dieran los fundamentos científicos del socialismo los grandes teóricos europeos. Plan-teaba Echeverría la cuestión de la ética del trabajo vinculada a una actitud cristiana. Consideraba el trabajo como algo más que un fenómeno material, y exigía la subordinación de la vida económica a la vida espiritual. Precursor de nuestra democracia social, rechazó el régimen del salariado, al que llamaba la «forma postrera de la esclavitud».

Quiero dejar constancia de que después de más de medio siglo la Constitución Nacional, que se inspira en el *Dogma socialista de Mayo*, reproduce, con el precepto que he citado antes, las palabras del gran precursor, de Esteban Echeverría, albacea del pensamiento de Mayo.

Hoy los trabajadores consideran que el trabajo asalariado, únicamente rinde capital, es decir, una forma de propiedad que sólo puede crecer y multiplicarse a condición de engendrar nuevo trabajo asalariado, y que la propiedad en la forma actual no admite salida a este antagonismo del capital y del trabajo asalariado. A su vez, los trabajadores demócratas cristianos sostienen que la sociedad organizada para la producción es una sociedad mal organizada, en la que la mayor parte de sus agentes tienen interés en producir poco o no tienen interés en producir mucho y bien. Por eso consideran que el régimen del salariado es imperfecto y de transición, aspirando a que termine la lucha de clases, que ellos consideran como un hecho que debe desaparecer.

El salario mínimo vital no se sancionará sólo para satisfacer las exigencias fundamentales de la vida del obrero, tomando como tipo al obrero sin familia, solitario, a cuya remuneración debe agregarse, por otra ley, lo necesario para satisfacer los requerimientos familiares. El salario mínimo no se ocupa de lo absolutamente indispensable porque eso sería retornar al principio de aquella ley famosa del gran organizador alemán, que se llamó la ley de bronce, en virtud de la cual su autor entendía que el obrero no podía aspirar, ni aspiraría jamás, a otra cosa que lo económicamente necesario para su subsistencia y para su reproducción, teoría que ha sido refutada por todos sus correligionarios y que hoy no tiene ni puede tener vigencia. Ya he dicho que el concepto de todos los proyectos presentados es garantizar al trabajador y a la familia alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestido digno, asistencia, educación, esparcimiento, seguro y previsión.

En ningún país se ha establecido el sistema que propugnamos todos los autores de los proyectos, como en Nueva Zelanda, donde se ha aplicado el principio estableciendo que deben satisfacerse necesidades físicas y espirituales de la familia tipo, con un salario que será móvil, pues deberá ajustarse a las modificaciones de los nú-

meros índices del costo de la vida para que pueda mantener su poder adquisitivo.

Esta es la síntesis del nuevo derecho del trabajo y es la antítesis de lo que sostienen ahora los empresarios; de lo que sostuvo uno de ellos en nombre de la Sociedad Rural en 1937 cuando le dijo al presidente de la República que era necesario derogar la congelación de salarios permitiendo la libre contratación entre obreros y patrones, siguiendo las prácticas de nuestro país como base mínima y viable, principio de la libre contratación en virtud del cual el más débil queda sometido al más fuerte, y que volvería a incorporarse a nuestras prácticas del derecho obrero si esta Cámara no sancionara prontamente la ley que por distintos conductos se ha elaborado en la Comisión de Legislación del Trabajo.

Hay en la comisión proyectos de la Confederación General del Trabajo, del Poder Ejecutivo, del diputado que habla, del grupo parlamentario del socialismo democrático y de la democracia cristiana, lo que está demostrando de una manera muy clara el prestigio de que goza esta reforma reclamada imperiosamente por la clase obrera.

El principio de la libre contratación —y los señores empresarios lo olvidan— fue abolido hace ya muchos años en esta misma Cámara, donde tuvo prácticamente comienzo de derogación al dictarse la primera ley del trabajo, la del descanso hebdomadario y, específicamente, del descanso dominical. Es claro que esa ley no estaba de acuerdo con el principio del Código Civil en virtud del cual se dispone que el contrato es la ley de las partes. Si un hombre fuerte contrata con un hombre débil para que el hombre débil trabaje diez horas con el salario que disponga el patrón, el contrato, según nuestro código, que es la expresión más acabada del Código Napoleón, habría colocado al obrero en condición de esclavitud.

Felizmente, todas las leyes del trabajo, sin excepción, atacaron el principio de la libre contratación y de la autonomía de la voluntad. Hoy, felizmente, esos principios no pueden citarse.

La doctrina social de la Iglesia Católica proclama con la mayor claridad y energía el derecho del obrero al salario mínimo, vital y móvil sostenido en todas las encíclicas papales. Ya el señor diputado, representante del bloque demócrata cristiano citó la encíclica famosa del gran pontífice León XIII llamada *Rerum novarum*; pero, posteriormente, se aclaró todavía más el concepto y se estableció el salario mínimo más definitivamente en la encíclica *Quadragesimo anno* y en la última del papa Juan XXIII, a través de la cual la Iglesia ha asumido posiciones revolucionarias que consideró absolutamente indispensables para poder continuar el desarrollo de la vida normal de la clase trabajadora.

Las numerosas experiencias que existen en esta materia permiten demostrar el efecto po-

sitivo de la iniciativa que está discutiendo la Cámara. Se ha demostrado de una manera concluyente, en los países donde se ha sancionado el salario mínimo, vital y móvil, que éste ha producido verdadera reactivación de la industria; así, por ejemplo, en Holanda, después de un período de aplicación de la ley de salario mínimo, vital y móvil, un autorizado observador hacía esta categórica afirmación: «En este sistema se basa el resurgimiento del país. El desarrollo de la actividad económica, la expansión de la industria y el muy escaso número de huelgas, constituyen factores indiscutibles en favor del sistema.»

Fuera y dentro de la Cámara se ha discutido si el salario mínimo, vital y móvil podía producir inflación, si constituía un impacto muy serio, muy grave para la economía argentina. La verdad, señores diputados, es que los salarios altos no producen de ninguna manera la inflación; en cambio, ésta es la que produce los salarios bajos.

Por eso es que hay un acuerdo tan grande y tan auspicioso en la mayor parte de los núcleos parlamentarios que han hecho oír su voz en este recinto, o en correligionarios que fuera de él han expresado su opinión con verdadera sabiduría.

Lo que quiero significar en este momento, y a lo que no se ha referido ninguno de los oradores, es algo relativo a la evolución del derecho del trabajo desde que se dictó la primera ley, la del descanso hebdomadario obligatorio. En esa época, 1904, no había en el país ninguna ley ni decreto que reglamentara el trabajo de los obreros y que protegiese a éstos. La legislación del trabajo es un conjunto de disposiciones de excepción; es legislación tuitiva, esto es, protectora de la clase trabajadora, no de los empresarios. Es una legislación de excepción que favorece al débil, instaurando el principio de la justicia social, justicia social que no existía sino de manera rudimentaria en aquella época, pero que, como tuve oportunidad de decirlo en una exposición anterior en esta Honorable Cámara, se puso claramente de manifiesto en 1890 en el petitorio que los obreros presentaron solicitando la fijación de la jornada de ocho horas. En ese momento se presentó al Congreso el primer plan de justicia social de que tuvo conocimiento el pueblo argentino. En ese plan, que está en el Archivo de la Cámara de Diputados, de donde pueden conocerlo mis colegas, se expone la aspiración fervorosa de que se realice una reforma legislativa que comprenda muchas de las leyes que se han ido sancionando desde 1904.

Mi correligionario, el señor diputado Muñiz, solicitó que ese plan de justicia social se incorporase al Diario de Sesiones. Su indicación no se votó, con lo que nos hemos visto privados del placer de comprobar que ya en aquella época de la República había trabajadores conscientes, inteligentes y fuertes que respetaban a las au-

toridades del país y que se dirigían al Congreso Nacional solicitando una serie de reformas que comenzaban con la jornada de ocho horas, conquista que se concretó legislativamente pocos años después, pero que hoy se viola de la manera más lamentable.

La evolución de la legislación del trabajo ha seguido un ritmo acelerado. Quien compare la dolorosa situación de los trabajadores, llena de angustias, correspondiente a la época en que se sancionó la primera ley del trabajo, con las sanciones y votos del Primer Congreso de Derecho del Trabajo celebrado en la ciudad de Tucumán en 1961, comprenderá todo el camino recorrido. A ese congreso asistieron los más grandes tratadistas europeos y americanos del derecho del trabajo, y también como miembro destacado el actual vicepresidente 19 de esta Cámara, doctor Bogliano. En ese congreso, que tuve el honor de presidir, estuvieron presentes además los rectores de casi todas las universidades de América, y llamó la atención especialmente la asistencia del ilustre rector de la Universidad de Chuquisaca, la ciudad famosa que formó el espíritu de Mariano Moreno, de Castelli, de Agrelo, de Paso, y de gran parte de nuestros próceres, sobre todo de Paso y Castelli, los dos grandes tribunos de la Revolución, que dieron la fórmula política y jurídica de aquel gran movimiento de ideas que hizo caducar el poder de España.

En ese Congreso de Tucumán se levantó la voz del eminente tratadista mejicano doctor Mario De la Cueva, quien explicó cómo ya se había producido una transformación de las leyes del trabajo, dictadas, un poco despreocupadamente, en la teoría del derecho del trabajo. Dijo: «Concebí el derecho del trabajo como una fuerza viva al servicio de la democracia, de una nueva democracia social en la que el hombre, no el individuo, era el centro de todos los valores; de una democracia en la que el ser humano, como dice Hegel, puede ser tratado como persona y considerarse y respete a los demás como a personas. Lo concebí como a un derecho vivo al servicio de la vida; entendí que su misión consiste, no tanto en regular las relaciones entre trabajadores y patronos, sino más bien en construir un instrumento de política social, en un esfuerzo constante por dar a las clases trabajadoras y campesinas la parte que legítimamente les corresponde en los bienes de la cultura y la riqueza de los pueblos. En aquellos antecedentes recorrí la historia del derecho del trabajo de mi patria y vi que para nacer tuvo que romper el mundo individualista y liberal y quebrar el imperio absoluto del derecho civil. Recordé la frase célebre de Luis XIV y pensé que si en un tiempo pudo decir el derecho civil "el derecho universal soy yo", el nuevo derecho, ese derecho esencialmente humano, cuyos perfiles veo ahora mejor que nunca, nació, como nos ha dicho el autor de *El nuevo derecho*, de la vida misma, de los hombres y de los pueblos. Comprendí que ese

derecho puede hoy decir: en el campo del trabajo humano hay un nuevo principio y una nueva idea, y este nuevo principio y esta nueva idea están representados y son conducidos por mí. Vi al derecho del trabajo nacer en mi país —agrega el tratadista— en el torrente incontenible de la revolución de 1810. Nació como un grito de rebeldía del hombre americano que ha cantado Gallegos en sus libros, Alegría en su obra famosa y todos los grandes literatos de la América latina, así como lo han inmortalizado los pinceles de Orozco, de Rivera y de Siqueiros. Contemplé el derecho del trabajo como uno de los hijos de nuestro tiempo, producto de nuestras tragedias, del dolor de nuestras clases sociales y de la tristeza de nuestros trabajadores.»

Esa es la evolución operada desde las pequeñas transformaciones de carácter estrictamente jurídico, a esta gran concepción del derecho del trabajo, que cada día va ampliando más los horizontes jurídicos y que pide auxilio para su desenvolvimiento a otras ciencias: a la psicología, a la economía política y a la higiene.

Todos los señores diputados que han hablado sobre esta materia han hecho exposiciones de carácter económico. Es claro que el derecho del trabajo sin la economía no tendría la importancia que actualmente tiene. Pero la verdad es que no conviene que la economía política supere los principios, los postulados de la ética sobre los cuales debe basarse todo el derecho del trabajo. Expresión que también corresponde al gran precursor Esteban Echeverría, que en su famosa obra *El Dogma Socialista de Mayo*, después de afirmar que la democracia es el régimen de la libertad basado sobre la igualdad de clases, sostiene que la economía que no se base en postulados éticos carecería en absoluto de importancia.

Y agregaba: lo que no deben olvidar nunca los economistas argentinos es que los principios de la economía europea, de los grandes economistas, no tenían aplicación sino excepcionalmente a los problemas que se debatían o se iban a debatir luego, relativos al derecho del trabajo.

Los principios de los grandes economistas europeos no podían aplicarse estrictamente como suponen algunos a nuestro país, porque las características son distintas, porque hay diferencias de clima, de psicología y de idiosincrasia. Todo eso determinaba en el pensamiento de Echeverría la necesidad de crear una política económica argentina con principios argentinos.

Me complazco en citar frecuentemente a Esteban Echeverría —cuyas ideas he expuesto y comentado en un libro—, porque la primera preocupación de los legisladores de este país debe ser tener presente siempre que los problemas nuestros son argentinos y que nuestro nacionalismo, que está muy lejos de ser chauvinismo, que está muy lejos de ser la deformación a que aspiran algunos grupos nacionalistas, ha de basarse en nuestros antecedentes y en la obra formidable de los grandes pensadores co-

mo Alberdi, Echeverría, Mitre y otros que contribuyeron a darnos patria.

La evolución de todo lo que se refiere a legislación del trabajo para convertirse en el derecho del trabajo debe hacernos sentir orgullosos. He demostrado alguna vez, citando prescripciones legales, que la legislación del trabajo en 1919, en la Argentina —hace más de 40 años— era superior a las disposiciones sancionadas, por ejemplo, por el gran Congreso Internacional del Trabajo, realizado en Washington. Nos habíamos anticipado en diez o quince años a los preceptos que el Congreso Internacional aconsejaba a todos los países civilizados.

Es claro que esto está demostrando que el nuevo derecho con base económica y ética ha triunfado, y es lo que puede beneficiar al proletariado argentino.

El derecho del trabajo se ha estructurado no para adquirir privilegios sino para establecer la igualdad del valor de la persona humana, principio kantiano que conduce a conclusiones económicas.

En esta última década, en las exposiciones que han hecho los autores de libros, los pensadores y los cuerpos colegiados, se ha demostrado que nos presentamos en el concierto de las naciones del mundo como un país realmente rector en el orden del espíritu. En el orden material no; en el orden puramente económico hemos sufrido una decadencia terrible y los países poderosos, que son los dueños de la técnica, han contribuido, con sus presiones, a realizar esta situación angustiosa en el orden material. Pero siempre hemos sostenido y vemos con placer que nuestros hombres que piensan han creído que la economía debe estar subordinada al espíritu; que si la técnica no se subordina a él, si no hacemos que la máquina sea dirigida por el espíritu, concluirá por arrasar con la civilización, a pesar del enorme y fabuloso incremento de la técnica de los grandes países desarrollados, especialmente de los Estados Unidos de América.

La democracia social que nosotros propugnamos debe concretar la valorización de la persona humana hacia la libertad de trabajar por el pensamiento igualitario para que nadie pueda negar que la libertad carece de un significado positivo si no se realiza dentro de la igualdad.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Palacios. — Se trata de un sistema de vida, de una continuidad de la conducta clara, de un juego limpio en la acción, de una doctrina afirmada en la idea del valor equivalente de la dignidad del hombre.

La democracia es un fin, lleva en sí una filosofía de la vida, significa el respeto religioso de los derechos de todos. Es el sentido de comunidad de hombres libres en función de go-

bierno y en unidad de destino. Es también el esfuerzo constante para la realización histórica de los derechos proclamados en abstracto, de los llamados derechos naturales que existen pero que solamente pueden aplicarse dentro de este concepto de la democracia histórica y como un estilo de vida.

El elemento moral de la riqueza que el trabajador pone en ejercicio cuando elabora un producto convirtiéndose en un creador es de naturaleza superior al producto, pero como la relación jurídica es la reguladora del esfuerzo económico no se obtenía la separación de ambos conceptos, razón por la que puede decirse que en el comienzo del siglo la posición jurídica del obrero estaba en terreno falso. En efecto, el trabajador valía lo que valía su trabajo, del que era inseparable. Y así, el trabajo era una mercancía, cosa negociable, sujeta a las condiciones del mercado, de donde resultaba que la persona moral desaparecía para confundirse en el valor material del esfuerzo vendido por un salario.

Mas el concepto de persona que afirmamos con esta ley, de sujeto de derecho, tiene un valor universal y está fundado en la experiencia. Es un autotín. Por eso Ruskin afirma que la mayor suma de trabajo no será prestada por esta curiosa máquina cuya fuerza motriz no es el vapor, ni la electricidad, ni otro agente de fuerza incalculable, por un precio o por coacción, sino por su propia fuerza motriz que es el alma, es decir, su voluntad libre que es del orden del espíritu.

La personalidad individual del obrero en el régimen del taller asume el carácter de personalidad colectiva, creando una nueva fuerza jurídica que desconcertaba a los juristas porque el derecho civil, en virtud del concepto de contrato, no toleraba ninguna restricción a la voluntad individual, negándose a admitir la realidad social. Se imponía, pues, la autonomía del derecho del trabajo. Lo mismo pasó con el concepto de riesgo profesional, que fue calificado de doctrina antijurídica. Ahora hasta muchos juristas sostienen que es antijurídica esta ley que vamos a sancionar.

Yo recuerdo que en este mismo recinto presenté en el año 1906 el primer proyecto de indemnización por los accidentes de trabajo. Pronuncié el discurso fundando mi proyecto, y a la salida, en el salón de pasos perdidos, un gran civilista, el doctor Galeano, profesor de la Universidad, se me acercó y me dijo: «Doctor, lo hemos escuchado con verdadera simpatía; su afán, su preocupación por la mejora de la clase trabajadora son dignos de respeto. Pero no podremos sancionar su proyecto.» ¿Por qué?, le pregunté. Y me dijo: «Porque su proyecto está en contra de un principio inconcusso del derecho civil: el principio de la culpa.» De eso es, precisamente, de lo que se trata, señor profesor, le dije. Insistí. Presenté repetidas veces,

porque caducaba, el primer proyecto, hasta que se sancionó, en contra del principio de la culpa. Sancionado el proyecto que propugnaba el principio del riesgo profesional, el principio de la culpa ya no tenía ninguna razón de ser.

Eso es lo que se produce cuando el esfuerzo de los hombres tesoneros realiza una obra para que el país no se estanque, para que el país no solamente no retroceda sino para que no se quede estático.

Queremos, pues, el esfuerzo de todos. Queremos el esfuerzo de los legisladores para votar esta ley que viene a transformar estructuras, que realiza una obra magnífica vinculando el derecho del trabajo a otras disciplinas científicas que lo completan y que lo colocan en situación de una gran disciplina de carácter científico. El derecho del trabajo no debe elaborarse sólo en el silencio de la biblioteca. Hay que estudiarlo dondequiera que el esfuerzo humano transforme la vida y pidiendo auxilio a las otras ciencias, para que no se diga que hay una última y formidable ciudadela donde están los juristas, los legistas y los políticos como en un reducto completamente aislado.

Hay una perfecta solidaridad entre las ciencias y se observan a cada instante influencias recíprocas, especialmente entre la psicología y la fisiología, pues las perturbaciones funcionales están generalmente acompañadas de inconsciencia.

El derecho del trabajo, unido al derecho económico, abre nuevos caminos a la ciencia jurídica, que aparece como un precipitado de las limitaciones actuales de la libertad contractual. En el Congreso Internacional de Higiene y Demografía de Bruselas, a principios del siglo, cuando ya los iniciadores de la legislación obrera vinculaban el derecho del trabajo a otras ciencias, se insistió en la necesidad de un examen médico preliminar de los trabajadores con el fin de reconocer sus aptitudes y de guiarlos en la elección de su carrera. Se insistió también, primordialmente, en la fundación de laboratorios de energética, destinados al estudio científico del trabajo obrero.

Dejo constancia de que tengo la honra de haber llevado los laboratorios de psico-fisiología a las universidades de Buenos Aires y de La Plata y de que ocho años antes de que tomara intervención el famoso endocrinólogo Nicolás Pende, fundé esos institutos de biotipología en la Universidad de La Plata, donde trabajó contratado por la universidad el famoso colaborador de Mosso en el laboratorio de Turín.

No tengo tiempo —porque veo la luz que aparece a mi frente— para referirme a alguna de las disidencias parciales que mi bloque ha formulado al dictamen de la comisión y que serán consideradas en la discusión en particular.

Termino esta exposición pidiendo disculpas a los colegas por haber insistido demasiado en un asunto que, además de preocuparme fundamentalmente desde hace muchas décadas en forma personal, debe preocupar al país, porque el ámbito jurídico solo no puede transmitir los conocimientos del derecho del trabajo a la nueva generación.

Hoy en algunas partes se enseña el derecho del trabajo desde un punto de vista exclusivamente jurisprudencial. En cambio, tengo a honra haber iniciado en las dos universidades en que dirijo cátedras, la enseñanza del derecho del trabajo vinculándolo a las ciencias afines, a la economía, a la fisiología y a la higiene.

En el tratamiento en particular volveré a molestar a los señores diputados para referirme a esas disidencias parciales, porque votaré el dictamen de la mayoría. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señores diputados: restan escasamente cuatro minutos para las 24, hora fijada para pasar a cuarto intermedio. Con el consentimiento de la Honorable Cámara y a fin de no interrumpir la exposición del orador siguiente, invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 9 y 30.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 23 y 57.

8

APENDICE

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SERU GARCIA

COSTO DE VIDA DE LA FAMILIA TIPO

(matrimonio con dos hijos menores de 8 y 6 años)

Calculado según precios vigentes en el mes de abril de 1964 en ferias, mercados, almacenes y negocios de la ciudad de Buenos Aires, seleccionados con carácter permanente, y ponderados con arreglo al presupuesto de consumo convenido por acuerdo entre el Sindicato de Luz y Fuerza, Capital Federal, y las empresas que explotan el servicio público de electricidad en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Costo de vida «SLyF»

Rubros fundamentales que lo integran

CONCEPTO	m\$N.	%
Alimentación	11.449,40	47,65
Vestimenta	5.786,02	24,08
Vivienda	873,20	3,63
Bienes de uso para el hogar ..	245,89	1,02
Limpieza y conservación	348,40	1,45
Combustibles	501,50	2,09
Aseo e higiene personal	1.069,16	4,45
Movilidad	819.—	3,41
Escolaridad e información	637,58	2,65
Esparcimiento y varios	2.300.—	9,57
	24.030,15	100.—

Variación del costo de vida «SLyF»

Fecha	m\$N.	Diferencia en m\$N. con mes anterior	Diferencia en % con mes anterior
Diciembre 1963	22.180,96		
Enero 1964 ...	23.335,60	+ 1.154,64	+ 5,2
Febrero 1964 ..	22.821,35	— 514,25	— 2,2
Marzo 1964 ...	23.118,68	+ 297,33	+ 1,3
Abril 1964 ...	24.030,15	+ 911,47	+ 3,9

Diferencia acumulada entre enero y abril de 1964: \$ 694,55 (2,97 %).

Diferencia acumulada entre diciembre de 1963 y abril de 1964: \$ 1.849,19 (8,33 %).

Promedio mensual de aumento en los cuatro (4) primeros meses de 1964: 2,08 %.

Si se produjera el mismo aumento promedio en el resto del año, tendríamos a fin de 1964 un aumento de 24,96 %.

Evolución de promedios de precios de la carne en Capital Federal

Fecha	m\$N.
Año 1961:	
Septiembre	46,17
Octubre	50,80
Noviembre	53,51
Diciembre	55,19
Año 1962:	
Enero	52,48
Febrero	51,63
Marzo	52,24
Abril	52,93
Mayo	54,30
Junio	55,51
Julio	55,54
Agosto	67,58
Septiembre	65,37
Octubre	64,05
Noviembre	62,59
Diciembre	61,82
Año 1963:	
Enero	63,13
Febrero	62,15
Marzo	66,54
Abril	70,17
Mayo	68 —
Junio	68,13
Julio	70,84
Agosto	71,10
Septiembre	70,37
Octubre	80,57
Noviembre	85,81
Diciembre	80,20
Año 1964:	
Enero	93,29
Febrero	98,51
Marzo	107,52
Abril	120,63

El aumento registrado en el lapso que se analiza es de \$ 74,46, que significa un 161,2 por ciento.

Es de hacer notar la variación brusca y la aceleración de la tendencia ascendente a partir de octubre de 1963, que con respecto a septiembre del mismo año registra un aumento de más del 14 por ciento.

Si observamos la diferencia entre septiembre de 1963 y abril de 1964 nos encontramos con que es de \$ 50,26 por kilogramo y representa un 71,4 % de aumento.

0 — Alimentación

ESPECIE O MARCA	Unidad base	Precio unidad	Precio del género	Consumo mensual	Gasto mensual			
A) ALIMENTOS								
I) Alimentos de origen vegetal								
a) Cereales y derivados:								
Arroz envasado	Kg.	37,86		2,4	90,86			
Harina de trigo envasada	"	17,65		3	52,95			
Pastas (tallarines)	"	31,93		7,5	239,47			
Pan tipo francés	"	28.—		35	980.—			
b) Grupo frutihortícola:								
1) Frutas:								
Banana	"	21,16	25,26	30	757,80			
Mandarina	"	27,66						
Manzana	"	26,83						
Naranja	"	25,41						
2) Hortalizas:								
Batata	"	11,27	18,14	30	544,20			
Papa	"	13,16						
Tomate	"	35.—						
Zanahoria	"	11,77						
Zapallito	"	14,88						
Zapallo	"	12,88						
3) Verduras:								
Acelga	"	15,66						
Apio	"	11,66						
Cebolla	"	10,33						
Chaucha	"	32.—						
Escarola	"	10,66						
Espinaca	"	31.—						
Lechuga	"	18,33						
Remolacha	"	20.—						
Repollo	"	11,66						
4) Legumbres:								
Arvejas	"	36,20	45,27	2,55	115,43			
Garbanzos	"	67,15						
Lentejas	"	48,83						
Porotos	"	28,93						
c) Conservas y dulces:								
Extracto de tomate 150 g.	150 g.	13,75		4	55.—			
Dulce de membrillo suelto	Kg.	53,50		3,75	200,62			
II) Alimentos de origen animal								
a) Carne vacuna y porcina:								
Asado	"	96,44	120,63	30	3.618,90			
Bifes	"	136,11						
Carnaza	"	83,99						
Cuadril	"	139,22						
Falda	"	61,66						
Lomo	"	173,11						
Peceto	"	153,88						
Tocino	"	70.—						
b) Pescado:								
Corvina	"	39,33	51,99	3	155,97			
Merluza	"	30.—						
Pejerrey	"	86,66						
c) Huevos	Docena	75.—		5	375.—			
d) Leche y derivados:								
Leche	Litro	12,50		60	750.—			
Manteca	Kg.	177,25		3	531,75			
Queso fresco	"	76,26		2,55	194,46			

ESPECIE O MARCA	Unidad base	Precio unidad	Precio del género	Consumo mensual	Gasto mensual
Queso de rallar Provolone	"	131.—	128,66	1,5	192,99
" " " Reggianito	"	128.—			
" " " Sardo	"	127.—			

B) COMPLEMENTOS DE ALIMENTACION

I) Condimentos:

Aceite «Cocinero»	Litro	60,63	73,81	5	369,05
" " «Malvaloca»	"	86,99		2	1,86
Ají molido 50 g.	10 g.	0,93		3	9,33
Pimienta 5 g.	5 g.	3,11	36,49	1	6,50
Sal fina	Kg.	6,50		0,5	2,71
Sal gruesa	"	5,43		1	36,49
Vinagre «Alcázar»	Litro	27,98	45,01	1	36,49
" " «Bagley»	"	45,01			

II) Ingredientes varios y bebidas:

Azúcar refinada	Kg.	36,25	44,14	6,3	228,37
Cacao azucarado	200 g.	22,40		2	44,80
Café	Kg.	192,66		1	192,66
Yerba Mate «Cruz Malta»	"	45,93	44,14	3	132,32
" " «Flor de Lis»	"	42,35		15	225.—
Hielo	Trozo	15.—	6.—	60	360.—
Soda	Litro	6.—		30	594.—
Vino común	"	19,80			

11.449,40

1 — Vestimenta

A) DEL HOMBRE

I) Ropa interior:

	Ponderación	Precio promedio	Por año	Gasto mensual
		\$	\$	\$
Camiseta sin manga algodón	2 por año	97.—	194.—	16,16
Camiseta manga larga frisa	1 por año	299,50	299,50	24,95
Calzoncillos	3 por año	264.—	792.—	66.—

II) Ropa exterior:

Sombrero de fieltro	1 cada 5 años	1.184,50	236,90	19,74
Camisa	3 por año	644,50	1.933,50	161,12
Corbata	2 por año	149,50	299.—	24,91
Chaleco o pullover de lana	1 cada 2 años	974,50	487,25	40,60
Saco sport	1 cada 2 años	3.494.—	1.747.—	145,58
Pantalón	2 por año	1.194.—	2.388.—	199.—
Cinturón o tirantes	1 cada 2 años	239.—	119,50	9,95
Traje de invierno	1 cada 3 años	5.949.—	1.983.—	165,25
Traje de verano	1 cada 2 años	4.949.—	2.474,50	206,20
Sobretodo	1 cada 4 años	4.949.—	1.237,25	103,10
Piloto gabardina algodón	1 cada 4 años	3.789.—	947,25	78,93
Bufanda	1 cada 3 años	399,50	133,16	11,09
Medias	6 pares por año	105,45	632,70	52,72
Pañuelo	6 por año	52,45	314,70	26,22

III) Calzado:

Zapatos vaquillona	2 pares por año	1.150.—	2.300.—	191,66
Arreglo zapatos (½ suela - tacos)	2 por año	260.—	520.—	43,33
Mocasines	1 par por año	990.—	990.—	82,50
Galochas	1 par cada 3 años	430.—	143,33	11,94

B) DE LA MUJER

1.680,95

I) Ropa interior:

Corpiño	3 por año	194.—	582.—	48,50
Bombacha	3 por año	109.—	327.—	27,25
Combinación	3 por año	424,50	1.273,50	106,12

	Ponderación	Precio promedio	Por año	Gasto mensual
		\$	\$	\$
II) Ropa exterior:				
Blusa	1 por año	644.—	644.—	53,66
Pullover	1 por año	1.240.—	1.240.—	103,33
Pollera	2 por año	840.—	1.680.—	140.—
Delantal	3 por año	346,50	1.039,50	86,62
Vestido para diario	2 por año	1.844,50	3.689.—	307,41
Vestido para salir	1 por año	2.745.—	2.745.—	228,75
Tapado	1 cada 3 años	4.445.—	1.481,66	123,47
Medias	4 pares por año	129,50	518.—	43,16
III) Calzado:				
Zapatos para diario	2 pares por año	598 —	1.196.—	99,66
Zapatos para salir	2 pares por año	1.290.—	2.580.—	215.—
IV) Complementos del vestir:				
Cartera	1 por año	1.990.—	1.990.—	165 83
C) DEL NIÑO				1.748,76
I) Ropa interior:				
Camiseta algodón sin mangas	2 por año	93,50	187.—	15,58
Camiseta frisa manga larga	1 por año	177.—	177.—	14,75
Calzoncillos	3 por año	123,50	370,50	30,87
II) Ropa exterior:				
Camisa	3 por año	414,50	1.243,50	103,62
Pullover de lana	1 por año	890.—	890.—	74,16
Pantalón	2 por año	595.—	1.190.—	99,16
Guardapolvo	1 por año	624.—	624.—	52.—
Traje de media estación	1 por año	2.250.—	2.250.—	187,50
Traje de verano	1 por año	2.095.—	2.095.—	174,58
Sobretodo	1 cada dos años	2.600.—	1.300.—	108,33
Capa impermeable	1 cada 3 años	945.—	315.—	26,25
Medias ¾	6 pares por año	134.—	804.—	67.—
III) Calzado:				
Zapatos	4 pares por año	850.—	3.400.—	283,33
Zapatillas	2 pares por año	298.—	596.—	49,66
Galochas	1 par c/3 años	430.—	143,33	11,94
D) DE LA NIÑA				1.298,73
I) Ropa interior:				
Bombacha	3 por año	117.—	351.—	29,25
Camiseta algodón sin mangas	2 por año	106,50	213.—	17,75
Camiseta manga larga de frisa	1 por año	217,50	217,50	18,12
II) Ropa exterior:				
Blusa	3 por año	470.—	1.410.—	117,50
Pullover	1 por año	540.—	540.—	45.—
Pollera	2 por año	724,50	1.449.—	120,75
Delantal colegial	1 por año	724,50	724,50	60,37
Vestido para salir	1 por año	1.820.—	1.820.—	151,66
Tapado	1 c/2 años	2.840.—	1.420.—	118,33
Capa impermeable	1 c/3 años	990.—	330.—	27,50
Zoquetes	6 pares por año	79,50	477.—	39,15
III) Calzado:				
Zapatos	4 pares por año	750.—	3.000.—	250.—
Zapatillas	2 pares por año	298.—	596.—	49,66
Galochas	1 par c/3 años	430.—	143,33	11,94
				1.057,53

3 — Bienes de uso para el hogar

	Ponderación	Precio promedio	Por año	Gasto mensual
		\$	\$	\$
Sábana 2 plazas 2,20 x 2,50	3 c/2 años	433.—	649,50	54,12
Sábana 1 plaza 1,60 x 2,50	4 c/2 años	291.—	582.—	48,50
Funda 2 plazas 1,35 x 0,45	1 c/2 años	119.—	59,50	4,95
Funda 1 plaza 0,90 x 0,45	2 c/2 años	86.—	86.—	7,16
Frazada 2 plazas	2 c/5 años	1.745.—	698.—	58,16
Frazada 1 plaza	4 c/5 años	1.095.—	876.—	73.—
				245,89

4 — Limpieza y conservación

Grupo I:

Jabón común (pan)	500 g.	10,50	5	52,50
Lavandina	Litro	6.—	5	30.—
Azul de lavar Brasso	20 g.	2,91	2	5,82
Almidón Colman	500 g.	48,80	200 g.	19,52

Grupo II:

Polvo limpiador Puloil	Kg.	17,33	1	17,33
Escoba	1	65,83	0,5	65,83
Cepillo de piso	1	31,16	0,5	15,58
Trapo de piso blanco 55 x 60	1	25,16	2	51,32
Cera líquida Royal	Litro	58.—	0,5	29.—

Grupo III:

Líquido insecticida Flit	Litro	66,68	0,5	33,34
Espiraes Buda	Docena	28,16	1	28,16

348,40

5 — Combustibles

Alcohol de quemar	Litro	23,50	2,4	56,40
Carbón vegetal	Kg.	6,35	30	190,50
Fósforos	Caja 90	2,96	10	29,60
Queroseno	Litro	7,50	30	225.—

501,50

6 — Aseo e higiene personal

Grupo I:

	Gasto mensual
	\$
Jabón de tocador (3 panes de 200 g)	86,40
Colonia, brillantina, fijador y cosméticos ..	289,80
Crema y hojas de afeitar	138.—
Loción para después de afeitarse	32,85
Dentífrico	76,50
Papel higiénico (2 rollos)	35,60
Pomada para lustrar zapatos (50 g.)	10,01

Grupo II:

Peluquería (corte de cabello familia)	400.—
	1.069,16

7 — Movilidad

Traslado al trabajo	409,50
Traslado esposa e hijos	409,50
	819.—

8 — Escolaridad e información

	Gasto mensual
	\$
Educación y útiles escolares	427,58
Diarios	210.—
	637,58

9 — Esparcimiento y varios

Grupo I:

Recreación familiar	1.250.—
---------------------------	---------

Grupo II:

Cigarrillos	750.—
Cotizaciones	100.—
Revistas semanales	200.—
	2.300.—